

DOCUMENTO

LA HISTORIA RECIENTE DE CHILE A TRAVÉS DE "LA SEMANA POLÍTICA" (CUARTA PARTE)

Miguel González Pino*

El presente documento corresponde a la última parte (de una serie de cuatro) de una antología de artículos publicados en la sección "La Semana Política" del diario *El Mercurio*.

La primera parte abarcó el período que va desde 1965 a 1970; la segunda, de enero de 1971 a septiembre de 1973, y la tercera del 11 de septiembre de 1973 a junio de 1978.¹

Este cuarto capítulo comienza en la fecha anterior y termina en marzo de 1982, época en que don Arturo Fontaine Aldunate cesa de escribir estos comentarios.

En este último grupo de comentarios se acentúa el carácter pedagógico de éstos, ya que tomando como punto de partida la actualidad política, el articulista va desarrollando sus propios planteamientos acerca del futuro de la institucionalidad chilena.

Uno de los temas más recurrentes en el período concierne a la relación que a juicio del comentarista debe existir entre el modelo económico que se está poniendo en práctica en el país y la conducta moral que han de exhibir quienes participan en la vida económica.²

* Abogado, periodista, investigador del Centro de Estudios Públicos; Fiscal del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación.

¹ Véase *Estudios Públicos* 45, 46 y 47.

² Véanse por ejemplo los artículos "Modelo y moral", del 23 de noviembre de 1980, y "El factor moral", del 17 de mayo de 1981.

El tema moral nuevamente es destacado cuando se reflexiona sobre las cualidades que debe tener quien desarrolla una función pública, así como cuando se refiere tanto a la labor de los servicios de inteligencia como a los crímenes que en su oportunidad conmovieron a la opinión pública.³

La polémica al interior del gobierno militar entre los sectores "duros" y "blandos" es seguida con interés por el autor, destacando las consecuencias que tendría para el país y para el gobierno el adoptar los caminos propuestos por uno u otro bando.⁴

Manteniendo una constante a lo largo del tiempo, dedica también su atención a los problemas relacionados con la libertad de expresión y la falta de comunicación expedita entre las autoridades, los legisladores y el público. Uno de los artículos expresa su pensamiento acerca del derecho a la libertad responsable en materia informativa.⁵

La antología se cierra con un artículo en que el comentarista manifiesta su preocupación por los problemas políticos y económicos por los que atraviesa el país, que derivan, entre otros factores, de la falta de comunicación entre la ciudadanía y el equipo de Gobierno, tema que como ya señalamos viene subrayando desde el comienzo del régimen militar.⁶

Tal como en las publicaciones anteriores, para mejor comprensión de los artículos se señalan al comienzo de cada uno, en cursiva, detalles acerca de los hechos comentados, con indicación de la fuente donde puede encontrarse la información respectiva, teniéndose presente en este caso que no siempre los artículos se refieren a hechos específicos o de conocimiento público; asimismo, al final del documento se incluye índice de los artículos reproducidos en esta sección.

³ Véase el artículo "Servicios de inteligencia", del 21 de junio de 1981.

⁴ Véase el artículo "Corrientes de opinión", del 30 de marzo de 1980.

⁵ Véase el artículo "Derecho a la libertad responsable", del 29 de junio de 1980.

⁶ El artículo en referencia se titula "Malos días", y es del 28 de marzo de 1982.

LA SEMANA POLÍTICA (1978-1982)

De la emergencia a la transición

(17 de septiembre de 1978)

El 11 de septiembre el general Pinochet lee su mensaje presidencial. En éste fija los términos de la transición hacia la democracia (EM, 12 septiembre), al cumplirse 5 años del pronunciamiento militar.

La Semana Política

DE LA EMERGENCIA A LA TRANSICIÓN

Es de toda evidencia que los hechos políticos importantes trascienden los límites de los proyectos constitucionales o de la voluntad de los gobiernos. Proyectos y gobiernos contribuyen a moldear la realidad política, pero cuando engruesa la corriente de ésta, unos y otros quedan sobrepasados.

El país ha escuchado con respeto y atención el Mensaje Presidencial correspondiente al cumplimiento del quinto año del Gobierno establecido el 11 de septiembre de 1973. En dicho Mensaje S.E. delinea un itinerario político y fija los términos del período de transición que mediará entre el estado de emergencia y el funcionamiento pleno de los órganos constitucionales nuevos.

Hay que considerar, sin embargo, que muchos de los avances anunciados y alentados por el Presidente no vienen sino a reconocer un cuadro social y político derivado de las circunstancias, algunas de

las cuales están puestas por el Gobierno, pero muchas otras son independientes de él y en cierto modo se le imponen. Esto ocurre con el período de transición.

S.E. fijó las características y términos de tal lapso en el Mensaje, pero lo cierto es que va imponiéndose por sí solo un período de transición, que aparece como fruto de los buenos resultados del régimen militar, como consecuencia del transcurso del tiempo y, por último, como efecto de las mayores expectativas y presiones sociales.

Más interés que el análisis de las características del período de transición programado y del juicio acerca de ellas tiene el considerar las actitudes y valores que jueguen en dicho período, es decir, las posiciones que pueden asumir los ciudadanos como sujetos de la transición.

Desde luego, resulta evidente que la sociedad chilena de hoy se expresa con más soltura que en cualquier otro momento durante el quinquenio. Las informaciones, las

peticiones y las críticas se dejan oír con la mayor claridad. Más aún, resulta inconcebible que —sin mediar gravísimas circunstancias, percibidas por el grueso de los ciudadanos— pudiera volverse a las necesarias pero duras etapas precedentes. Parece más sensato pensar que el clima de libertad se irá afianzando y que la vuelta atrás sería una victoria frágil del autoritarismo logrado a costa de una peligrosa merma de la base social del Gobierno.

Si esta soltura del sistema es un hecho, la normalidad del proceso va a depender de que el Gobierno y la ciudadanía se habitúen a la nueva situación y convivan en este clima.

Para los sectores de oposición, el período transitorio se plantea lleno de exigencias. Ellas están implícitas en el hecho de que el Gobierno y las Fuerzas Armadas actúan bajo el profundo convencimiento de que no pueden volver a presentarse los factores que destruyeron la armonía cívica y la paz social. Esta persuasión no pertenece sólo a una autoridad, a un gobierno, a una institución armada, sino que es compartida por la totalidad de las Fuerzas Armadas, desde su personal permanente hasta su cúspide que es el general Pinochet. Podrá haber puntos de vista en sectores del Gobierno acerca del modo concreto de evitar que regresen el caos y la anarquía, pero existe unanimidad militar y civil en cuanto al rechazo de una vuelta atrás. Esto impone prudencia a los sectores opositores.

En el período de transición, y también desde ahora, todo lo que hagan los sectores políticos por mantenerse en una crítica objetiva ausente de distorsiones, por evitar

apasionamientos perturbadores y por no perder de vista la realidad de la nueva presencia institucional de las Fuerzas Armadas en la República será un efectivo aporte a la paz, a la justicia y a la futura normalidad de la convivencia entre los chilenos. Los extremismos verbales y los notorios trabajos de agitación, en cambio, no contribuyen sino a frustrar las posibilidades de evolución pacífica, que se encuentran siempre vivas en la tradición chilena y que parecen la única salida razonable a largo plazo, después de la crisis del sistema político evidenciada en 1973.

El Gobierno, por su parte, habrá de encontrarse en la necesidad de reconocer hechos indiscutibles y evidentes. Por ejemplo, la existencia real de grupos políticos, de tendencias partidistas. Podrá S.E. situarse en contra de todos los políticos, pero no le será posible desconocer la realidad de ellos. Tal vez sería preferible que existieran también grupos políticos que apoyen libremente los programas del Gobierno; pero lo que no se ve como concordante con el estado del país es suprimir, en abstracto, el hecho innegable de que hay tendencias y corrientes políticas. Igual ocurre con el problema laboral, punto en que correspondería actuar con rapidez, a fin de impedir la proliferación de los conflictos o la solución permanente de éstos con el uso de la fuerza.

Los partidarios del Gobierno necesitarán habituarse por su parte a la idea de que el país no puede vivir por tiempo indefinido bajo la protección de las Fuerzas Armadas. Los civiles participan activa y eficazmente en el Ministerio que encabe-

za el titular del Interior, señor Sergio Fernández, pero los que no tienen cargos públicos suelen perder el lazo indispensable de solidaridad con el régimen. Una situación de paz y de futuro desarrollo, que tanto costo humano y material representa, no se ha formado para el enriquecimiento de unos pocos sino para ampliar las oportunidades de muchos. La libertad económica en un clima de orden se mantendrá si se mueven poderosas influencias para asegurar también un clima de justicia. La acción pública, la acción en las comunidades locales, en el medio universitario, en las agrupaciones sociales, irán imponiéndose como una necesidad frente a las inevitables presiones y críticas de los sectores políticos opuestos al régimen.

DISCIPLINA CON NEGOCIACIÓN

En el período transitorio a que nos referimos, el tiempo tendría que aprovecharse para cambiar el género de relaciones humanas que ha caracterizado a la sociedad chilena en el curso del último decenio y que parece incompatible con un sistema de convivencia libre y a la vez disciplinada.

En 1964 llega al poder en Chile una ideología, una concepción global y cerrada, un sistema planetario propio, como fue la administración democratacratiana. Después de ella vino nada menos que la ideología marxista, sembrada confusamente, es cierto, y equívoca muchas veces, pero en definitiva creciendo bajo el generoso riego soviético. La crisis del régimen político fue zanjada por las Fuerzas Armadas. Estas impusieron un marco de disciplina en lo político y han respaldado un modelo

económico propio de una sociedad libre pero que, en sus primeras etapas, necesita de la fuerza para derribar los visibles y oscuros poderes que resisten la libertad.

Las ideologías han destruido un elemento muy importante de la convivencia civilizada: la negociación.

A través de la propaganda de la movilización política de las masas y de la presión administrativa y legislativa, las ideologías impusieron sus propios dictados.

En general, los sectores desplazados del poder perdieron la posibilidad de negociar sus derechos e intereses, presionados como estaban por la propaganda o por el miedo. Sólo les quedaron la protesta y la violencia moral o física. Esta situación hirió profundamente la vida social y política, y se reflejó tanto en el amplio escenario de la vida pública como en el campo de la actividad sindical o vecinal, hasta llegar al extremo en que cada modesto punto de encuentro, en el nivel familiar, de barrio, de deporte, de cooperativa, de sindicato, de escuela, alcanzó a convertirse casi en un campo de batalla. Ello empezó a ocurrir durante el régimen del Presidente Allende.

El desorden resultante de la politización ideológica forzada y de la resistencia inevitable que traía aparejada se conjuró con el pronunciamiento militar. Pero, como era natural, los militares reemplazaron la imposición ideológica por su propio estilo de mando. Ellos están formados para el combate con el adversario. Dan pruebas por eso de una extraordinaria y conmovedora solidaridad de camaradas entre los iguales en jerarquía, y de una pre-

ocupación humana profunda por los subordinados, todo lo cual contribuye a vigorizar la capacidad de lucha de la unidad armada, cuyos valores éticos de disciplina, caballería, coraje y autorrenunciamiento están vinculados a las exigencias de la guerra, incluido el sacrificio final y definitivo.

Los militares están en lo suyo siendo fieles a su propia ética.

Esta es generosa y amigable con el camarada, pero presupone el enfrentamiento con el adversario. La distinción amigo—enemigo, que algún autor germano caracterizó como esencial en la política, se da con especial claridad en la visión castrense del mundo. Si hay conversación con el enemigo, ésta tiene generalmente una naturaleza táctica y de algún modo preparatoria del enfrentamiento decisivo. Estas características, que son virtudes en el ámbito militar, no calzan con la misión civil, ni en el campo de la política ni en el plano laboral ni en ningún otro. El civil—desarmado por esencia—no tiene como herramienta básica de trabajo la imposición sino la negociación, para llegar al contrato, al acuerdo, al tratado.

En el próximo período de transición será difícil que los civiles persistan en ampararse en la ética militar—y, de alguna manera en imitarla—; al seguir imponiendo soluciones al vencido—vencido

real o simulado—, en vez de conversar respetuosamente con el igual, tratando de encontrar fórmulas que sean de interés para ambas partes. La negociación, la negociación laboral, política, comercial o de cualquier otro ramo, no merece la connotación despectiva con que suele ser mencionada. Por el contrario, ella es el sello de la labor civil y tal vez la base de las grandes creaciones históricas que, no por casualidad, se han denominado civilizaciones.

Cierto es que la historia muestra que los valores más preciados y definitivos se han disputado con la fuerza. Tal es la significación trascendente del oficio militar. Sin embargo, cada cual en el país debe ocupar su puesto: lo irregular es que los civiles dejen el suyo y se atengan a la superior instancia de la fuerza, en vez de empeñarse en su propia tarea y ejercer la persuasión fundada en el respeto al presunto adversario, negociando, intercambiando, asegurando los sustancial con sacrificio de lo accidental. El período de transición que anuncia S.E. es sobre todo un llamado a tomar conciencia acerca de la necesidad de un cambio significativo de la conducta interna de los particulares y también de las autoridades. Es el paso entre una situación típicamente militar y un sistema de participación civil, bajo la protección de las Fuerzas Armadas.

Una marcha cautelosa

(12 de noviembre de 1978)

El 27 de octubre, por cadena de radio y televisión, el Ministro del Trabajo, Vasco Costa, anunció que el martes 31 se procedería a la renovación de las directivas sindicales de empresas del sector privado, para lo cual se votaría en cada sindicato, sin nombramiento previo de candidatos. Se estableció que no podían ser reelegidos actuales dirigentes, ni personas con participación en política partidista.

El día martes 31 se realizaron en todos los sindicatos de empresas privadas las elecciones de dirigentes, tal como estaba anunciado.

Por decreto publicado en el Diario Oficial del 20 de octubre se declararon ilícitas siete organizaciones sindicales, y se establecieron sanciones para quienes asuman representación de sectores laborales sin tener la personería legal para ello.

La Semana Política

UNA MARCHA CAUTELOSA

El régimen militar ha dejado sentada muchas veces la firme convicción de que el propósito de la Junta de Gobierno y de las Fuerzas Armadas es organizar una institucionalidad definitiva. El régimen no se acepta a sí mismo como una mera transición entre dos períodos de democracia parlamentaria y partidista. Por el contrario, busca ser una expresión orgánica de la nacionalidad que, sin renunciar a los principios y tradiciones esenciales de ésta, encauce un desarrollo más íntegro, pleno y rápido que el logrado por los modelos anteriores.

Más de cinco años de esfuerzos ilustran acerca de la dificultad de la empresa: nuestro país tiene una larga tradición intervencionista en el plano económico y en otros; la burocracia y el centralismo administrativo se insertan en esta tradición;

a ello hay que añadir la alta politización, corolario de los caracteres anteriores. Mucho ha hecho el Gobierno del Presidente Pinochet por imponer con éxito un modelo económico de libertad, de descentralización y desburocratización, modelo que tiende a despolitizar al país o, mejor dicho, a desvincular la preocupación partidista de la subsistencia económica de los ciudadanos. Sin embargo, los antiguos prejuicios vuelven a las suyas en cualquier oportunidad favorable. La meta es clara y ha probado ser accesible, pero el logro del triunfo se ve a menudo perturbado por las debilidades o precipitaciones correspondientes a los antiguos hábitos.

En la marcha hacia la institucionalidad se levantan voces reclamando participación. En esto conviene distinguir entre el inmovilismo, que aspira a permanecer en la campana de vidrio de la protección

militar, y las impacencias que urgen la adopción de medidas liberales sin advertir que la liberalización será fecunda sólo si se evita distorsionar la naturaleza de las actividades en que la participación opera. Entre el extremo de una ciudadanía pasiva, que aguarda la decisión oficial y se somete irreflexivamente a ella, por una parte, y por otra, la situación anárquica en que los segmentos de la colectividad pretenden derechos, poder, control y autonomía, desarticulando la unidad y el trabajo nacionales, debe haber una línea media.

El 31 de octubre el país fue a una renovación de las directivas sindicales, dando un paso hacia la democracia laboral, al tiempo que hacia la despolitización de los sindicatos. No es imposible que elementos políticos se hayan infiltrado en las directivas nuevas. Ello formaba parte de los presupuestos formulados por el Gobierno al decretar la medida. Más aún, resulta fácil imaginar que en una elección sindical sorpresiva los elementos más organizados tenían mejor opción de imponerse. Y no es hacerles un regalo a los comunistas si se les concede que pueden ser los más idóneos para trabajar sincronizadamente en la clandestinidad.

Lo importante es que los sectores que apoyan al Gobierno sean tan resueltos como cautelosos frente a las medidas de participación ciudadana. Esta es necesaria y proporciona un respaldo insustituible a la acción a largo plazo del Gobierno, pero constituye al propio tiempo una oportunidad para que elementos de agitación y demagogia se hagan presentes.

Tanto la autoridad como la ciu-

dadanía han de alentar la participación con ojo vigilante, teniendo plena conciencia de que el paso del paternalismo a una gestión responsable de la comunidad presenta obstáculos y que sería tanto o más regresivo que el endurecimiento dictatorial el gesto de abrir irreflexivamente puertas y permitir desafueros, pues el consiguiente desorden traería una reafirmación autoritaria tal vez menos inspirada en los fines de bien público que animan a este Gobierno.

El fenómeno de la participación ha de darse en medios y circunstancias en que ella sea posible. Tenemos así que los sindicatos van a tener presumiblemente una participación real en el sentido de que sus dirigentes harán oír la voz de los trabajadores, se acercarán a la empresa en procura de mejores condiciones ambientales, salariales y sociales para sus compañeros, y encabezarán a éstos en las próximas negociaciones colectivas. Hay posibilidades de que elementos subversivos perturben el diálogo entre sindicatos y empresas, frustrando los objetivos de las directivas sindicales serias. Sin embargo, la realidad del trabajo y el género de relación entre los trabajadores y la empresa o entre los propios trabajadores como asociados a una labor, forman un marco de hechos concretos, de necesidades apremiantes y de juicios prácticos, en el cual no cabe la divagación, sea ésta política o ideológica, y en que la acción de dirigentes conocedores del contexto económico en que actúan debiera bastar para una negociación laboral eficiente, así como para una convivencia fecunda entre los elementos de la empresa.

EL TEMA ESTUDIANTIL

Nuestras columnas han estado advirtiendo con extraordinaria insistencia acerca de la Universidad y de los estudiantes. Sabemos que allí residen la fuente de la cultura nacional, el poder moldeador de las generaciones, el núcleo de los dirigentes intelectuales del país y, en los momentos de malestar, el explosivo social y político que desafía gobiernos y estructuras.

Ha cundido últimamente la idea de la participación estudiantil, fenómeno que hace resucitar viejas fórmulas reformistas universitarias y que evoca pasadas situaciones tempestuosas que afectaron a los claustros y a toda la vida nacional.

El Gobierno descubrió la modalidad adecuada para que los trabajadores de cada empresa se organizaran en sindicatos y se prepararan para una actividad laboral intensa, profesional y llena de expectativas.

El tema estudiantil es diferente. Por de pronto, los jóvenes carecen en general de los apremios familiares que recaen sobre los trabajadores y, aunque los tengan, ellos no pueden satisfacerse sino muy restringidamente dentro de la comunidad universitaria. Constituir a las organizaciones de estudiantes en centros de lucha y exigencia frente a las autoridades es confundir la pugna natural entre quienes participan de un determinado producto (caso del sindicato y de la empresa) con un grupo humano que ocupa sus mejores años en formarse intelectualmente, en adquirir los hábitos de disciplina moral y científica y en prepararse para un futuro desempeño fecundo en las actividades superiores de la comunidad. En

ciertas circunstancias grupos de estudiantes suelen ser reclutados por los agitadores ideológicos para que se sumen a una lucha insensata contra sus maestros, identificando a éstos con un sistema social y político que supuestamente la juventud debería repudiar.

Si la organización sindical parece indispensable como instrumento de defensa de los salarios, las tentativas de organización gremial de los estudiantes merecen serias dudas. Estos últimos no corren peligro alguno de sufrir mermas en sus ingresos como consecuencia de su desorganización gremial y, en cambio, al asimilarse consciente o inconscientemente a los sindicatos, dejan entrar las pugnas por el poder y aceptan una política que resulta tanto más perniciosa cuanto que los implicados en ella no tienen nada que perder ni en sus afirmaciones demagógicas ni en sus lucubraciones revolucionarias.

Debe insistirse en que la Universidad tiene fines propios consistentes en el cultivo y difusión de la ciencia. Ahora bien, entre los cultivadores del saber intelectual caben diferencias de principios, mas no pugnas de intereses, como ocurre en el campo de la política o del mercado. De ahí que tanto en las grandes universidades norteamericanas como en las universidades soviéticas las preocupaciones de la juventud son el estudio —y mucho más que en las grandes competencias deportivas— la pugna por superar marcos de investigación, de creación o de comprensión.

De ahí que parezca un tanto anacrónica y, desde luego, reñida con el modelo económico y social en vigencia esta participación estu-

diantil, que, en el hecho, puede comportar la introducción de la política en la Universidad y la excusa para que los mejores talentos juveniles se empleen en la dialéctica partidista en vez de consumir sus horas en formarse como hombres, como intelectuales, como científicos, como profesores, como profesionales.

El tema de la participación en el campo de los trabajadores significa una cosa muy concreta: sus representantes deben actuar a la hora de las dificultades reales entre un hombre y su empleador, o entre todos los trabajadores y su empresa.

La participación estudiantil plantea dificultades en la medida en que se la conciba olvidando que la primera tarea de los estudiantes y de toda la Universidad es luchar día y noche por el estudio. En los países grandes el estudio no aparece como una posición de tímidos y conformistas, sino como la conducta necesaria de quien se llama precisamente estudiante. De este modo, en lugar de vagas inquietudes y de grandes palabras vacías, los universitarios almacenan la capacidad intelectual que van a poner después al servicio de los demás y de ellos mismos.

¿Política en la Universidad? En las grandes facultades no debiera haber tiempo para la política. Los currículos de las carreras importantes, las exigencias de la investiga-

ción y del aprendizaje no dejan espacio para la actividad partidista, salvo en casos muy excepcionales. Lo normal será que la política constituya un producto ajeno a la Universidad, introducido a ella por manos también ajenas.

Nuestro país está dando grandes pasos en un camino sensato, que no resulta popular en el mundo de hoy, pero cuyos logros de paz y bienestar están quedando a la vista. Ese camino sensato consiste en el respeto a la naturaleza de las cosas y en empeñarse, por tanto, en convertir la economía en economía, el subsidio en subsidio, el empresario en empresario, el trabajador en trabajador, es decir, exigiendo a cada actividad y a cada persona el resultado o la responsabilidad que les son propios. La Universidad y, en general, la educación habían sido desnaturalizadas en un largo proceso de desquiciamiento. Parece oportuno que las concepciones en este campo guarden coincidencia con el camino sensato que hablamos. La participación estudiantil puede ser conveniente o inevitable, pero lo verdaderamente importante es que la vida de los estudiantes sea llenada por la propia Universidad, en término de que ellos aprovechen el tiempo precioso de que disponen y de que esta última sea realmente el centro de ciencia y de irradiación intelectual que el país necesita.

El valor de la función pública

(4 de febrero de 1979)

Víctima de un accidente, al derrumbarse el balcón de su casa de descanso, fallece el Alcalde de Santiago Patricio Mekis Spikin, quien anteriormente había desempeñado el cargo en Rancagua, y había sido también diputado.

La Semana Política

EL VALOR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El inesperado fallecimiento del Alcalde de Santiago, don Patricio Mekis, ha sacudido a la ciudadanía, poniendo en evidencia los grandes méritos cívicos del desaparecido, que nadie ignoraba en lo que atañía al círculo de los intereses y predilecciones de cada cual, pero que mostraron toda su vastedad y profundidad cuando vino a faltar el Alcalde.

Mucho podría seguirse diciéndolo sobre esta personalidad sobresaliente sin agotar sus valores, pero tal vez sea oportuno insistir en el sentido ejemplar que tiene la consagración plena del señor Mekis a la función pública. En alguna forma, todos en Rancagua y en Santiago recibieron algo de él, y ello ocurrió porque supo dedicarse al bien común.

No faltan servidores del pueblo o del Estado en sentido abstracto, atentos más al ejercicio del poder que al servicio de los demás. Concebir, por eso, la función pública como una manera de atender a las necesidades de cada una y de todas las personas que forman una comunidad es dar a aquella un rango superior y delinear la figura de quien la ejerce, del funcionario, del servidor público, con los atributos más nobles y generosos.

Don Patricio Mekis, un modelo de servicio del interés público, supo en realidad atender a la gente de carne y hueso y entendió que el bien de un pueblo está constituido por principios jurídicos y por cuantificaciones económicas, pero que en concreto se compone de paz, de alegría, de bienestar y de vida.

El servidor público Patricio Mekis no fue un burócrata. Literalmente hizo más inspección y acción en el terreno que meditación en el escritorio. Entendía su papel como el de un animador, movilizador y coordinador de energías antes que de un tramitador de documentos.

El alto funcionario Patricio Mekis no se oponía a las iniciativas sino que estaba pronto a canalizarlas, y no atacaba los obstáculos a sus planes sino que los soslayaba con soluciones de alternativa. Su amplia labor municipal estuvo marcada por un dinamismo y una capacidad realizadora que eran profundamente respetuosos de la libertad ajena y en que los ciudadanos se veían sumados al trabajo común en vez de restados o rechazados por la autoridad.

El desaparecido Alcalde de Santiago aparece hoy como modelo no sólo para cualquier autoridad edilicia o cualquier autoridad en general, sino también para el más mo-

desto de los funcionarios públicos o municipales. El ha mostrado en la práctica la elevada dignidad de la función pública, el sentido humano de la misma y la oportunidad que ella ofrece de servir al bien común en la persona de cada uno de los solicitantes o de quienes se relacionan de cualquier modo con el que está investido de una función pública.

La muerte fulminante de don Diego Portales hizo ver al país con especial transparencia las líneas severas del edificio jurídico y político de la República, permitiendo que surgieran herederos y seguidores en cuyos hombros continuó y perduró la gran construcción.

En otra escala, la brusca desaparición del Alcalde don Patricio Mekis en plena labor creadora parece hacernos evidenciar no tan sólo la magnitud de su obra, sino el sentido y el valor de la función pública en una sociedad libre. En vez de atender a las abstracciones, ocuparse de la gente real; en lugar de atacar y de humillar, conciliar y atraer; en vez de oprimir, liberar; no servir los intereses propios sino los públicos; ejercer la justicia sin fariseísmos ni legalismos obstruccionistas; respetar a todos y trabajar sin descanso por el bien común. He aquí algunos de los rasgos que caracterizaron la conducta del Alcalde Mekis y que, si en él tuvieron una expresión particularmente completa e intensa, no son por cierto monopolio de su persona.

EL FUNCIONARIO EN ESTE RÉGIMEN

La transformación que se está operando en el país no se reduce a

aumentar la órbita de acción de los particulares y disminuir el tamaño del sector público. Va mucho más allá. Mira a incrementar efectivamente la libertad de los ciudadanos y a cambiar por tanto la relación entre ellos y el Estado. Se tiende a dejar atrás los paternalismos, dirigismos y proteccionismos. Se busca tratar al ciudadano como persona adulta y dueña de su destino.

Lo dicho no implica que el sector público deba batirse en retirada ni aceptar que se desconozca la importancia de las grandes funciones del Estado. Muy por el contrario, eliminada mucha actividad insubstancial o innecesaria, se vigorizan las ramas decisivas de la actividad pública. Un caso concreto es el de los alcaldes. Del papel virtualmente simbólico que tuvieron casi siempre en anteriores épocas, los nuevos alcaldes han pasado a ser líderes de su comunidad y enriquecedores de la vida urbana de sus conciudadanos. A medida que la participación de los vecinos se acentúe en los municipios, éstos y los alcaldes serán cada vez un núcleo más vigoroso de vida cívica.

El funcionario público habrá de prepararse para coadyuvar al desarrollo de la sociedad libre. Imbuido en la necesidad de servir a las personas que solicitan apoyo o que hacen valer derechos, el funcionario puede desempeñar una misión ennobecedora para él y absolutamente positiva para la comunidad. Buscando aliviar la vida de los ciudadanos y cumplir muy responsablemente su propia tarea, el servidor público obtendrá el reconocimiento social que necesita y la compensación económica a que tiene derecho. Cuando el mal de la burocracia

se supere y la función pública vuelva a la plenitud de su antiguo prestigio, el Estado, el municipio, el empleado público o municipal volverán a considerarse en su dimensión verdadera, es decir, como promotores del bien, de la dignidad y de la libertad de las personas.

LA CAMPAÑA DE DESBUROCRATIZACION

Bajo esta luz positiva parece enfocarse el proceso de desburocratización que encabeza el Ministro del Interior, don Sergio Fernández, asesorado por los expertos de ODEPLAN.

Aumentar la eficiencia de los servicios, liberar al ciudadano de las trabas burocráticas innecesarias es contribuir al desenvolvimiento de una sociedad libre.

Dicho proceso no puede confundirse con el simple hostigamiento de los funcionarios y con una desvalorización moral de sus servicios al país. A la inversa, desburocratizar implica elevar la función pública, quedándose con lo que ella tiene de indispensable y más valioso, con lo que sirve de veras al bien común.

Siempre será necesaria la función pública para reunir las energías dispersas y para moverlas hacia un objetivo que no logran alcanzar los particulares aislados. Este es, por lo demás, el sentido propósito de la existencia del Estado y de la autoridad civil. Pero en la medida en que la acción funcionaria sea más descubridora de nuevas metas, más dinámica y diligente, más liberal será respecto de los ciudadanos particulares, pues éstos actuarán por el prestigio de aquella acción y no por el solo temor a sanciones.

En un esquema como el que está entrando en vigor, lo normal es que la Administración haga fe en los particulares, atendiendo a que la gran mayoría de las personas se comporta correctamente y es cumplidora del orden legal. De este modo, la acción fiscalizadora y represiva se concentrará eficazmente en los sectores minoritarios sorprendidos violando la ley. En vez de una fiscalización preventiva que deja inevitablemente escapar infracciones, es preferible una ejemplar sanción a los delitos que efectivamente se descubran usando un aparato fiscalizador especializado.

Nadie ha pretendido que la campaña de desburocratización sea una especie de inversión en los términos según la cual el fiscalizador se convierte en fiscalizado y el ladrón andaría tras el juez. No se trata de llevar adelante una cierta demagogia que, aparentando favorecer al ciudadano común, denigre y deprime al funcionario correcto u ofenda a los servicios o a los jefes de éstos.

Se trata de imprimir un nuevo espíritu a los funcionarios y servicios públicos, encaminado a la atención de las necesidades concretas de los ciudadanos y al logro de la mayor eficiencia en el otorgamiento de los beneficios que se reclaman de la Administración. Es un espíritu de respeto a los solicitantes y de búsqueda de las mejores soluciones a las demandas legítimas de éstos. El papel, el trámite y el requisito no han de convertirse en fines sino considerarse medios dirigidos a la satisfacción expedita de las necesidades y justos requerimiento de las personas. En la misma medida en que tales medios no

cumplan su fin propio, habrán de cambiarse por otros o suprimirse.

El nuevo espíritu ha de ser de superación de las limitaciones inútiles y de las trabas que injustamente recaen sobre la libertad de los ciudadanos. Debe ser de aliento y empuje a la iniciativa, a la personalidad y a la responsabilidad de los particulares, así como de sanción implacable a los que burlan la ley.

La desburocratización marcha a pasos cortos porque tiene que detenerse en muchos detalles del frondoso bosque administrativo. Supone a veces medidas que parecen accidentales a primera vista. En fin, la tramitación de las resoluciones desburocratizadoras tropieza nada menos que con la propia burocracia, que las hace objeto de reparos, enmiendas y tardanzas. Todo esto determina que la tentativa de simplificar las operaciones del Estado y demás entes públicos, orientán-

dolos al servicio de las necesidades reales y concretas de las personas, aparezca apenas bosquejada y en una fase incipiente.

El espíritu y el carácter de esta reforma se harán más visibles cuando funciones enteras pierdan su objeto. Ya ha ocurrido esto en gran escala en el Ministerio de Agricultura, bajo la dirección eficaz de su titular, señor Alfonso Márquez de la Plata. Es posible que en otras áreas deba ocurrir algo análogo. Demostrada no sólo la inutilidad del trámite sino de la oficina que lo exige, la simplificación llegará más hondo y será más completa.

En último término, la desburocratización es el nuevo espíritu del servicio público: atención directa de los asuntos y la solución definitiva y expedita de los problemas. La figura del Alcalde Mekis fue una encarnación viva de ese nuevo espíritu.

Libertad de expresión en el futuro institucional

(18 de febrero de 1979)

Con ocasión del Día de la Prensa, se recogen expresiones del Presidente Pinochet al respecto durante su gira al norte del país, y se critica al anteproyecto constitucional en lo que se refiere a la libertad de expresión.

La Semana Política

S.E. Y LA PRENSA

El Presidente de la República sostuvo durante su gira por el norte, en Iquique, que la libertad de prensa es un elemento esencial de la normalización institucional. Sus palabras, con ocasión del Día de la Prensa, recogieron la doctrina de un viejo consenso chileno acerca de la necesidad de información amplia, opinión y crítica independiente.

"Después de la primera etapa de nuestro Gobierno, que por la naturaleza de la situación exigía restricciones fácilmente comprensibles —dijo S.E.—, la actividad periodística se ha ido desarrollando paulatinamente con mayor normalidad, dentro de la evolución cada día más favorable de nuestro frente interno". El mérito de esta afirmación, sin contar su realismo, es que vincula el curso favorable al despliegue informativo con las metas institucionales de un Chile democrático, grande y, sobre todo, verdaderamente libre".

El Gobierno, según el Presidente Pinochet, se ha esforzado en crear las condiciones para que florezca la libertad de expresión, "aceptando como necesaria y hasta indispensable la existencia de una crítica que, aunque a veces injusta, contri-

buya a remediar los errores que pueden presentarse en nuestra vida pública".

El pensamiento del Primer Mandatario sobre la función periodística no contiene, pues, ninguno de los elementos perturbadores que aún subsisten en la realidad de los preceptos legales o bien en la concepción teórica relativa al futuro institucional del país.

La contradicción que ello supone señalada en numerosas oportunidades por los organismos periodísticos, tiene sin embargo un significado altamente positivo: la normalización conducida por el Jefe del Estado ha caminado más rápido, incluso, que el reemplazo de las preceptivas legales diseñadas para el período de emergencia; hoy día no es posible negar de buena fe que existe un flujo informativo creciente y un intercambio cada vez más abierto de opiniones públicas. No obstante, como se ha dicho tantas veces, la sola existencia de algunas leyes y bandos que autorizan a medidas discrecionales en contra de la prensa causa daño irreparable e innecesario que desfigura el convencimiento libertario del Gobierno, cuando no impulsa a tomar alguna medida aislada contra un órgano de comunicación sin que éste posea mecanismos legales a los cuales

acudir para una revisión de disposiciones adoptadas tal vez injustamente o con demasía.

Una definición inconfundible, como la del Presidente, hace pensar, afortunadamente, que los obstáculos normativos que persisten serán rápidamente removidos para una mejor coherencia entre la realidad que vive la actividad periodística y el marco legal por el cual ella se rige.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL FUTURO INSTITUCIONAL

Reafirmar los conceptos básicos sobre libertad de expresión es ahora de mayor importancia, porque se acerca el debate sobre el futuro institucional, y también el veredicto del país sobre el proyecto constitucional definitivo que debe ser acordado por el Presidente de la República y la Junta de Gobierno.

El anteproyecto, que estudia desde noviembre pasado el Consejo de Estado, ha sido destacado en estas columnas como un intento serio de configurar un régimen institucional en libertad y con plena participación ciudadana. En él, las garantías constitucionales de la Carta de 1925 se ven reforzadas por contenidos nuevos sobre derechos humanos, contrapesos a la autoridad presidencial —que el mismo anteproyecto aumenta—, por un tratamiento del orden público económico que no existía, y por el cierre categórico a los totalitarismos así como al terrorismo.

Los valores del anteproyecto son muchos y de consistencia, aunque admiten crítica fundada en varios puntos específicos, ya insinuados en el debate público de los últimos meses. Entre los que deben enmen-

darse, desde luego, sobresale lo referente a la libertad de expresión, a la vez reconocida y negada en la práctica en la proposición formulada por la comisión de estudios de la nueva Constitución.

Como se ha señalado en una presentación conjunta del Colegio de Periodistas, de la Asociación Nacional de la Prensa y de la Asociación de Radiodifusoras de Chile, el articulado propuesto reconoce, efectivamente, la libertad de opinar e informar sin censura previa, pero se contradice a sí mismo al facultar a los tribunales para prohibir opiniones o informaciones en términos genéricos —en cuanto a las condiciones para fijar las sanciones—, lo cual significa un tipo de censura previa manejado por la magistratura, sin que el articulado tipifique lo sancionable y sin que se fijen plazos a la penalidad.

Como bien lo advirtió el Presidente Pinochet en Iquique, los medios de comunicación no pueden servir de vehículo a falsedades, intrigas y odios que en Chile socavaron gravemente la convivencia democrática. Nadie pretende impunidad para los delitos que se pueden cometer por medio de la prensa; nadie desea la invasión cobarde a la vida privada de las personas; nadie está dispuesto a confundir la libre expresión con el negocio pornográfico; nadie aceptaría privilegios para la prensa, pero otra cosa muy distinta es extraer de algunas prácticas lamentables del pasado, una reacción exagerada, verdadera camisa de fuerza para la información en lugar de aplicar soluciones jurídicas lógicas, que las hay, con el fin de castigar con rapidez y eficacia los delitos de prensa.

La confianza manifestada en esta misma oportunidad por S.E. "en la solidez espiritual de los periodistas chilenos, en su vocación auténtica, en su patriotismo", pone un certero punto de apoyo para revisar con altura, sin animosidades, esta materia delicada que define una característica esencial del régimen democrático. Despejado un aspecto claramente objetable como éste, en las instancias que correspondan, el debate institucional se canalizará de inmediato hacia los puntos centrales de la iniciativa destinada a superar en definitiva el período de emergencia con bases seguras de participación ciudadana democrática.

No debe olvidarse que el marxismo trabaja con propaganda "slogans" más o menos sofisticados, pero huye de la verdadera información, aquella que provoca reflexión, y forma puntos de vista consistentes, conciencias libres, críticas e independientes, como las que en Chile supieron ganar la batalla contra la amenaza totalitaria. Las tinieblas organizativas del partido moscovita se mueven cómodamente en ambientes restrictivos de la libertad de expresión. A diferencia de España, por ejemplo, Chile ha sabido traspasar rápidamente las limitaciones naturales de la emergencia de 1973, ganando en esta etapa la posibilidad de conjugar un régimen autoritario con una ciudadanía consciente e informada, y que se prepara, gradualmente, para el restablecimiento de los valores y mecanismos cívicos quebrantados.

EL SECRETO DEL CONSEJO DE ESTADO

El Consejo de Estado recibió el

anteproyecto constitucional el 31 de octubre pasado. Desde esa fecha ha despachado el estudio de los capítulos relativos a bases de la institucionalidad, nacionalidad y ciudadanía y garantías constitucionales. El trabajo es complejo, ya que se consideran con frecuencia aspectos de organización de los poderes públicos y, al mismo tiempo, deben revisarse cerca de 150 observaciones escritas presentadas por organismos de estudio, profesores universitarios, ex parlamentarios y particulares.

Sin embargo, el interesante análisis institucional que lleva a cabo el Consejo —integrado por personalidades relevantes de la vida nacional y con diferentes matices de opinión— no trasciende a la ciudadanía en virtud del secreto que rige por reglamento sus deliberaciones.

Es muy escasa la información que existe sobre la labor del Consejo de Estado en los casi tres años en que ha examinado importantes proyectos de ley para elevar sus conclusiones al Ejecutivo. Las disposiciones recientemente dictadas sobre aranceles profesionales, por ejemplo, fueron estudiadas por el Consejo, sin que haya trascendido su parecer sobre esta materia, que ha suscitado una fuerte controversia. Tampoco se ha conocido el informe sobre el trabajo del organismo elaborado hace algún tiempo por su presidente, señor Alessandri.

Es evidente que el Ejecutivo recibe el aporte del valioso y representativo conjunto de opiniones expresadas en el Consejo, pero al imponer secreto sobre ellas impide que graviten naturalmente sobre la ciudadanía. Esta situación sería especialmente lamentable si continuara en la discusión del tema

institucional. Hay que recordar que la Comisión de Estudios que redactó el anteproyecto también fue afectada a silencio, creándose así la más falsa idea sobre una virtual unanimidad previa en sus integrantes y limitando la posibilidad de que hombres públicos experimentados hubieran conocido sus textos oportunamente para haber hecho llegar a la misma comisión sus aportes —sin perjuicio de los que fueron llamados con este objeto—, dando lugar así a correcciones inmediatas, que habrían mejorado un proyecto muy deseable en sus concepciones básicas.

La creación del Consejo de Estado obedeció al interés del Ejecutivo de "ampliar el campo" de quienes hasta entonces intervenían en las resoluciones por adoptar, como lo admitió en su ceremonia

de constitución el presidente del organismo de consulta. Transcurrido el tiempo, modificadas favorablemente muchas circunstancias políticas, puede ser el momento de revisar también el sigilo impuesto al trabajo del Consejo, en bien de una mayor participación ciudadana que puede ser beneficiada con las opiniones muy escogidas que allí se vierten.

Esta decisión abriría, sin duda, nuevas posibilidades al consenso ciudadano, el que debe ser expresado por el nuevo texto institucional con la oportunidad suficiente para que el debate público se canalice por aspectos de fondo —y no demasiadas formalidades, como parece estar ocurriendo—, los que ilustrarán la decisión de la Junta de Gobierno en la presentación al país de un proyecto definitivo.

Un difícil proceso de comunicación

(15 de julio de 1979)

En una intervención por cadena de radio y televisión, el 1 de julio, el Ministro del Trabajo, José Pinera, anunció la dictación de 5 decretos leyes destinados a reformar la legislación laboral en materia de constitución de sindicatos, negociación colectiva y derecho a huelga, protección contra monopolios, subsidio por contratación de mano de obra adicional y regulación de asociaciones de empleadores. Además se modificó el Acta Constitucional número 3, en lo relativo a la libertad de trabajo y su protección (Diario Oficial, 5 de julio), y se confeccionó una tabla para comenzar con las negociaciones colectivas en las empresas.

La Semana Política

UN DIFÍCIL PROCESO DE COMUNICACIÓN

El Plan Laboral está ya lanzado, pero habrá de transcurrir un tiempo antes de que los trabajadores y los empresarios asimilen su espíritu y aprendan su mecánica. No es fácil hacerse cargo en pocos días de una legislación completamente nueva, que tiene muy variados aspectos y repercusiones, y que regula un amplísimo sector ciudadano en materias que inciden vitalmente en los presupuestos familiares de los trabajadores, así como de toda la población.

La dificultad de comprensión es mayor que en otros asuntos, por dos razones, entre otras: la primera, porque la opinión pública sólo conocía el esquema conceptual del programa, pero ignoraba por completo las disposiciones específicas que han entrado en vigor; la segunda, porque el Plan afecta intereses fundamentales de personas y grupos, los que, muy explícitamente, dan a conocer sus quejas, sus pro-

testas y sus asombros, contribuyendo a inquietar a los terceros que no han tomado posición en el problema.

De paso habrá que decir que sólo los ilusos podrían soñar en que un programa de esta naturaleza no suscitara resistencias y críticas. Más aún, parece sano que los afectados y heridos manifiesten su parecer, contribuyan a aclarar o rectificar los posibles errores que se hayan cometido y, en fin, subrayen que esta transformación profunda de la economía y de la sociedad tiene un costo que sería erróneo olvidar o menospreciar.

La realización de esta clase de planes suscita a veces, en las jerarquías medias o bajas, una actitud de descalificación del adversario, que resulta del todo inconveniente. La reforma agraria no sólo afectó patrimonialmente a los agricultores, sino que se implantó bajo calificativos deprimentes para los empresarios agrícolas, tachados entonces de feudales, oligarcas, explotadores e improductivos. Con menos violencia, algunos corifeos de la aper-

tura al comercio exterior y la nueva política económica emplearon tal vez demasiado a menudo el calificativo de ineficiente para el empresario chileno, que al cabo de muy poco tiempo ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse a las nuevas condiciones. Pues bien, es necesario que ahora la tacha de privilegiados para los trabajadores del cobre—independientemente del hecho de que el trato constitucional excepcional de que gozaban era un privilegio objetivo—o la ofensa personal a los viejos dirigentes sindicales se vaya desterrando del debate. Es injusto y hasta perjudicial ahondar las heridas que el programa inflige por sí mismo.

Pero, en medio de las inevitables incomprendiones y de los apasionamientos propios de las circunstancias, el Plan Laboral debe avanzar en el conocimiento público, en la comprensión de los verdaderos beneficiados con el sistema.

Este punto no es sólo característica del Plan Laboral, sino de casi todos los programas importantes del actual Gobierno. En vista de la trasmutación de valores y hábitos que ellos implican, las autoridades prefieren operar literalmente por sorpresa y copar las defensas de los intereses creados antes de que hayan podido tomar las armas. De este modo, muchas decisiones definitivas se han adoptado sin que el público las conociera antes de su publicación en el *Diario Oficial* o en informaciones de prensa que dejan testimonio de hecho consumado. Aunque dicha táctica difiera de las normas y prácticas habituales en la convivencia política, forzoso es reconocer que ha permitido estructu-

rar un esquema económico y social que mira a solucionar los problemas nacionales de fondo, sin atender a los puntos de vista de los círculos particulares.

Este último aspecto es positivo, pero ofrece un inconveniente que debe registrarse. Mientras mayores son la novedad y la profundidad de las reformas emprendidas, más posible es que se distancien del Gobierno los círculos que conforman la opinión pública, puesto que prácticamente todos los intereses protegidos por el antiguo sistema, desde los políticos hasta los sindicales, pasando por la gama de los intereses económicos, sufren en algún momento la acometida. Entre tanto, los actuales o futuros beneficiados con el nuevo sistema -trabajadores de base, personas en extrema pobreza, sectores no apadrinados políticamente, etc.- no tienen conocimiento del alcance concreto de las medidas del Gobierno mientras que sufren las consecuencias de la todavía difícil situación económica.

En un comentario editorial formulábamos algunas sugerencias prácticas, luego de hacer presente la falta de llegada a la gran masa de mensajes verdaderamente educativos y explicativos acerca del Plan Laboral, materia que, por su naturaleza, escapa a las tareas periódicas.

Lo que se dice del Plan Laboral resulta aplicable a los demás grandes planes del Gobierno. Los regímenes no se apoyan en sus perspectivas futuras ni en su sola fuerza. Requieren de opinión pública. Un sistema profundamente transformador encuentra aliados entre los que beneficia y sólo por desprendido patriotismo puede atraer a al-

gunos de los que perjudica. De ahí es que, a falta de una deseable comunicación a través del debate público previo a las decisiones, no le cabe al Gobierno otro camino que realizar una labor formativa e informativa directa en los niveles bajos y masivos de la población, allá donde los medios de comunicación social no llegan o transmiten otro género de informaciones.

OTRA VISION DE LAS RELACIONES LABORALES

Debe esperarse, pues, un largo proceso de comunicación y de debate acerca del Plan Laboral en todos los planos.

Para la opinión pública puede ser tal vez interesante que se tome en cuenta un punto de partida elemental para formarse juicio sobre el problema.

La visión habitual de las relaciones entre empresarios y trabajadores ha sido la de un sistema estático, es decir, de un producto que permanece más o menos igual -cuando no se deteriora- y que debe ser disputado palmo a palmo entre dos bandos en guerra: los capitalistas y los asalariados. Esta concepción, de la cual partió el propio Marx, como era lógico en su tiempo, supone un concepto artificial de clases sociales divididas sólo por el proceso de producción y, además, un concepto de dicho proceso que no se aviene a la realidad de hoy. La imagen de la torta que se trata de repartir es ilustrativa acerca de la inmovilidad del proceso que está en el trasfondo de la antigua negociación colectiva y de la organización sindical.

En dicha concepción estática, la determinación de quién es el que se queda con una porción más grande de la torta tiene que estar entregada a la fuerza de cada uno de los dos supuestos contrincantes. En esta perspectiva, el Plan Laboral aparece como un instrumento para debilitar o desmenuzar la fuerza de los trabajadores que -según la misma tesis- debería manejarse en un puño.

Sorprende que esta interpretación no se maneje tan sólo por marxistas confesos o subrepticios, sino por toda una variedad de políticos y observadores que, a veces sin querer, reflejan algunas ideas que han pasado a ser moneda corriente y universal, aunque están marcadas con el sello de una posición doctrinaria bien definida.

El Plan Laboral parte de una concepción dinámica de la economía, que supone el crecimiento del producto gracias a los diversos agentes económicos. Sostiene, en principio, que el factor óptimo de aumento de remuneración de los agentes económicos es la productividad de los mismos. Se apoya, además, en la realidad de un sistema de competencia. De ahí, entonces, que la antigua lucha por las porciones de la torta carezca de sentido si, en el fondo, se traduce, ya sea en un aumento de los precios que desplaza a la empresa del mercado, ya sea en un desaliento de cualquiera de los factores de producción que haga perder su productividad al conjunto.

No se trata de una pintura idílica de las relaciones laborales que ignore las oposiciones de intereses dentro de la empresa. Muy por el contrario, esta concepción acepta una multiplicidad de conflictos posibles, alejándose del esquema bi-

lateral y maniqueo de dos bandos excluyentes y enfrentados. Tampoco rechaza la tesis a que nos referimos el que existan incompatibilidades, injusticias y luchas en este campo. Sin embargo, ella lleva implícito el concepto de que el interés común de los agrupados en la empresa tiene más valor que los intereses parciales que los divide.

En concreto, el Plan Laboral supone que el interés común dentro de la empresa es la subsistencia de la misma en condiciones de competir en el mercado. De este hecho elemental depende la remuneración de todos los factores productivos, es decir, del capital, administración y trabajadores. Supone, también, que el interés verdadero de los mencionados factores o de los subfactores (técnicos, jefes medios, etc.) no es expropiar a los otros, porque cada cual sabe que su poder de acción es limitado y que no puede reemplazar a los demás. Por tanto, la discusión de remuneraciones se efectúa en términos reales, en términos de asignación correcta de los recursos disponibles para premiar la productividad, en términos económicos, técnicos y no políticos.

Hablando de productividad puede temerse que los trabajadores menos calificados y, por eso, muchas veces menos significativos en

el proceso de producción, van a estar desamparados por el sistema. Esta aseveración es inexacta, a menos que se pretenda que, a través del sistema sindical y de negociación colectiva, las empresas bonifiquen o subsidien a ciertos trabajadores más allá de lo que objetivamente merece la labor de estos últimos. Tal subsidio no sería justo, porque sacrificaría la remuneración de otros trabajadores o de otros agentes productivos, o porque perjudicaría la productividad de la empresa. Lo natural es que los chilenos que no alcancen a ganarse la vida en su empleo reciban una ayuda de carácter social, pero que no graven sobre sus compañeros de labor o sobre su fuente de trabajo. Es perturbador, en cambio, que se confíe la atención de este problema al sistema de negociación colectiva, con perjuicio de trabajadores y consumidores.

El Plan Laboral puede analizarse en muchos de sus aspectos parciales, pero es posible que no se acepte su fondo, a menos de excluir la visión estática de la economía y la tesis marxista de la lucha de clases. Entretanto, más abajo de lo que llamamos opinión pública, corresponde que el Plan Laboral se conozca por quienes deben manejarlo y aprovecharlo.

Siete metas sociales básicas

(16 de septiembre de 1979)

En su mensaje del 11 de septiembre, el Presidente de la República señala siete metas en materia de modernización de instituciones básicas: reforma laboral, reforma previsional, mejor acceso a los servicios de salud, reorientación de la educación, desarrollo rural, modernización judicial y reforma administrativa.

La Semana Política

GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN NACIONAL

"Habiéndose alcanzado ya algunas de las metas estrictamente propias de la reconstrucción nacional, el actual Gobierno pasará a ser plenamente un Gobierno de modernización nacional", anunció S.E. en el Mensaje del martes 11.

Los discursos que pronuncia el Presidente Pinochet ante el país en esas solemnes ocasiones tienen el carácter de una cuenta de la marcha de la nación y de un proyecto hacia el futuro. En esta oportunidad, la cuenta fue especialmente precisa y detallada en los anexos del Mensaje, pero este último revistió casi totalmente el carácter de un planteamiento político.

Especial importancia reviste el rasgo de modernización que S.E. le atribuye a su Gobierno. Como lo dice el propio Mensaje, la renovación empezó desde el mismo 11 de septiembre de 1973, pero ya puede distinguirse el término del camino de la reconstrucción y divisarse nítidamente el camino de la modernización.

La modernización está expresada en las siete metas sociales básicas, sin perjuicio de que también se

manifieste en la apertura y liberación de la economía, en el ritmo del desarrollo económico, en la presencia de nuevas generaciones en los mandos de las empresas y de los servicios públicos y, por último, en la aplicación de ideas y tecnologías modernas en la Administración Pública, en las empresas del Estado y en los negocios particulares.

El llamado del Presidente de la República a que se comprenda la etapa de modernización que vive el país es mucho más que una retórica destinada a justificar la prolongación del régimen militar. Por el contrario, el concepto obliga a todos, empezando por los más altos niveles, a una conducta que excluya las improvisaciones, los tanteos a ciegas, los divisionismos irracionales y las rencillas de pueblo chico. El país está tomando altura en lo material y necesita elevar la jerarquía de las preocupaciones y de las formulaciones. La modernidad implica el trabajo con ideas y procedimientos racionales, envuelve los conceptos de ciencia y tecnología, significa una cierta claridad en las metas, transparentada en el estilo y en las palabras.

Corresponde, sin duda, al Gobierno y a los elementos más res-

ponsables que lo apoyan crear un clima propicio para el trabajo común de los chilenos en pos de las grandes finalidades de desarrollo integral del país comprendidas en la modernización.

Sería equivocado, por ejemplo, que las autoridades se contentaran con el indudable respaldo popular del Gobierno, desdénando el posible enfriamiento de los grupos altos y medios superiores. Una visión realista de nuestra sociedad obliga a pensar que en estos últimos sectores reside la opinión pública en el hecho y que allí están generalmente los elementos más críticos a la vez que más dinámicos. No hay que olvidar que la izquierda tradicional vino a ser eficaz cuando logró incorporar a sus filas a elementos jóvenes de esos sectores, a través del MIR, del MAPU, de la Izquierda Cristiana, de los grupos técnicos y profesionales de los partidos Socialista y Comunista u otros. Del mismo modo, la capacidad realizadora efectiva del actual régimen depende de la contribución del elemento más calificado a través del ejercicio de las responsabilidades públicas así como la activa cooperación al Gobierno.

Ahora bien, la atracción que debe ejercer el régimen sobre la masa de los elementos pensantes requiere de actitudes cada vez más imbuidas de racionalidad. La sola fuerza del mando y la respetabilidad moral parecerían no bastar si el régimen necesita asegurarse la colaboración de valiosos elementos independientes más allá del eminente grupo de técnicos y profesionales que desempeña con brillo los cargos públicos más importantes. La palabra diálogo sufrió cierto deterioro por

el exceso del empleo político que de ella se hizo en otros tiempos, pero no estaría de más que el concepto (aún con otro vocablo) se diera más frecuentemente en la vida pública de hoy. Parece necesario explicar, fundamentar, informar y hacer participar, abandonando en lo posible las consignas fáciles y repetidas así como las afirmaciones tajantes y enfáticas. El Gobierno de modernización tiene que ser de veras un Gobierno moderno, concebido para hombres plenamente libres y dispuestos a presidirlo en una tarea transformadora que desarrolle y afiance esa libertad.

SIETE METAS SOCIALES BÁSICAS

Uno de los aspectos importantes abordados en el último Mensaje es la decisión de ir a una institucionalidad social que armonice con sus similares en lo económico y en lo político. Con ello se continúa el proceso de grandes transformaciones iniciado hace seis años.

Durante este período, las modificaciones económicas se han ido completando con mayor celeridad por razón de urgencia en resolver los problemas heredados y, tal vez, porque existían un esquema y un equipo humano adecuados para llevarlas a la práctica. En los aspectos sociales y políticos no se había advertido un progreso al mismo ritmo hasta el Plan Laboral en marcha, cuyo éxito inicial resulta promisorio.

Siete grandes áreas, algunas de ellas abordadas en sus problemas más graves durante el último sexenio, conforman el campo de interés de la nueva institucionalidad

social que aspira a crear las condiciones para avanzar hacia la práctica efectiva de la libertad en todos los campos de la actividad de los chilenos.

Lo económico constituye un medio y no el fin último que puede llegar a condicionar toda nuestra vida en sociedad. Sin embargo, es innegable que la vinculación estrecha entre el desarrollo económico y el social plantea exigencias mutuas a las estructuras que se crean.

La legislación laboral y la reforma de la previsión aparecen como dos áreas fundamentales dentro de la tarea que ahora se enfrenta de manera más decidida.

Hace tres meses el país conoció, en el Plan Laboral, entre otras, las normas que se refieren a la sindicalización y la negociación colectiva, esperándose que durante el año próximo la reforma previsional sea una realidad. Será necesario, además, abordar otras materias para completar el cuadro institucional que regule las relaciones del trabajo y las formas de protección al sector pasivo.

El mejor acceso a los servicios de salud y la reorientación de la educación son dos objetivos adicionales que se propone la nueva institucionalidad social.

Durante los últimos años ambos temas han sido tratados con significativos avances respecto de la situación heredada. Falta, sin embargo, crear las estructuras capaces de hacer realidad las ideas contenidas en las directivas generales que se han impartido.

La salud y la educación, en su doble calidad de derecho fundamental y requisito indispensable

para mejorar el rendimiento del factor trabajo necesitan de una estructura adecuadamente descentralizada y flexible, capaz de atender a todos los sectores y responder a las exigencias de un dinámico crecimiento económico.

El desarrollo rural, única manera de enfrentar los problemas que aquejan a una importante proporción de quienes viven en situación de extrema pobreza, debe ser la respuesta positiva a problemas que las reformas agrarias fueron incapaces de atender.

La estructuración de un poder judicial que se adapte a la nueva realidad que el país comienza a vivir parece una de las tareas más indispensables pero a la vez más complejas. No sólo es un problema de recursos, que por cierto existe, ni de su adecuada administración que tal vez podría mejorarse. Hay necesidad de una modernización completa de las estructuras y procedimientos que permitan administrar justicia con rapidez, eficacia y a costos accesibles a la mayoría ciudadana.

Finalmente se plantea la necesidad de seguir avanzando en la reforma administrativa que no puede circunscribirse sólo al ámbito de la regionalización. Es fácil darse cuenta de la enorme tarea que significa llevar adelante la nueva institucionalidad social. Ella, sin embargo, es indispensable por razones de principios y también porque la institucionalidad económica, basada en esos mismos postulados, arriesga perder parte de su eficiencia si se mantiene el desequilibrio que hasta ahora se ha observado entre ésta y los valores humanos y sociales.

HACIA LA INSTITUCIONALIDAD INTEGRAL

El programa de la modernización implica integrar en una las tres institucionalidades básicas, la económica, la social y la política.

El Mensaje pone el acento en la igualdad de oportunidades, principio en virtud del cual toda persona puede alcanzar el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades y aptitudes, sin más límites que los de su capacidad o de su esfuerzo efectivo. S.E. se refiere en seguida al robustecimiento de la libertad de decisión de las personas, es decir a la libertad económica, educacional, de sindicación, de seguridad social, de atención de la salud y otras semejantes, que son esenciales en la vida diaria de los ciudadanos.

Establecidas tales libertades será factible el camino hacia una verdadera y sólida democracia política. En este aspecto el Mensaje es cate-

górico: la democracia es la forma normal de gobierno más adecuada a nuestra tradición y a nuestro modo de ser. "Puedo asegurar —expresó S.E.— que estamos buscando la forma de generar el poder político con la más amplia participación ciudadana, pero sin repetir las experiencias del pasado ni restablecer la esencia del sistema anterior..."

La institucionalidad integral permite considerar a las profundas transformaciones ya hechas y a las que vienen como partes del mismo proceso institucional, cuyo coronamiento habrá de encontrarse en los textos constitucionales que consagren la futura democracia. El afianzamiento de la libertad en el plano económico y en el social deberá completarse con el afianzamiento de la libertad política. El sentido programático del Mensaje envuelve pues grandes tareas y grandes y precisas responsabilidades.

Los comunistas

(25 de noviembre de 1979)

Como parte del debate en torno al proyecto de nueva Constitución, se observa la necesidad de un pronunciamiento claro y categórico que deje fuera de la institucionalidad al comunismo.

La Semana Política

LOS COMUNISTAS

Durante el desarrollo del debate constitucional que se ha iniciado, se hace necesario buscar algunas unanimidades, algunas coincidencias que sirvan de punto de apoyo para el edificio institucional que se proyecta.

Tal vez la primera de las aproximaciones ciudadanas sea la vocación democrática de Chile, la conciencia del valor de la persona y de sus derechos. Los chilenos resisten naturalmente la dictadura totalitaria, la presencia de una ideología que, desde el poder, se infiltra en las conciencias, dispone de las voluntades y maniatas las iniciativas.

El comunismo aparece como la única ideología totalitaria que haya prendido en algunos sectores chilenos. No hay otra. Ni el nazismo ni el fascismo ni ninguna otra ideología heredera de Hegel o de Nietzsche ha tenido verdadero arraigo en Chile. El verdadero peligro totalitario en Chile se llama comunismo.

Obviamente, al emplear la palabra comunismo lo hacemos en un sentido muy amplio, que comprende no sólo a los que practican la ciega obediencia a las jerarquías de Moscú, sino a ciertos socialismos, izquierdismos independientes y

hasta izquierdismos cristianos que predicán la subversión, la socialización y, en último término, la colectivización de las cosas y de las personas.

Mientras el Gobierno y el país estaban absorbidos por graves urgencias materiales y políticas, el tema del comunismo había dejado el primer plano de la actualidad. Sin embargo, bastó que se publicaran las amenazantes declaraciones del ex senador comunista Volodia Teitelboim y se advirtiera la voz de los comunistas en algunas organizaciones laborales, para que la opinión pública quedase alertada. La conclusión es clara y muy significativa: el comunismo totalitario no ha perdido nada de su odio y de su fuerza destructora; el comunismo totalitario está presente en el país y se ha infiltrado en muchos y respetables sectores; el comunismo debe ser puesto moralmente y de hecho fuera de la ley porque no puede haber genuina convivencia democrática con el enemigo innato de la democracia.

Muchas serán las materias por debatirse respecto de la futura institucionalidad, pero resulta indispensable que el sentimiento democrático chileno no sea nuevamente engañado y conducido a las puertas de la dictadura comunista. Las nue-

vas instituciones tendrán que sostenerse e inspirarse en una concepción democrática y, por tanto, en la exclusión inevitable de los enemigos de la democracia, que son precisamente los comunistas.

La influencia comunizante no se expresa con toda claridad en las primeras etapas de la subversión. Son otros elementos políticos los que esgrimen banderas idealistas, humanitarias y benevolentes. Estos últimos profesan a veces sinceras convicciones democráticas. En otros casos, su verdadero propósito es totalitario.

De una manera u otra, la ofensiva comunista empieza con la defensa de causas nobles en el campo laboral o universitario, pero detrás de las presentaciones públicas de respetuosa disidencia o de los actos de protesta efímeros actúa la implacable maquinaria comunista, la de las células ocultas, la que utiliza el espectáculo artístico o cualquier género de comunicación social para sembrar la subversión.

El régimen militar chileno ha sido clara y ostensiblemente opuesto al comunismo, pero su rigor no basta para impedir la disimulada acción extremista en muchos centros de poder. De ahí la necesidad de la convicción ciudadana generalizada acerca del peligro comunista y del conocimiento de las tácticas y de los fines del partido totalitario.

Los comunistas han tenido siempre a otros que les abren las puertas y les preparan el terreno. El país conoció a los que querían ser más revolucionarios y más demagógicos que los comunistas, a los que debilitaban y disolvían las nociones de propiedad y de libertad, a

los que iban insensiblemente absorbiendo las consignas totalitarias y adoptando las maniobras que protegían el avance de los comunistas. Si el comunismo se mantiene inflexible, sus cooperadores también se mantienen ingenuos y desprevenidos. Hay que proteger al país de los totalitarios y de los que les facilitan a aquéllos la tarea.

AFIANZAMIENTO DE LA LIBERTAD

La experiencia política y social acumulada en nuestra época no hace difícil la crítica de la democracia liberal burguesa. Los vicios, debilidades y contradicciones de aquella son evidentes y cualquier expositor inteligente puede deleitar a su público haciendo una descripción de los fracasos del régimen democrático. Mucho más difícil que esta crítica es el intento de encontrar una fórmula de reemplazo que no merezca objeciones o que no esté expuesta a fracasos peores.

Los círculos interesados escucharon con atención los análisis de distinguidos constitucionalistas extranjeros, un español, un francés y dos uruguayos, que vinieron al país a dar a conocer sus personales puntos de vista sobre la democracia, el parlamentarismo y otros temas de derecho público. Sus intervenciones sirvieron para consolidar juicios pesimistas sobre las fórmulas no apoyadas en el soporte autoritario, pero habría sido imposible esperar de esas inteligentes opiniones extranjeras una solución para los problemas políticos chilenos.

Nuestra experiencia nacional parece indicarnos que el recto camino de solución es el del afianzamiento de la libertad, entendida

como autoafirmación y autorrealización de la persona humana. El Estado interventor y paternalista, el Estado empresario y el Estado propagandista, aunque reconozca un impecable origen democrático, constituyen amenazas contra la libertad individual. Esas formas de Estado burocrático, abultado e hinchado por los grandes presupuestos y los ambiciosos planes son adversarias de la libertad y a la vez, debilitadoras de la esencia del Estado. En lugar de una acción pública ágil, dedicada a lo substancial, independiente y fuerte, el Estado impedido por la gordura burocrática es lento, débil e ineficaz, aunque aplaste con su peso la libertad de los ciudadanos.

El esquema de libertad económica, que se traduce en el empleo óptimo de los recursos del país, está produciendo buenos frutos en el campo económico propiamente tal. Ahora deberá tenderse a las áreas de seguridad social, educación, salud, justicia y administración pública en general.

La experiencia viva y práctica de la libertad en la conducta diaria de un creciente número de chilenos parecería ser el fundamento más sólido de un régimen político libre. La posibilidad de que cada individuo útil viva de su trabajo y de que el país se levante con su propio esfuerzo, sin que nadie se aproveche indebidamente del ahorro o del trabajo de los demás, constituye la base de una auténtica democracia. En cambio, el Estado benefactor y protector que reparte privilegios está siempre cerca del Estado tiránico.

El afianzamiento de la libertad tiene como necesaria contrapartida

la reducción de las funciones económicas del Estado y la transferencia de las mismas a los particulares. La experiencia contemporánea indica que el despotismo de los Gobiernos no se contiene tan sólo por la triple división de poderes públicos, reclamada por Montesquieu, o por el sometimiento de las autoridades a las leyes orgánicas respectivas. Aun en el régimen democrático es siempre posible que los gobiernos obtengan más poder delegado, y que el manejo de la economía, de la producción y de la propiedad les facilite poderes virtualmente omnímodos.

El afianzamiento de la libertad personal envuelve también necesariamente la afirmación clara y definida de la propiedad individual. Las concepciones difusas, vacilantes o medrosas del derecho de dominio conducen fatalmente a concepciones colectivistas que sofocan la libertad.

La democracia cristiana alemana de postguerra supo echar las bases de una sólida institucionalidad libre, afianzando la libertad económica y el derecho de propiedad. En Chile los democratacristianos no supieron o no pudieron realizar la misma tarea liberadora. Por eso equivocaron fatalmente su misión histórica hasta verse obligados a entregar el poder al Gobierno marxista del señor Allende, en vez de haber cumplido en plena prosperidad y con gran ayuda externa el programa liberalizador que hoy se ejecuta en medio de tantas dificultades. La segunda base de la nueva institucionalidad debería ser, pues, el afianzamiento de la libertad económica y de la propiedad privada.

LAS MODERNIZACIONES

En su Mensaje del 11 de septiembre de este año, el Presidente de la República enunció las grandes metas de modernización del país: desburocratización, plan laboral, nueva seguridad social, directiva presidencial de educación, modernización del agro, liberación de la salud y modernización de la justicia.

Los diversos ministerios están trabajando separadamente en las complejas materias señaladas por S.E. pero conviene que se vean en ellas otras tantas expresiones de la nueva institucionalidad y que se comprenda la vital importancia de todas ellas.

El Mensaje Presidencial trazó un marco de acción y ahora corresponde a los ministerios la elaboración de las normas y programas respectivos, así como cabe al Comité Asesor Presidencial la tarea de facilitar la rápida promulgación de los decretos leyes respectivos.

Una de las ventajas del régimen militar es que está preparado para decidir y operar con rapidez, al margen de las influencias perturbadoras de las antiguas asambleas o de la pugna de los grupos de presión. Hay que añadir que las característi-

cas del régimen permiten incluso equivocarse sin mayores riesgos, porque siempre es posible ajustar las normas de acuerdo a la aplicación práctica de las mismas y corregir en el camino los programas. Es preferible la precipitación a la inmovilidad. Asuntos tales como la reestructuración universitaria, la reforma previsional, el arreglo de la situación de los magistrados y otros debieran acelerarse para que la marcha hacia la modernización continúe y, sobre todo, para que el pueblo vea y aprecie el trabajo del Gobierno.

La eficacia del régimen no estará nunca en polemizar con sus adversarios, sino en sobrepasarlos con las realizaciones y con el ímpetu transformador del país. En la medida en que la obra no sigue con el mismo ritmo, es decir, cuando el Gobierno no se desburocratiza lo bastante o no se descarga el Estado de inversiones innecesarias, o no se reforma la seguridad social, la salud y la educación, renace la polémica contingente y reviven los antiguos profetas. Por eso, las metas de la modernización también son indispensables para la nueva institucionalidad, en tanto que la demora y la rutina son los más peligrosos adversarios del Gobierno.

Avances en varios frentes

(10 de febrero de 1980)

Se hace un recuento de las leyes que el Gobierno ha promulgado durante el mes de enero y parte de febrero, destacando especialmente aquellas relativas a los seguros, a la Marina Mercante y a las asociaciones gremiales (que reemplazan a los Colegios Profesionales). En la segunda parte se refiere a las modificaciones a la legislación que disolvió los partidos políticos, y al problema del activismo político.

La Semana Política

AVANCES EN VARIOS FRENTE

El Gobierno ha promulgado durante este verano numerosas leyes importantes que revelan su decisión de avanzar en las modernizaciones planteadas en septiembre del año pasado.

En todas ellas se advierte, nuevamente, un hilo de pensamiento orgánico, cuyo vigor político se impone en materias difíciles y muy disímiles. La Ley de Seguros y la de Marina Mercante estaban paralizadas por una discusión engorrosa, prolongada durante años, y llegaron ahora a buen fin. En educación se han adoptado decisiones básicas. El traspaso de responsabilidades en los aspectos técnicos de la enseñanza técnico-profesional normaliza la situación de 150 mil estudiantes que recibían una formación de calidad baja, con pobres horizontes ocupacionales. El préstamo automático del Estado a los estudiantes universitarios sin recursos permitirá nuevas matrículas en la Universidad, sin subsidios discriminatorios.

Debe ser destacada la Ley de Asociaciones Gremiales, ya que ella favorece, con disposiciones expeditas, la multiplicación de grupos

intermedios entre el individuo y el Estado. Las actividades profesionales, los oficios y las ramas de producción o de los servicios, que hasta ahora dependían del Ministerio del Interior para cambiar sus directivas, podrán renovarlas desde ahora con libertad. A continuación de los sindicatos de trabajadores, que fueron los primeros, este vasto sector conformado por las asociaciones gremiales —no menos de mil en la actualidad— comienza a tener un manejo autónomo, autoridades genuinas y elecciones democráticas.

Son cambios profundos que, junto con modernizar distintos sectores de la actividad nacional, les dan vitalidad independiente de los recursos y directivas del Estado.

Paralelamente, debe quedar registrado el sacudimiento de la base social —¿podrá ser cada vez más fuerte?— por la asistencia directa a los pobres, mediante programas específicos de pronta eficacia.

Estas perspectivas promisorias tienen que marcar un contraste severo con situaciones difíciles, que serían poco notorias si acaso el panorama en general no fuera positivo.

El contraste es aún mayor cuando queda en evidencia en algunas de ellas la desorientación de la autoridad sobre las verdaderas causas de los problemas sociales. Un ejemplo significativo es la condición de las cárceles, cuyo estado es de abandono desde hace mucho tiempo. Los presos no eran votantes, y esta circunstancia los postergó sistemáticamente para recibir atención en periodos de alta politización y de fiebre electoral. Pero han pasado seis años del actual Gobierno, y la situación en ciertas cárceles, incluidas las dos de la capital, es virtualmente angustiosa, como queda de manifiesto en fugas repetidas, motines, huelgas de hambre y en la desgracia evitable de muertos y heridos.

Por estas consideraciones, y mientras no se exhiban pruebas sólidas de lo contrario a la opinión pública, es difícil pensar en que este cuadro de anormalidad obedece a conspiraciones promovidas desde fuera de los penales. Confunde, asimismo, acudir a explicaciones externas o mencionar la distribución de panfletos subversivos cuando la insalubridad es radical y el ambiente carcelario difícil de tolerar. Lo lógico, más bien, es que la autoridad resuelva por fin una política carcelaria rápida y obtenga los fondos que corresponden, para estos efectos, a una emergencia.

EL ORDEN PÚBLICO

Otras modificaciones legales promulgadas en la semana hacen ver que el Gobierno está preocupado de la mantención futura del orden público y de la agitación política, por lo cual trata de precaver los

desbordes de esta naturaleza que pudieran perturbar el debate institucional y la definición sobre el proyecto político del régimen en términos perfilados que corresponden de efectuar este año.

En virtud de una disposición publicada en el *Diario Oficial*, fue cambiada la ley que disolvió los partidos políticos en marzo de 1977. Hasta ahora, las infracciones consistentes en actividades político partidistas —sancionadas con multas y penas de presidio, relegación o extrañamiento— daban lugar a la sustanciación de causas según las normas procesales especiales establecidas en la Ley de Seguridad Interior del Estado. En adelante, estas infracciones serán de competencia del Juzgado del Crimen correspondiente, de acuerdo a las reglas generales, lo cual significa asimilar estos procedimientos a las normas comunes, sin requerir más que el juez de primera instancia sea un ministro de Corte de Apelaciones, como hasta ahora ocurría. Este cambio es favorable en cuanto atenua el rigor de estar regida esta materia por jueces y procedimientos especiales.

La segunda modificación es más trascendente: el Ministro del Interior ha quedado facultado para disponer la permanencia obligada de personas en una localidad determinada del territorio nacional, por un plazo no superior a tres meses.

Se trata, indudablemente, de una medida de aplicación discrecional por la autoridad política, no sometida a reclamo ante la justicia ordinaria. Los motivos que invoca el Gobierno para crear una figura de excepción dentro de la legislación sobre orden público, aluden a la

necesidad de prevenir toda amenaza contra el establecimiento paulatino de la nueva institucionalidad, que se ha ido alcanzando, según una declaración del Ministerio del Interior, gracias al orden imperante hoy en Chile: "una real protección de las iniciativas en marcha para poner integralmente en vigencia las nuevas instituciones", con lo cual será posible asegurar este objetivo "con firmeza, sin necesidad de apelar inevitablemente a otras medidas como la expulsión del país, prevista en casos excepcionales".

La posición del Gobierno revela a las claras que ha primado en su ánimo un aspecto práctico: evitar las expulsiones de chilenos del territorio, medida extrema, dolorosa, que perturba la convivencia y retrasa la normalización de una situación importante como es el exilio. Prueba de ello es que el actual Ministro del Interior no ha dictado ninguna resolución de esta especie en casi dos años, precisamente porque el orden público no se ha visto alterado.

Las autoridades buscan una precaución que debe estar fundada en sus antecedentes sobre futuros movimientos de los partidos marxistas, y por el probable despuntar de algunas situaciones perturbadoras del orden público que resultarían llamativas, sean éstas de orden callejero, o bien que se produzcan en lugares claves, como las universidades.

Hay un género de activismo político desaforado, que no es manifestación de disenso por las vías normales, y que no llega, tampoco, a ser subversivo en términos graves, hasta el grado de afectar la

estabilidad del Gobierno. Si esto último ocurriera, los responsables serían sancionados con el rigor de la legislación vigente. Pero el activismo político violento, en cambio, que organiza manifestaciones callejeras sistemáticas, que ocupa recintos y que consigue alterar la normalidad, aunque sea de modo más aparente que efectivo, tiene un peligroso efecto de contagio.

En Chile, el fenómeno fue especialmente notorio desde 1968 en adelante. Las "tomas" de escuelas, universidades y predios agrícolas degeneraron rápidamente en el aflojamiento del orden público. Cuando la Unidad Popular llegó al poder, las brigadas marxistas armadas y el MIR no hicieron más que aumentar incesantemente la ruptura del orden público y del Estado de derecho, hasta colocarnos al borde de la guerra civil, provocando el colapso del régimen institucional.

El problema del orden público no puede, pues, mirarse con ópticas antiguas. Las distintas fracciones del marxismo, y particularmente el Partido Comunista, han obtenido en todos los países del mundo éxitos considerables con el aceleramiento del desorden público, cuando éste no es reprimido con firmeza en sus orígenes. La situación en casi toda Centroamérica es elocuente, sin menospreciar las otras causas coadyuvantes de la crisis en esa región.

Entre nosotros, tanto la oposición radical al régimen, como aquellos sectores que propician, dentro del Gobierno, medidas de fuerza para alejar la normalización institucional, se ven favorecidos por el desorden, por mínimo que éste sea al comien-

zo, puesto que saben que llegará a ser mayor con rapidez y obligará a medidas durísimas de grave efecto político.

ANTÍDOTOS DE FONDO

Las facultades discrecionales son muy difíciles de justificar; salvo en períodos transitorios. De ahí que esta nueva legislación no se entienda sino en el cuadro de una resolución tajante, del Gobierno por avanzar este año en la definición de la institucionalidad política y del régimen de derecho total y consecuente.

En relación también con la disposición citada, es preciso señalar por anticipado que existen diversas nociones de orden público. La aplicación de las facultades discrecionales entregadas al Ministro del Interior deben comprenderse, en todo caso, referidas al contenido tradicional que ha prevalecido en Chile sobre esta materia. Sería grave, por ejemplo, que alguna autoridad política pretendiera en el futuro acudir a esta legislación para sancionar perturbaciones al orden público cometidas —según juicios más subjetivos— mediante órganos de expresión, en una cátedra universitaria o en cualquier lugar en que el pensamiento político se exprese en formas adecuadas al disenso y respetuosas del orden jurídico vigente. Las facultades recién entregadas no pueden extenderse al campo de situaciones regidas por normas precisas que se conforman con sancio-

nes decretadas por los tribunales ordinarios de justicia.

La gestión del actual Gobierno ha superado largamente las fases que sucedieron a la emergencia y se enmarca ahora en normas objetivas más que discrecionales. Aunque el efecto de estas facultades extraordinarias sea conocido, delimitado, y no corra tampoco peligro de convertirse en ocasión de excesos, conviene que se precise de antemano su ángulo de aplicación.

Con todo, el antídoto más eficaz para prevenir las perturbaciones del orden público radica en el propio Gobierno, mediante una resolución adecuada de los grandes temas de conflicto en que la oposición desafiante puede encontrar móviles justificados para torcer en sectores determinados la voluntad de aquella mayoría sensata que desea sin duda una evolución favorable del régimen actual.

Las universidades pueden ser uno de estos focos en el año académico que se inicia. Se han acumulado allí problemas, y los sectores académicos más serios sienten el efecto de un largo período en que han estado ajenos a la resolución de sus orientaciones fundamentales. La nueva ley universitaria debe devolver cuanto antes a los planteles de enseñanza superior esa autonomía esencial que les corresponde, y que van obteniendo progresivamente diversos otros sectores del país, tales como los trabajadores sindicalizados, y ahora las asociaciones gremiales.

Corrientes de opinión

(30 de marzo de 1980)

El 21 de marzo el Presidente Pinochet, junto a su comitiva, inicia un viaje hacia el Lejano Oriente, pasando por Isla de Pascua para luego continuar hacia las islas Fidji.

El viaje debió ser suspendido en ese lugar, al conocerse la noticia de que el Gobierno de Filipinas cancelaba la invitación a ese país para el Presidente chileno.

El hecho provoca airadas reacciones en Chile, y el Presidente Pinochet es recibido con una gran manifestación pública. Días después se le solicita la renuncia al Ministro de Relaciones Exteriores, Hernán Cubillos, quien es reemplazado por René Rojas Galdames.

La Semana Política

CRISIS SUPERADA

Con la designación de don René Rojas Galdames, distinguido diplomático de carrera, como Ministro de Relaciones Exteriores, quedó resuelta la crisis producida a raíz de la cancelación intempestiva de la visita de S.E. a Filipinas.

En lo interno, la frustración del viaje provocó la más impresionante manifestación de apoyo a S.E. Dio, además, lugar a que un grupo de columnistas de un diario de la capital abriera fuego simultáneo sobre el señor Cubillos. El mismo diario informó que personas altamente colocadas en el séquito de S.E. habrían dicho que la Cancillería ocultó informes que desaconsejaban la visita a Manila.

El Canciller Cubillos se responsabilizó política y administrativamente del viaje, pero sostuvo que no había fallas en la preparación del mismo, rechazando categóricamente la especie de que se hubieran ocultado informes.

Por su parte, el Presidente de la República aplicó la norma castrense de la responsabilidad del comandante y pidió la renuncia a su Ministro de Relaciones Exteriores. La medida fue objeto de comentarios adversos de carácter periodístico, así como de parte de las personalidades consultadas y de muchos partidarios del Gobierno. Entre éstos hubo expresiones condenatorias para los que atacaron al señor Cubillos.

La posición de S.E. ha sido clara: él ejerce sus facultades constitucionales privativas al separar a un Ministro; nadie, absolutamente nadie, ha influido en esta decisión muy meditada; el Presidente tiene estimación por su ex colaborador y dejó testimonio de su gratitud en el discurso pronunciado al tomar el juramento al nuevo Canciller; la política internacional no ha cambiado y el gobierno mantiene firmemente las líneas y objetivos que se trazó en Chacarillas, y no hay grupos o tendencias que pesen en la voluntad presidencial.

Este breve resumen del alcance interno del episodio filipino puede completarse con la impresión de que el caso, en lo externo, va perdiendo gravedad merced a las explicaciones tardías del Gobierno de Manila. La próxima visita de un representante personal del Presidente Marcos enviado a dar excusas directas a S.E. debiera ser el último paso diplomático de este desgraciadísimo suceso.

Corresponderá ahora al señor René Rojas Galdames continuar la política exterior definida por el Gobierno y afrontar las arduas dificultades internacionales del país, que se resumen en el aislamiento a que pretenden llevar a Chile.

Si quisiera hacerse el balance del incidente filipino habría que llegar al siguiente saldo: primero, respaldo popular indiscutible al Presidente de la República como símbolo de la nación y de su unidad, en términos tal vez pocas veces alcanzados por otros gobernantes; y, segundo, la aparición a la luz pública de una discrepancia importante entre partidarios del Gobierno. Es propio de los regímenes autoritarios que las posiciones políticas se expresen en pequeños grupos. Tal es aquí el caso. Pero el reducido número de participantes visibles en cada una de las posiciones no priva de trascendencia a las mismas. Vale, pues, la pena analizarlas.

CORRIENTES DE OPINIÓN

El Presidente de la República se ha esforzado por condenar a los partidos políticos. Ve en ellos el arquetipo de la pasada corrupción de nuestra vida pública, una causa importante de la crisis de nuestra

democracia y, en fin, el caldo de cultivo de las ambiciones y codicias que impidieron el desarrollo normal del país.

Es difícil negar que los partidos políticos sufrieron graves quebrantos y que demostraron su ineficiencia para afrontar los días lamentables de la Unidad Popular. Sería injusto, sin embargo, desconocer que en los partidos políticos de todos los tiempos militaron chilenos que, inspirados en el patriotismo más profundo, se consagraron al servicio público olvidando intereses personales. Ciertamente no se refieren a éstos las críticas de S.E.

La realidad social en cualquier latitud y bajo las más diversas ideologías se teje de contradicciones y pugnas. Se constituye en la divergencia y en la lucha de grupos, tendencias y fracciones. Este hecho puede ignorarse, pero emerge como una evidencia a medida que el tiempo transcurre. El partido o el bando es un fenómeno inevitable.

En estos mismos momentos, sean como corrientes de opinión o como partidos políticos propiamente tales, se están dando tendencias que corresponden a una determinada concepción del país y de la política, así como a una forma de satisfacer ambiciones de poder, a todo lo cual no son ajenos los partidarios del Gobierno.

Si se quisiera describir a grandes rasgos el panorama político de hoy divisaríamos tendencias o corrientes de opinión cuyos postulados se vierten en los medios de comunicación y cuyos disentimientos chocan en público. El Jefe del Estado se mantiene por encima de estos divisionismos, llama a la unidad a los chilenos y realiza su política al

margen de las banderías. Pero las bandas existen, se mueven y se expresan con repercusiones de distinta intensidad.

Las corrientes de opinión a que nos referimos no coinciden siempre con los partidos tradicionales. Se diría, más propiamente, que aquellos partidos se encuentran superados por las circunstancias. Hay criterios de distinción más generales y a la vez más precisos que los programas partidarios para delinear las corrientes políticas en pugna.

La primera clasificación entre los ciudadanos de hoy en materia de posiciones políticas se refiere a su criterio en cuanto al origen del poder. Hay quienes estiman que el único origen de la potestad política es el que ostentan individuos elegidos por sus conciudadanos y que, en consecuencia, todo régimen militar adolece de falta de legitimidad. Esta corriente de opinión es numerosa en Chile. La constituyen desde luego los que todavía adhieren a los postulados o principios de la llamada Unidad Popular, explicablemente contrarios al pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. La engrosan también no pocos de los que apoyaron inicialmente al régimen militar, pero que estiman que el sistema debe refrendarse por el sufragio o que la nueva Constitución y todo el régimen institucional debe aprobarse por votaciones a la brevedad posible. En suma, hay un número significativo de ciudadanos —sin duda no predominante— que desconoce al régimen mismo.

Habrà, pues, que dividir a los ciudadanos entre quienes aceptan el régimen militar de acuerdo a las circunstancias históricas en que surgió y lo sostienen hasta ahora,

por una parte, y los que, por la otra, rechazan dicho régimen y piden la intervención del sufragio para generar la nueva Constitución y para legalizar a las autoridades del Estado.

Los primeros no podrían llamarse propiamente oposición política, desde que no se limitan a contradecir las líneas o conductas del Gobierno sino que postulan la supresión del mismo y su reemplazo por formas derivadas del sufragio. Comunistas, socialistas, miristas, mapucistas, grupos de izquierda cristiana, ciertos radicales y socialdemócratas, sectores demócrata-cristianos, pueden entrar en esta clasificación. No están en contra de determinadas políticas del Gobierno sino que aspiran a reemplazar a éste.

En el otro sector, probablemente hoy más numeroso, se sitúan los que plantean como problema el origen del poder y aceptan, por tanto, el régimen militar, las causas que lo originaron y las que lo prolongan hasta ahora. Son los que hemos llamado partidarios del Gobierno. Ellos salieron a la calle el lunes 24 a manifestar su respaldo al Presidente y, en general, están de acuerdo con la orientación del régimen militar.

PARTIDARIOS DEL GOBIERNO

Si excluimos a quienes rechazan el fundamento del régimen militar, es decir, a los que ponen todo el acento en el problema del origen del poder y de la norma legal, nos quedamos con los llamados partidarios del Gobierno, o sea, con los que aceptan el hecho del 11 de septiembre y sus consecuencias.

Ahora bien, en esta segunda clasificación hay también que distinguir.

Se dan algunos partidarios del Gobierno que, en su aprecio por los valores militares, rehuyen la aportación civil o quisieran reducirla a aspectos técnicos secundarios. Coinciden, en general, en cierta fe en la intervención del Estado en la economía y profesan confianza en la regimentación de la actividad ciudadana en universidades, medios de comunicación, desarrollo, tecnología o cualquier otro campo.

Estos partidarios del Gobierno favorecen la burocracia centralista y creen que la libertad económica sirve a poderosos intereses nacionales o extranjeros. Habitualmente están imaginando conspiraciones, porque desconfían de la libertad.

El estilo político de estos partidarios del Gobierno se identifica con el rechazo de las normas objetivas reguladoras del poder público. A juicio de ellos, el régimen de excepción debiera prolongarse indefinidamente. Seguros de la disciplina y de la ética de un régimen monolítico, no parecen prever la necesidad de defenderse contra posibles peligros de ineficiencia o corrupción. Estiman que el propio rigor autoritario basta para sanear el sistema, sobre la base de la alta moral predominante en la cúspide, pero no se ponen tal vez en el caso de que el mecanismo todo caiga en fallas graves.

Estos partidarios del Gobierno acentúan el obvio imperativo de la autoridad pero no les interesa la forma en que se ejerza el poder. Propician el poder ilimitado y favo-

recen la regulación estricta de la conducta de los particulares, convencidos de que enemigos foráneos o internos se valen de la libre iniciativa para conspirar contra la seguridad nacional, para desnacionalizar la economía o para desintegrar el régimen.

La otra corriente de opinión partidaria del Gobierno acepta el régimen y lo respalda categóricamente. No se plantea con urgencia moral el problema del origen del poder. Lo da por establecido desde el 11 de septiembre de 1973, pero aspira claramente al desarrollo de las libertades ciudadanas. Por tal razón, se preocupa de la forma en que se ejerce el poder. Cree en la necesidad del gobierno fuerte pero no le convence el autoritarismo ilimitado. Procura descentralizar y limitar al poder estatal. De ahí el énfasis en la libertad económica, en la libertad educacional, en la libertad sindical, en la libertad de prensa y de opinión, en el desarrollo de las comunidades locales y municipios. La privatización de las inversiones del Estado y el repudio a las posibles arbitrariedades administrativas se encuentran en el camino de esta corriente de opinión llamada "blanda", pero que ha probado ser dura y responsable cuando le ha tocado afrontar contingencias políticas concretas. Esta corriente puede o no interesarse por el problema constitucional, pero estará siempre por asegurar la libertad en las formas más realistas posibles.

El Presidente Pinochet desconoce con energía a los partidos y a los grupos. Necesariamente habrá de prescindir de los que niegan la legitimidad del régimen mismo, pero ha tenido a menudo que elegir entre

los que ofrecen el camino halagador, aunque frágil, del poder absoluto e ilimitado, y aquellos de sus partidarios que, velando por la lógica histórica y moral del régimen, plantean el áspero camino del poder

fuerte, impersonal y sometido a leyes objetivas, camino difícil de recorrer pero más duradero y trascendente. La opinión pública espera que S.E. siga optando siempre por esta segunda opción.

Municipalidades distintas

(15 de junio de 1980)

A raíz de la dictación de las normas destinadas a regir el traspaso de escuelas públicas, postas de primeros auxilios, cementerios y otros servicios dependientes de la administración pública central a los municipios, se analiza la importancia de esta medida como paso para darle nueva vida a la institución municipal. (EM, 13 junio, pág. 1).

La Semana Política

MUNICIPALIDADES DISTINTAS

La reglamentación del traspaso de ciertos servicios públicos a los municipios, promulgada esta semana, parece ajustarse a criterios de conveniencia práctica y de estabilidad social indiscutibles; junto con ello, se aprecia en sus disposiciones un afán de prudencia que revela el cuidado saludable que se quiere poner en este proceso trascendental, como se ha destacado en las informaciones sobre el tema.

El Ministro del Interior, señor Sergio Fernández, quien se ha caracterizado por la sobriedad y precisión de sus pronunciamientos políticos, ha declarado sobre esta fase del plan de desarrollo comunal que, "así como la apatía ciudadana es el mejor caldo de cultivo para el éxito del activismo desquiciador o totalitario, la efectiva participación social constituye en cambio uno de los más sólidos baluartes contra él, a la vez que una palanca básica de una sociedad libre y creadora como la que Chile requiere y anhela. Hacia ella se encamina la nueva democracia en progresiva gestación, como instrumento de unidad nacional, de progreso y de justicia".

El traslado de la administración de algunas escuelas, de ciertos hospitales, de algunas postas de primeros auxilios y de otras entidades de servicio al ámbito municipal, es un hecho relevante, sin duda, que el titular político del gabinete relaciona directamente con una mayor participación social y con el avance del proceso democrático.

Estos conceptos sacudirán aún más a los municipios, organismos que parecían entes burocráticos sin destino, lugares de pago de patentes o multas, carentes de sentido para la mayoría de la población, pero que hoy enfrentan el desafío de un cambio profundo y renovador.

En la estrategia del Gobierno, el plan de desarrollo comunal se encamina al rescate de una organización representativa de la comunidad humana básica que se forma al amparo de un mismo contorno físico y de similares condiciones ambientales. Este rescate de la institución municipal arraiga en una de las tradiciones políticas más fuertes del país. Recuérdese la importancia de los cabildos coloniales, su papel decisivo en la hora de la emancipación y su presencia en el historial de la República, con alzas y bajas inevitables, como exponentes del

sentir local, más ligado con intereses reales que con desvarios ideológicos.

La descentralización representa en teoría un consenso absoluto de la ciudadanía. Sin embargo, la manera de llevarla a cabo siempre encontró resistencias temibles que convirtieron en letra muerta las disposiciones constitucionales de 1925 sobre esta materia.

Igual riesgo se presenta ahora con la ley recién promulgada, que debiera ser el pivote para alcanzar una vigorosa institución municipal y una consistente autonomía local. La interpretación errada del proceso, justamente por parte de quienes están llamados a ser sus primeros actores y beneficiarios, puede frenar el ritmo de un cambio que es indispensable para eliminar el aparato estatal desmesurado, centralista y burocráticamente ineficiente que nos caracterizó.

No han faltado, por ejemplo, profesores de trayectoria que ven en el traspaso de las escuelas a las municipalidades un deseo del Gobierno de "autofinanciar" la educación, ahorrando recursos estatales y gravando a los padres de familia con cargas insoportables. Opiniones de este tenor reflejan no sólo carencia de información, sino también desconfianzas acentuadas y prejuicios que costará deshacer. Por de pronto, tanto la letra como el espíritu del decreto que faculta los traspasos a los municipios dicen exactamente lo contrario de lo que se insinúa como oculto sentido de esta legislación. El decreto establece que el Estado deberá pagar una partida fiscal a las municipalidades para subvenir a los "gastos de operación y funcionamiento que irroque el

servicio transferido". Los objetivos del decreto no apuntan a ninguna economía fiscal por este concepto. Esto se desprende con mucha claridad de la disposición que limita el mayor gasto al decir que "el monto anual de dichos recursos no podrá ser superior a lo que representaba su operación por el organismo del sector público que lo atendía".

En lugar de propender directamente al "autofinanciamiento" —que no existe en el mundo, por lo menos en cuanto se refiere a la educación básica— el decreto puesto en vigencia esta semana persigue incrementar los recursos de las escuelas, postas o servicios que resulten transferidos con los nuevos ingresos provenientes del Fondo Común Municipal, formado con el aumento de la contribución territorial en beneficio de las municipalidades y con aportes voluntarios de la comunidad. El objetivo del decreto, sin duda, es mejorar la calidad de los servicios y racionalizar sus costos sin disminuir sus actuales ingresos, antes bien sumando a ellos la coherencia de una gestión municipal que los operará desde el terreno con mayores fondos y con apoyo de la comunidad, como ocurre en todos los sistemas educacionales más desarrollados del mundo.

AVANCES Y PROBLEMAS

Si bien las municipalidades han despertado del letargo en que estaban sumidas y que llevó a señalar su crisis hacia el final de la década de 1960, los avances de los últimos años presentan ciertos contrastes de cuidado que conviene tener en cuenta.

Si miramos a las finanzas, no cabe duda de que la dictación del decreto ley 3.063 de 1979 significó un avance substancial que multiplica en una vez, por lo menos, los recursos de todos los municipios y corrige los desniveles absurdos que existían entre los ricos y los pobres. Sin embargo, las inversiones municipales representan todavía un porcentaje bajísimo de los gastos totales, siendo generalmente apenas un tercio o la mitad del gasto destinado a pagar al personal de planta. Algunas municipalidades, como la de Santiago, han mostrado que los recursos pueden multiplicarse varias veces si se busca, como es debido, el apoyo de vecinos, comerciantes, empresas y beneficiados más directos con los planes de desarrollo comunal. Ciertas municipalidades han gestionado nuevas funciones con espíritu emprendedor y categoría técnica, pero muchas otras se debaten todavía en la rutina de un mal concepto administrador, sin perspectiva política ni dimensión social.

El mecanismo municipal obtenido en estos años es seguramente el logro más destacado. Hay un abismo de diferencia entre los municipios anarquizados por la disputa permanente entre regidores y el esquema en funciones que entrega a los Alcaldes una responsabilidad amplia de gobierno. Las oficinas de planificación y coordinación han constituido otro progreso importante, sobre todo por su vínculo con los SERPLAC regionales. En cambio, la creación de los Consejos Comunales de Desarrollo, llamados a recoger la participación de la comunidad —centros de madres, juntas de vecinos, organizaciones comu-

nitarias, actividades económicas y gremiales—, no parece haber logrado todavía los frutos que se esperan de estos primeros cauces de representación ciudadana, vitales como contrapeso y asesoría de los alcaldes.

La ampliación del marco de acción de los municipios debería tener, entonces, el efecto de una adaptación obligada del aparato municipal a tareas exigentes como la educación o la salud. El traspaso de establecimientos será ciertamente paulatino y se medirá con mucha severidad el resultado de los planes pilotos de traspaso, pero al extenderse el proceso por todo el país, las municipalidades serán empujadas hacia mejores niveles de conducción y de participación de la comunidad en ellas.

La ley se ha preocupado de cautelar todas las ventajas y derechos de los personales de los servicios traspasados, hasta el punto de que se les permite la opción de quedarse con sus actuales regímenes. El efecto beneficioso de la competencia entre distintos centros para obtener la mejor calidad educacional o la más expedita atención de salud redundará ciertamente en un mejoramiento orgánico del "status" del profesor o del funcionario de salud. En todo caso, la ley es sólo una facultad que abarca en su aplicación un campo enorme de posibilidades. Es impensable, desde luego, un traspaso brusco y generalizado de la dependencia estatal a la municipal, pero el comienzo del proceso pone en marcha, como lo señaló el Ministro del Interior, esa decisión de cada chileno para "ser actor de su propio destino personal y familiar, aprovechando lo más inte-

gralmente posible las instancias participativas que se le brindan".

PARTICIPACIÓN

El defecto más connotado del gran aparato estatal todavía dominante entre nosotros dice relación con la dificultad para aplicar la responsabilidad política y funcionaria de los empleados públicos.

La fiscalización de 100 mil profesores o de 60 mil funcionarios de salud resulta difícil en la práctica. El sistema de inspectores no representa instancias independientes de fiscalización y los responsables políticos de cada Ministerio están lejos en Santiago para recibir las quejas directas de los padres de familia por el funcionamiento de las escuelas o bien de los pacientes mal atendidos en un hospital o una posta de salud. Los sumarios administrativos han sancionado en Chile las conductas contrarias al reglamento, pero nunca ha sido posible castigar la lenidad, la incapacidad o el perjuicio directo que ocasiona una función mal atendida. El continuo y directo planteamiento de los problemas ante los alcaldes y el control que éstos

deberán ejercer sobre los servicios públicos confiados a su dependencia significan un paso resuelto en una dirección vivificante de responsabilidad funcionaria. Los malos alcaldes no podrán resistir la presión local, y la renovación determinará mejores soluciones y mayor autenticidad en la representación de quien debe ser el líder natural de su comunidad local. En otros términos, es el principio obligado de una nueva fase de participación que, en un futuro próximo, cuando se resuelva la nueva institucionalidad política, será la elección de alcaldes.

Cuando se está próximo a iniciar un debate público sobre la nueva institucionalidad política, apenas el Consejo de Estado entregue su informe sobre el anteproyecto constitucional al Presidente de la República, es de la mayor importancia que la ciudadanía advierta en este hito que es el renacimiento de la institución municipal la posibilidad cierta de ir construyendo sobre bases firmes la participación ciudadana y el funcionamiento de una democracia real, como corresponde al anhelo de la gran mayoría nacional.

Derecho a la libertad responsable

(29 de junio de 1980)

En el Hotel Sheraton San Cristóbal se realiza una mesa redonda sobre la libertad de expresión, referida principalmente al anteproyecto de Nueva Constitución chilena y a lo que en él se propone respecto del tema (EM, 27 de junio, pág. 1).

Participan en la mesa redonda Arturo Fontaine, Director de El Mercurio; Enrique Ortúzar, Presidente de la comisión redactora del anteproyecto constitucional; Juan de Dios Carmona, integrante del Consejo de Estado; Emilio Filippi, Director de la revista Hoy, y Alberto Guerrero, Director del diario La Tercera (EM, 27 de junio, pág. C 2).

La Semana Política

EL DEBATE CONSTITUCIONAL

Con la mesa redonda que patrocinó la Asociación Nacional de la Prensa sobre el tema "Libertad de expresión, derecho de todos", se ha iniciado virtualmente el debate sobre la nueva Constitución que deberá regir al país.

Como lo ha expresado S.E., parece necesario que en la nueva Carta Fundamental participe toda la ciudadanía. Ello significa la ratificación por plebiscito, previo el análisis ilustrado de los principales conceptos. Uno de ellos, y por cierto muy fundamental, es el de libertad de opinión y de expresión.

Quienes asistieron a la mesa redonda citada o se impusieron por la prensa de las respectivas intervenciones han destacado la libertad y el alto nivel en que se desarrolló la discusión. Fue un acto que, desde ya, figura como ejemplo concreto de la libertad de opinión existente en Chile.

Hubo allí consenso en el valor y significado de la libertad de opi-

nión, información y expresión, pero en general se vio una tendencia a restringir dicha libertad, por parte de los expositores que han participado en los anteproyectos constitucionales, en tanto que los expositores periodistas se manifestaron partidarios del binomio libertad-responsabilidad para quien ejerce tal derecho.

El debate dejó en evidencia de que todavía falta mucho análisis sobre este problema y que hay necesidad de enfocarlo con la máxima serenidad, bajo el supuesto de que se trata de un elemento esencial para el bien común permanente de todos los chilenos y no un asunto de partido o de mero interés económico.

Desde luego, pese a que el rótulo de la mesa redonda indicaba que esta libertad es un derecho de todos los individuos, el debate apuntó principalmente hacia los periodistas y los medios informativos.

El campo de la libertad de opinión es más amplio que el que aparece a primera vista. En la Constitución de 1925, los parlamentarios

eran inviolables por las opiniones que manifestaban o por los votos que emitían. Se ignora en este momento si tal disposición ha sido alterada en el anteproyecto constitucional del Consejo de Estado, pero en todo caso hay allí un problema de libertad de opinión que debiera analizarse. Los parlamentarios disfrutaban de una libertad absoluta y del ejercicio impune de dicha libertad, con el objeto de no ser amedrentados ni limitados en el desempeño de su mandato popular.

Otro aspecto de la libertad de opinión es la que se ejerce en la cátedra, sobre todo en la Universidad, y que afecta el avance de las ciencias, a la investigación y a la enseñanza seria. La Constitución de 1925 era suficiente para proteger esta libertad de cátedra y no excluía la posibilidad de abusos o delitos en su ejercicio. Se ignora si los nuevos preceptos han tenido en cuenta este flanco de la libertad de opinión, tan significativo para nuestra cultura.

DERECHO A LA LIBERTAD RESPONSABLE

Tratándose de la opinión publicada o divulgada por cualquier otro medio, también surgen temas que necesitan análisis.

La libertad de opinión ¿asiste a cada individuo que pisa el territorio nacional, o al conjunto de individuos que componen el pueblo o la comunidad? En otras palabras, ¿quién es el titular de esta libertad?

Parece evidente que ella, como todas las demás libertades y garantías constitucionales, es de carácter individual, pertenece a la persona humana, es atributo de cada hombre y de cada mujer.

El punto tiene interés, porque en diversas discusiones se ha deslizado que habría un derecho de carácter social consistente en recibir la información veraz, oportuna y objetiva. Los propios periodistas se han referido a este aspecto del problema como un derecho del pueblo a ser informado.

Creemos que este derecho social a la información tiene la misma inspiración ideológica que el derecho de los consumidores a ser bien abastecidos a precios convenientes, principio que originó el Comisariato de Subsistencias y Precios y toda la odisea de fijaciones artificiales de precios y la persecución inútil al acaparamiento y a la especulación. El derecho social a la información justificaría peligrosas intervenciones en los medios de comunicación a pretexto de que faltan a la veracidad u objetividad. Se comprenden las buenas intenciones de los redactores de los proyectos o textos acerca de la materia, pero todo aconsejaría un análisis muy profundo en torno de las proyecciones que tendría este derecho, cuyo titular no podría ser otro que el Gobierno, que cualquier Gobierno sin que faltara en adelante alguno capaz de perseguir a sus adversarios políticos acusándolos de poco veraces u objetivos, o que fijara normas reguladoras de la verdad a través de un Comisariato como el que fijó los precios.

Estas columnas sostienen que el derecho a la libertad de opinión es de carácter individual y que les corresponde a todos los individuos por su calidad de personas. No hay tal derecho del pueblo a ser informado. Existe la necesidad de cada hombre actual de informarse lo mejor posi-

ble, y para eso acude libremente a buscar la fuente de sus informaciones que le parezca más confiable. Nadie debiera en un país libre preocuparse del derecho social a la información. Cada individuo satisfará esta necesidad como una de sus tantas decisiones personales, sin padrinos, protectores o censores.

Otro aspecto de importancia es el de los medios de información, que necesitaría también mayor análisis.

Algunos advierten el peligro que representan dichos medios y les tratan de poner frenos y riendas. Es cierto que existen abusos y delitos, lo que obliga a estudiar una ley eficaz de castigo ejemplar para los delinquentes, incluyendo la responsabilidad del medio que admite la comisión de esos abusos o delitos. Pero una cosa muy distinta es el temor al volumen e influencia de los medios informativos. Si hay verdadera libertad de opinión e información, los individuos tienen también libertad para acudir o no acudir a tales o cuales órganos informativos. Nadie obliga a los ciudadanos a informarse por canales determinados, salvo el caso del monopolio del Estado o de instituciones estatales, como ocurre, por ejemplo, en los países comunistas. No creemos que, en un país libre, el Gobierno tenga el derecho de inmiscuirse en la forma en que los ciudadanos reciben las opiniones e informaciones, a menos que exista un estado de emergencia que imponga esas y otras medidas de seguridad.

Si el órgano informativo falta a la verdad u objetividad, los individuos lo castigarán con el abandono, sin que sea necesaria la interven-

ción del Gobierno. Si sus responsables cometen delitos deberán ser castigados por los tribunales, a requerimiento del Gobierno o de particulares de acuerdo a la naturaleza del delito respectivo.

Lo que parece no tener base es el temor al tamaño e influencia de un medio de opinión, pues esa estatura se la han dado sus lectores o auditores. En otras palabras, el poder de la prensa y de los demás medios de comunicación que están en manos de particulares son el fruto de la libertad de los usuarios, responden a la decisión y a la necesidad de los ciudadanos. Los gobiernos, por su parte, debieran proteger la libertad y el deseo de los ciudadanos, en vez de alarmarse.

Hay otra pregunta que hacer sobre la libertad de opinión, de prensa y de información. Se habla del acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación social. Si esa idea significa que nadie debiera ser privado de su derecho a informarse por el medio que adquiera o al que esté conectado, ella no puede ser más razonable. En cambio, si el acceso a los medios informativos indicara que cada particular puede exigir publicaciones que no sean rectificaciones o aclaraciones, ello envolvería una violación de la libertad de prensa. Esta libertad faculta para publicar y para no publicar. Exigir a un diario una publicación, invocando la libertad del ciudadano, es lo mismo que exigir pasaje gratis en ferrocarril invocando el derecho a trasladarse de un punto a otro del territorio.

Finalmente, cabría señalar el tema del acceso a las fuentes de información, punto que requeriría de un extenso análisis y que ha sido

la causa principal de los grandes debates acerca de la prensa en los Estados Unidos, a propósito de las filtraciones de secretos militares y políticos.

LA CONSTITUCIÓN AVANZA

El cambio de ideas sobre libertad de opinión muestra que es conveniente el análisis del tema. Igual puede ocurrir con el resto de las proposiciones del Consejo de Estado.

La Junta de Gobierno estudia hace mucho tiempo sus propias fórmulas constitucionales, pues a ella le corresponderá ejercer en definitiva el poder constituyente, con ratificación plebiscitaria.

La afirmación del Presidente de la República de que habrán de participar todos en las fórmulas constitucionales no sólo deja abierto el debate público sino que precisa

que el texto definitivo será el que apruebe la Junta de Gobierno.

Lo que ocurre con la libertad de opinión e información puede suceder en otros aspectos de la Carta Fundamental. El informe del Consejo de Estado será un elemento muy valioso para el poder constituyente, pero la ciudadanía tiene derecho a solicitar análisis o rectificaciones de los puntos propuestos por el mencionado Consejo.

El país sabe que las metas esenciales del régimen militar son establecer una autoridad firme en la cabeza del Estado y una amplia libertad real de los individuos en la base de la sociedad. Espera, pues, que el texto constitucional que rijan en el futuro exprese sin contradicciones ni vacilaciones esas grandes metas. Ellas justifican generosamente los sacrificios y trabajos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, así como de todos los chilenos.

Análisis de una crisis

(13 de julio de 1980)

El artículo se refiere al informe elaborado por el Consejo de Estado respecto del anteproyecto constitucional que fue sometido a su estudio. Se detalla lo que este informe dice acerca del pasado constitucional y las causas de la crisis de los años 70-73.

El informe del Consejo de Estado, presidido por el ex Presidente Jorge Alessandri, junto con el proyecto constitucional entregado por dicho Consejo fueron publicados en un suplemento especial de El Mercurio el 9 de julio de 1980. El día 10 se publica el texto del voto de minoría presentado por los consejeros Pedro Ibáñez y Carlos Cáceres (EM, 10 julio, pág. C 6).

La Semana Política

FORMULACIÓN DE PROYECTOS CONSTITUCIONALES

El informe del Consejo de Estado acerca del anteproyecto constitucional iniciado en la Comisión Ortúzar contiene reflexiones interesantes sobre otras experiencias de proyectos chilenos de constituciones.

Sostiene desde luego el informe que ni la Constitución de 1833 ni la de 1925 fueron estudiadas en asambleas elegidas por el pueblo. La del 33 fue aprobada por 20 notables, de los cuales 14 eran parlamentarios, pero en el hecho, según el Consejo de Estado, fue estudiada y redactada por una comisión de siete miembros, entre los cuales sólo Egaña y Gandarillas tuvieron decisiva intervención.

La de 1925 fue estudiada por una comisión designada y presidida por don Arturo Alessandri Palma.

"En los tiempos que corren y dada la experiencia acumulada —asevera el informe del Consejo— resulta incongruente pretender que legis-

lación tan delicada pueda ser obra de una asamblea".

Luego el informe trae a colación el hecho de que en distintas oportunidades, vigente ya la Constitución de 1925, el propio Congreso reconoció tácitamente la imposibilidad de estudiar y despachar materias complejas, al delegar sus facultades legislativas en el Presidente de la República, pese a que tal delegación no estaba autorizada en aquella Constitución, pues sus redactores rechazaron una iniciativa del Presidente don Arturo Alessandri Palma en tal sentido.

Con estos antecedentes, el Consejo llama a la reflexión a quienes han pretendido confiar a una asamblea de elección popular la misión delicadísima de redactar y aprobar la Carta Constitucional. La composición política de aquella asamblea y la orientación de su voluntad dependerían de las reglas que se establecieran para elegirla. Estas reglas no tendrían por qué ser más ni menos discrecionales que las que generaron las comisiones que dieron

nacimiento a las constituciones de 1833 y 1925. Por último, el resultado jurídico del debate asambleístico tampoco debería ser más racional y justo que el que arroje la reflexión de algunos hombres prudentes luego de un debate público sobre los proyectos.

ANÁLISIS DE UNA CRISIS

Parece casi innecesario decir que las posibles aspiraciones a asambleas populares constituyentes han quedado hoy fuera de discusión, desde que existe un anteproyecto constitucional que dará base para el necesario análisis de los problemas importantes de nuestra convivencia civil.

Es reveladora la interpretación que hace el Consejo de Estado acerca de la génesis de la crisis de 1970-1973. Dicha interpretación ilustra acerca de las líneas generales del proyecto.

El informe anhela un Ejecutivo fuerte, como "autoridad central dinámica, eficiente y honesta", poder cuya eficacia se remonta a los mejores tiempos de la época colonial y coincide con los períodos de grandeza de la República, pues la Constitución de 1833 recoge tal principio. El esfuerzo por limitar el poder presidencial es constante a lo largo de nuestra historia y culmina en la revolución de 1891, al establecer un parlamentarismo *de fació*. La Constitución de 1925 es un nuevo esfuerzo de restauración de la autoridad presidencial, que viene a ser desvirtuado, porque no se acogieron todas las ideas de don Arturo Alessandri Palma en el proyecto aprobado, lo que permitió que los sectores contrarios a la autoridad

presidencial desfiguraran las normas. A esta labor desquiciadora prestaron colaboración eficaz los partidos marxistas.

Según el informe, "la llegada al poder de estos partidos" tuvo por causa principal el "mal uso deliberado que se hizo del sistema".

Una segunda causa de la crisis sería "la nefasta acción desarrollada por ciertos medios de expresión". La práctica deliberada de la calumnia y la mentira dificultaba a la ciudadanía para distinguir entre hombres públicos honestos y deshonestos. De ahí que, "salvo honrosas excepciones, los ciudadanos de mayor capacidad y rectitud prefieren mantenerse alejados de toda actuación pública".

La obra perniciosa de ciertos medios de expresión habría, pues, alejado de la política a muchos valores.

Una tercera causa de la crisis residiría en la "politización de gremios y sindicatos", que permitió la confusión de intereses, iniciativas e influencias en términos que comprometieron el progreso económico, la paz y la justicia.

Oposición al poder presidencial, desbordes de ciertos medios de información y politización sindical serían los factores de una de las más hondas y graves crisis que ha sufrido la República.

CONSECUENCIAS DEL ANÁLISIS

La interpretación del informe acerca de dicha crisis explica las severas limitaciones a que quedan sometidos el Congreso y sus miembros en el anteproyecto; el mecanismo represivo que establece respecto de la prensa y demás medios de

comunicación social; y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que trata de impedir que los dirigentes sindicales actúen en política y que los políticos sean útiles en la vida sindical.

La concepción del nuevo sistema es que los frenos y debilitamientos de los factores negativos debieran evitar un nuevo desastre institucional.

Puede decirse que hay amplio consenso en cuanto a las ventajas del régimen presidencial chileno y de la necesidad de que el ordenamiento jurídico se funde en la autoridad central, vigorosa e impersonal del Presidente de la República.

Pocos objetarán la tesis de que el debilitamiento de la autoridad presidencial coincidió con los peores tiempos del país, en tanto que los períodos claramente presidenciales fueron los de mayor brillo y prosperidad.

La duda se plantea, sin embargo, en torno a las causas de las ambiciones y mezquinos intereses que buscaban erosionar la autoridad presidencial. En algún tiempo ellas pudieron ser ambiciones o intereses personales o de círculos sociales. Más adelante ha ocurrido que la autoridad central no sólo acumulaba el poder político sino el económico y, gracias a la extendida intervención estatal, disponía de una oferta de empleos y de recursos para el enriquecimiento particular que parecían casi inagotables.

Es posible que si el Estado no estuviera en condiciones de ofrecer oportunidades prácticamente ilimitadas de poder y riqueza, las luchas políticas pudieran dejar de brindar expectativas a las ambiciones e intereses más mezquinos.

En otras palabras, el fenómeno del estatismo, como elemento corruptor de partidos, de funcionarios y de individuos o empresas particulares, no aparece como elemento de relieve en el informe de la mayoría del Consejo de Estado, si bien reflexionan sobre él los señores Pedro Ibáñez y Carlos Cáceres, en su informe de minoría.

La descentralización del poder económico y social, es decir, el que da la propiedad de las empresas, el que confiere el monopolio de ciertas actividades o el que proporciona la concentración del poder educacional, sindical, informativo u otros, parece un elemento de la estructura del país tendiente a facilitar un poder político más libre y más consagrado a sus fines específicos.

En lo que se refiere específicamente a la politización gremial y sindical, surge también la duda acerca de si la vida laboral se politizaba por falta de normas constitucionales o porque era una exigencia implícita en el sistema estatista. En efecto, si el Estado es el principal empleador y, además, regula todas las decisiones de los empleadores del país, parece lógico que los sindicatos acudieran al poder político y que se sirvieran de gestores políticos.

Tal vez un sistema flexible y descentralizado de la vida sindical y gremial haga menos frecuente la tentación de hacer política en la vida laboral o de utilizar la influencia sindical para trepar por la escalera política.

El estatismo no ha sido sólo un factor de corrupción y de irritación de los apetitos, sino que, además, ha provocado un lentísimo desarrollo económico. Los partidos marxistas y los demagogos de todos los

signos no han hecho más que recoger las duras consecuencias sociales de un sistema en que uno de cada cinco chilenos ha estado en la extrema pobreza y en que casi todos los demás han vegetado en un nivel carente de aspiraciones, a la vez que de los servicios e instrumentos propios de la vida moderna.

Un estudio cuidadoso de las diversas proposiciones del Consejo de Estado podrá determinar si ellas envuelven un ambiente propicio al desenvolvimiento de la efectiva libertad de los ciudadanos y, por tanto, un rechazo del estatismo y del monopolio.

El tema de las limitaciones a la libertad de opinión e información ha sido ya debatido. La alternativa se da en este punto entre un mecanismo de represión y comprensión, que tiene poco futuro en el desenvolvimiento de las luchas políticas, o una norma que asegure francamente la libertad y que asegure con igual fuerza la responsabilidad de quienes la ejerciten.

También cabe preguntarse si los abusos de los medios de expresión fueron un efecto del sistema o una causa de la crisis de éste. Habría que discutir aquí las demasías de ciertos indultos presidenciales a injuriadores y las insuficiencias de las leyes, pero, sobre todo, habría que hacer presente que el país experimentaba un proceso revolucionario de clara inspiración extranjera, que financiaba manifestaciones, actividades y publicaciones, y que por último logró manejar con eficacia para sus fines el poder económico del Estado. Las proposiciones del Consejo se ocupan de proscribir esas actividades revolucionarias o desquiciadoras.

El informe del Consejo de Estado abre un amplio campo a la meditación y al debate. Empieza en el análisis de la crisis y termina en un anteproyecto. La materia es de mucha trascendencia y de gran interés público. No tardarán en multiplicarse las opiniones sobre la extensa obra del Consejo.

Proyecto constitucional

(20 de julio de 1980)

Continuando con el análisis del anteproyecto constitucional, tal como salió de su paso por el Consejo de Estado, se detalla y examina el contenido del artículo octavo del mencionado proyecto, y en la segunda parte se pasa revista a las disposiciones transitorias y a aquellas que se refieren a las Fuerzas Armadas.

La Semana Política

EL PROYECTO CONSTITUCIONAL

Resulta difícil para la prensa efectuar el análisis del anteproyecto constitucional que el Consejo de Estado elaboró sobre la base del proyecto Ortúzar. Pocas son, en verdad, las opiniones que se han vertido sobre el fondo de los problemas constitucionales que surgen del proyecto y parece prudente esperar el juicio de los juristas y pensadores políticos sobre tan grave asunto antes que avanzar comentarios periodísticos acerca del tema.

Con todo, hay preguntas que surgen inevitablemente a la vista del anteproyecto de Constitución.

El artículo 8º, cuya redacción inicial no sufrió alteraciones en el análisis practicado por el Consejo de Estado, declara que es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República todo acto de persona o grupo destinado a "propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases".

Se comprende la intención de este precepto. Sus forjadores han proclamado que la institucionalidad

en proyecto hará que el Estado deje de ser doctrinariamente neutral y se coloque abiertamente en una postura anticomunista y pro democrática.

El artículo 8º representa un esfuerzo —sin duda encomiable— por definir al adversario del nuevo régimen, esfuerzo que es tanto más ímprobo cuanto menos claras aparecen las líneas de la nueva concepción institucional. En efecto, si el proyecto hubiese entregado el esquema de una organización libre, sin mezcla alguna de estatismo ni de pretensiones socialistas, habría sido menos difícil excluir los regímenes totalitarios con el simple repudio a los actos contrarios a los principios esenciales y libertades fundamentales que la Constitución consagra. Lamentablemente, el anteproyecto contempla la pena de privación de la nacionalidad en virtud de amplias causales; establece el voto obligatorio; garantiza el derecho a vivir en un ambiente incontaminado; garantiza también la ejecución de las acciones de salud; incorpora el derecho a la educación; limita drásticamente la libertad de opinión; regimenta la organización de partidos políticos; constriñe la libertad de trabajo y somete a la ley las exigencias para desempeñar

ciertas profesiones, autorizando al legislador para exigir la colegiación obligatoria; impone el derecho a la seguridad social; faculta expresamente al Gobierno para desarrollar actividades empresariales; autoriza formalmente regímenes y franquicias excepcionales; admite leyes generales de expropiación y extiende las causales que pueden invocarse para ello; faculta al Estado para reservarse la explotación de determinadas sustancias minerales y, en fin, abre muchas puertas a la intervención del Estado, desdibujando el esquema de autoridad y libertad que se lleva a la práctica desde el Gobierno en estos momentos.

Como el régimen de libertad no se enuncia clara y firmemente, el anteproyecto condena actos tan difíciles de precisar como la propagación de doctrinas que atentan contra la familia, o que propugnen la violencia o respondan a una concepción totalitaria o fundada en la lucha de clases. Situados desde el punto de vista de los autores del anteproyecto, la disposición es clara y tiende a condenar al extremismo comunista, mirista, socialista o fascista; pero si esta disposición fuera aplicada por tendencias contrarias, a los sustentadores de éstas les sería fácil impugnar las actividades democráticas tildándolas de totalitarias o de fundadas en la lucha de clases (la lucha de los ricos contra los pobres, el sitio por hambre a la familia obrera, la violencia institucionalizada, y demás torsiones de los conceptos, a las cuales los marxistas nos tienen habituados).

Son graves las penas a que están expuestos aquellos que el Tribunal Constitucional sancione por estos delitos.

Reconociendo la necesidad de que el pluralismo político no llegue hasta el diálogo con los adversarios del propio diálogo, es decir, con los enemigos de la democracia, parece ineludible que la claridad de la norma que excluya a éstos fluya de la completa nitidez del proyecto de sociedad libre que se reflejaría en la nueva Constitución. En otros términos, las puertas pueden cerrarse a los enemigos de la libertad para que ésta funcione, pero es discutible y casi impracticable formular rechazos puramente políticos dentro de un sistema que no difiere en esencia de lo que aspiran los rechazados.

El punto que tocamos no deja de tener importancia, pues se refiere a la amplitud con que se conciba nuestra futura organización política.

OTROS TEMAS CONSTITUCIONALES

Apenas rozando algunas de las materias del anteproyecto, habría que preguntarse si las disposiciones definitivas están pensadas por sus redactores para que se apliquen durante el Gobierno del Presidente Pinochet, o si están concebidas como permanentes.

El período transitorio contemplado hace pensar que el cuerpo de disposiciones es definitivo. Sin embargo, la amplitud de las facultades que se conceden al Gobierno en los estados de emergencia casi no parecen concebibles si un partido o un grupo de partidos llegara al poder. La enorme confianza que se deposita en el Presidente es admisible respecto de la persona del general Pinochet, en las circunstancias muy especiales y excepcionales en que le tocó asumir el mando supremo.

Es al menos comprensible que se pueda dudar de que ese poder se traspase a mandatarios civiles que pudieran representar una bandera ideológica o política.

El período de transición contemplado en el anteproyecto debilita notoriamente las atribuciones de la Junta de Gobierno, cuyas potestades constituyente y legislativa han sido indispensables para lograr el avance institucional y económico ya logrado. Disminuir esos poderes y entregarlos a una asamblea amplia y deliberativa podría poner en serio peligro el programa de las siete modernizaciones, que es el pilar básico de la verdadera democracia.

Innecesario es añadir que la minimización de la Junta de Gobierno significa alejar de las responsabilidades del Estado a las Fuerzas Armadas y de Orden, antes de que se hayan cumplido las metas del régimen y consagrando una situación de manejo difícil, cual es la de un Presidente militar que estaría alejado del apoyo del conjunto de las instituciones de la defensa.

Un punto importante en el anteproyecto constitucional es el del papel de las Fuerzas Armadas en la nueva institucionalidad.

Aun los opositores más obsecados del régimen tienen que reconocer que las Fuerzas Armadas quedaron en posición disminuida en el anterior régimen institucional, por causa de las vicisitudes que se experimentaron desde 1924. Hoy todos reconocen que las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen un papel esencial en el resguardo de la seguridad nacional y como instancias últimas de la defensa de las instituciones básicas.

Tanto el proyecto Ortúzar como el que aprobó el Consejo de Estado reglamentan con detalle la naturaleza, funciones y atribuciones de las Fuerzas Armadas y de Orden. Ambos proyectos proclaman que estas instituciones "garantizan el orden institucional de la República", frase cuya trascendencia para el futuro debiera ser muy meditada. Lo diga o no la Constitución, las Fuerzas Armadas y de Orden han probado ser el soporte del orden institucional de la República. El problema reside en las interpretaciones que el día de mañana pueda llegar a tener un concepto tan amplio.

El proyecto Ortúzar, después de afirmar el carácter profesional, jerárquico y disciplinado de las Fuerzas Armadas, añade que ellas serán obedientes "a sus mandos", lo que en principio podría entenderse como que los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden dispusieran de cierta autonomía frente al Gobierno.

El proyecto del Consejo de Estado declara que estas fuerzas son obedientes y no deliberantes, haciendo presumir que quedan a disposición del Gobierno y sin que puedan calificar políticamente las órdenes de éste.

Se comprenderá que dicho aspecto de la Constitución se relaciona con la estructura misma del Estado y con el funcionamiento de los poderes públicos en la nueva institucionalidad política.

En el proyecto Ortúzar, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros son designados por el Presidente de la República "de entre los oficiales que tengan el grado siguiente más alto que la ley con-

temple para la respectiva institución", duran cuatro años en sus funciones y son inamovibles en sus cargos.

El proyecto del Consejo de Estado permite al Presidente designar de entre los generales o almirantes a los Comandantes en Jefe de las instituciones, pero no habla de inamovilidad ni de plazo para el desempeño de los cargos.

Se registra aquí una diferencia marcada entre ambos proyectos, lo que, a su vez, influye en el margen de libertad que tenga el futuro Presidente de la República respecto de los institutos armados.

El problema se presentaría difícilmente, por ejemplo, en el caso del propio Presidente Pinochet en su relación con las instituciones armadas, pero ciertamente esta materia se presta a una discusión muy amplia sobre el ámbito futuro que tenga el régimen civil o el cívico-militar que pudiera instaurarse.

No pretenden estos comentarios una toma de posición acerca de las proposiciones constitucionales del Consejo de Estado, sino simplemente procuran que se reflexione sobre problemas que parecería aconsejable resolver por el poder constituyente.

Modelo y moral

(23 de noviembre de 1980)

El artículo se refiere a la necesaria relación que debe existir entre el modelo económico que se está poniendo en práctica en el país y la actitud moral que deben tener quienes participan en la vida económica.

La Semana Política

OBSTÁCULOS AL MODELO

El éxito del modelo chileno, no ya tan sólo como instrumento de desarrollo económico, sino también como camino para el desenvolvimiento político de las naciones pobres, empieza a reconocerse internacionalmente.

Son cada día más numerosas las opiniones de expertos y los reconocimientos de visitantes acerca de los progresos de la economía chilena y de los pasos efectivos que se están dando entre nosotros hacia el despliegue de la libertad individual.

El acierto del modelo está en haber actualizado y vitalizado los principios del liberalismo clásico, aplicándolos con un rigor y una intensidad equivalentes a una profunda revolución.

El país se transforma a ojos vistas desde las indumentarias y los utensilios domésticos hasta las actitudes y costumbres de la gente. Aficiones y actividades que parecían arraigadas para siempre caducan, en tanto que despiertan nuevos apetitos y modalidades de vida que parecían exóticos o irreales.

Un nuevo género de laboriosidad se impone. Un clima de competencia genera a la vez dinamismo e inseguridad, mezcla que somete a los individuos a grandes tensiones.

La necesidad de adaptarse a la lucha rigurosa contra el competidor externo y contra el competidor nacional, que se moderniza y mejora en eficiencia, va incrementando las inversiones e incorporando tecnologías y métodos idóneos para las circunstancias provocadas por el modelo.

El premio de las tensiones es el mayor bienestar y la hasta hace pocos años inconcebible amplitud de posibilidades materiales e intelectuales que se abren a los individuos.

Ya es casi un lugar común decir que el modelo chileno afirma y desarrolla la libertad individual, en el sentido de que ensancha el margen de decisiones económicas, lo que pone a nuestro país en el camino de las más amplias libertades políticas, a través de una evolución lenta como la requerida después del trauma de la ex UP, así como de los fracasos de los ideólogos y dirigentes del antiguo régimen.

Se sabe, además, que el sistema permite la asignación óptima de los recursos, porque el libre movimiento del trabajo y del capital, la soberana decisión de los compradores y vendedores de bienes y servicios, hace que los factores productivos se dirijan hacia donde tienen expectativas mayores, es decir, a donde rinden más.

El modelo parecería ser la solución absoluta de todos los problemas de Chile y aun de otras naciones en desarrollo, con sólo dejarse llevar por la fuerza del mercado, si no fuera que dicha solución tropieza con obstáculos en su aplicación plena. Diríamos que el modelo es el mejor concebible, a condición de que los individuos no abandonen la moral mientras ejercitan su libertad de decisión. Diríamos también que el modelo es el mejor concebible, siempre que los intereses de poder que se generan desde el Gobierno dejen de interferir en el juego de la libertad de todos para decidir.

MODELO Y MORAL

Forzoso es afirmar que la actividad humana está sometida a instancias morales superiores al mero capricho individual. Es cierto que nadie podría invocar derecho a inmiscuirse en el recinto de las conciencias y a intentar que la moral se imponga desde el exterior y por la fuerza. Las inquisiciones de antaño y de hoy resultan sospechosas cuando no realmente inaceptables. El campo de la ley y del Estado es distinto al más amplio de la moral. Si bien no es admisible que se pretenda regular coactivamente la conducta íntima de los individuos, también resulta absurda la pretensión de que el puro arbitrio de cada cual se imponga sin freno como regla única de la vida moral.

El modelo neoliberal que está imponiéndose en nuestro país exalta —con razón— la libertad de los individuos y desarrolla el sentido de la búsqueda del propio interés. Ello, lejos de merecer censura, es digno de elogio. Hay que tener en

cuenta, sin embargo, que las sociedades edificadas sobre tales principios han sufrido quebrantos a lo largo de la historia y que, concretamente, el Chile de hoy no es ni mucho menos el único caso en que se experimentan el liberalismo y el capitalismo. Vale la pena entonces referirse, aunque sea sucintamente, a los factores de fragilidad o sobrevivencia de este modelo, tan justo y adecuado para la mejor asignación de los recursos, así como tan idóneo para accionar dinámicamente el desarrollo político, social y económico.

Uno de tales factores parecer ser la confusión entre la libertad y el libertinaje. El individuo que se siente dueño de un amplio margen para sus decisiones puede optar entre la satisfacción de las necesidades legítimas y el empleo inadecuado de su tiempo y sus recursos. ¿Podrían las leyes y normas externas conseguir un empleo correcto de la libertad individual? La respuesta afirmativa a tal proposición implica aceptar la tutela del Estado y el dirigismo burocrático, o si, se quiere, incorporar prácticas medievales particularmente repudiadas por las mentalidades progresistas. El extendido fracaso del Estado benefactor reside en su carácter retrógrado, pese a sus aires modernos y prometedores.

Las leyes y la policía son incapaces de inculcar la moral, a menos que se trate de los principios del derecho, es decir, de aquellos aspectos de la ética y de la conducta de las personas que atañen a terceros y que les causan daño apreciable. No hay entonces que pedir a la ley que inculque moral, a menos que nos situemos en concepciones

retrogradas y fanáticas en las cuales sucumbe fatalmente la dignidad humana, a la vez que se mutilan las dimensiones alcanzadas por el hombre moderno.

Hay que aceptar el valor de la libertad individual, así como la incompetencia del Estado —o de la burocracia— para regular la conducta de los individuos más allá del campo del derecho. Ello no significa, sin embargo, que las leyes del mercado y que el predominio del más fuerte económicamente sean el único criterio de una sociedad libre.

Luego de la aventura socialista marxista de Chile, que tanta influencia tuvo sobre las mentalidades intelectuales —antes, durante y después del régimen del Presidente Allende—, y que tan honda huella dejó en el ámbito espiritual, incluidos ciertos sectores importantes de la Iglesia Católica, amplios grupos ciudadanos se han alzado íntimamente contra las antiguas regulaciones, aspirando a la genuina libertad y emancipándose de tuiciones partidistas o clericalistas.

Sin embargo, la independencia respecto de las tutelas estatistas, partidistas o eclesásticas no podría significar rebeldía ante la moral.

El modelo que se aplica en Chile puede funcionar estable y durablemente en la medida en que valores como el patriotismo, la generosidad personal, la rectitud, la veracidad, el desprendimiento y la limpieza de costumbres encuentren cabida predominante en nuestra sociedad. Esto no es problema de leyes o de acuerdos de la Junta de Gobierno. Es asunto de cada ciudadano, empezando por los más poderosos y destacados. El modelo

neoliberal es reconocidamente el más acertado como instrumento de desarrollo pleno de las sociedades pobres, pero su estabilidad y sobrevivencia van a depender de que sus protagonistas no acumulen odios sociales destructivos y logren erigirse en líderes y en ejemplos.

En nombre de la libertad vemos que prolifera toda clase de invitaciones a la comodidad, al bienestar, a la relajación y hasta al franco vicio. También en nombre de la libertad se divulgan invitaciones al interés pecuniario y al lucro. Todo ello está en el marco de la libertad, a condición de que también se invite a la superación moral, al patriotismo, a la abnegación, a la consagración a altos valores metafísicos, poéticos o artísticos en general, y, en fin, a todo aquello que enaltece a una sociedad mostrando las verdaderas dimensiones de ésta y haciéndola digna del destino eterno del hombre.

MODELO Y ESTADO

Un sistema político y social verdaderamente libre no puede prescindir del Estado. A este último corresponden las más nobles tareas en resguardo del bien común. Le pertenecen nada menos que la seguridad, la justicia y el orden. Palabras de dar y recibir; luego de varios siglos de uso, pero valores significativos para todo el ámbito de la acción de las personas, cualquiera que sea la dirección que impriman a sus tareas.

Sin seguridad, orden y justicia quedan objetados y amenazados la ciencia, el arte, la enseñanza superior y las demás, la vida ciudadana, la existencia familiar, el trabajo y

la actividad económica; en fin, sin justicia y orden no hay propiamente sociedad humana.

Las sociedades modernas se encuentran con el problema de que el Estado, además de ocuparse de la seguridad, la justicia y el orden, se introduce en actividades propias de los ciudadanos comunes y corrientes. En ciertos países el Estado realiza actividades mineras, agrícolas, industriales, comerciales o de construcción, o ejecuta una o dos de las mencionadas tareas.

No faltan observadores que, examinando la evolución actual de nuestro país, advierten que nos encontramos en un momento crítico de nuestra marcha hacia el desarrollo pleno: o Chile continúa liberando sus factores productivos para colocarse en un plano de eficiencia comparable con las más prósperas naciones, o triunfan las pretensiones retrógradas, apegadas a los viejos privilegios, a los pequeños mono-

polios funcionarios, a las prácticas de aldea.

En estos momentos el modelo chileno recibe numerosas señales de aprobación por parte de elementos calificados de las más diversas naciones. En esta etapa de nuestro desarrollo lo aconsejable parece ser: primero, que las instituciones más llamadas a hacerlo redoblen su influencia para destacar los principios morales y su gravitación sobre las vidas de los ciudadanos; segundo, que los resabios del viejo estatismo controlista cedan el paso a la liberación cada vez más completa de las energías nacionales.

La derrota de los odios es una empresa moral que no puede descuidarse, así como tampoco puede serlo la victoria sobre el relajamiento de las costumbres. A la vez, la derrota del estatismo es una empresa política cuyo avance es notorio, pero que tiene todavía varias jornadas por recorrer.

Políticas universitarias

(30 de noviembre de 1980)

Como se ha hecho en artículos anteriores, en forma periódica, se insiste en la necesidad de definir la política universitaria, elaborando un proyecto global sobre los objetivos y modalidades de funcionamiento en un marco de libertad académica y de orden.

La Semana Política

Los conflictos que han surgido en el último tiempo en los planteles universitarios constituyen una señal de alarma para las autoridades, que las invitará a examinar críticamente la forma como se conducen en la actualidad estas instituciones. En el momento de iniciarse la actual administración estas entidades atravesaban por un estado de crisis que hacía temer por su subsistencia, y sólo una acción decidida de parte de las autoridades pudo rectificar esta grave situación. Desde entonces se han ido superando el desorden y la politización que impedían un normal desarrollo de la vida académica, pero desde el punto de vista administrativo no ha habido una evolución acorde con tales hechos.

En tanto que por la acción de este Gobierno se perfila un proyecto definido para la mayor parte de las actividades nacionales, la Universidad, área fundamental para la vida del país, continúa bajo el mismo régimen jurídico de excepción que fue necesario adoptar en 1973. La carencia de una orientación definida en este aspecto causa desilusión a muchos académicos que inicialmente se mostraron interesados por las transformaciones sociales liberadoras que ha realizado el Gobierno. Dicha frustración se ha ma-

nifestado en la pérdida de su voluntad de colaborar, lo que dificulta ahora la superación de los problemas que han surgido recientemente.

Es innegable que la gestión de los rectores-delegados permitió que las universidades recuperaran el espíritu que deben tener estas instituciones, pero por esta misma razón es necesario avanzar a una nueva etapa, en que se fortalezcan los valores propiamente académicos. Nadie mejor que los profesores más destacados de cada plantel para realizar esta labor, siempre que cuenten con la autonomía suficiente.

Las tareas por realizar son de la mayor importancia para alcanzar un nivel concordante con la trascendencia de la misión universitaria. Son necesarias, en primer lugar, la racionalización y redefinición de los estudios que se ofrecen a los estudiantes, los que no siempre han alcanzado una categoría adecuada. Esto debe llevar a una mínima coherencia entre los títulos y grados que entregan las distintas universidades. Pero, además de los problemas relacionados con la docencia, cabe delinear una política de investigación científica que permita el desarrollo efectivo de esta actividad primordial de la vida académica. Si sumamos a éstas las definiciones

que deben efectuarse en lo que se refiere a extensión, a regionalización, a la carrera académica, al ordenamiento administrativo y, en fin, al financiamiento de todas estas actividades, se comprende que la labor pendiente es de enorme magnitud y fundamental importancia.

Hace ya más de un año, S.E. el Presidente de la República hizo presente la necesidad de avanzar hacia una nueva institucionalidad universitaria que sirviera como base sólida para el desarrollo futuro de estas instituciones. En esa oportunidad el Presidente envió al Ministro de Educación un documento en que señalaba las principales tareas en el ámbito educacional, las que por cierto incluían la definición de una política global de universidades. La lentitud con que se ha procedido en estas materias, por causa de preocupaciones más apremiantes, hace peligrar lo que se había conseguido hasta ahora. Los disturbios ocurridos en los campus, aunque limitados y parciales, han hecho reaparecer conductas violentas y antiuniversitarias que parecían superadas. El estado de indefinición del futuro de estas instituciones contribuye en parte a generar tal situación. Para resolver los problemas que amenazan la tranquilidad de los claustros es indispensable proceder con urgencia a una definición de políticas permanentes que aseguren la estabilidad necesaria al desarrollo de las actividades académicas.

PROYECTO GLOBAL

Dicha definición de políticas universitarias dista de ser algo obvio y sencillo. Ciertamente el régimen ha tardado en encontrarla, en-

tre otras razones, por la propia dificultad del tema. La presión de problemas inmediatos probablemente obligó a dejar para más adelante lo que requería una meditación muy honda y un trato muy fino para los asuntos que conciernen a la formación superior de los chilenos.

En asuntos tales como la política fiscal, monetaria, cambiaria, crediticia, de comercio exterior y de precios internos, el Gobierno aplicó un proyecto global. Lo mismo hizo para la solución lógica de los problemas laborales. Una fórmula también global va a aplicarse a la previsión social. Es probable que algo semejante ocurra con el enfoque de la salud. Se diría que la ausencia de un esquema integral tiene gran parte de la responsabilidad de las demoras en la formulación de la Carta Constitucional aprobada en el plebiscito del 11 de septiembre.

En materia universitaria se requiere un proyecto global, por naturaleza más ambicioso que los demás —incluida la Constitución—, desde que atañe a la idea del hombre, de la cultura y de las exigencias de quienes se dedicarán a los saberes superiores. Saber qué se persigue con la Universidad, para qué sirve ese magnífico instrumento, qué melodía de conjunto deberá tocar y cuáles serán las modalidades particulares de las distintas disciplinas que armonizan con la dirección general es una tarea que supone reflexión, sentido universal y percepción aguda de los verdaderos valores nacionales. La Universidad forma los mandos intelectuales del país. No es cosa de técnicas ni de modas. Atañe a la función misma de la inteligencia en la sociedad

chilena. No en cualquier sociedad. En la nuestra.

Sin pretender en estas líneas decir nada nuevo ni exhaustivo sobre tan agudo como trascendental problema, parece evidente que el valor clave inspirador de un proyecto universitario es la libertad, la libertad académica, se entiende. No cabe un genuino saber superior instrumentalizado, hecho consignas y dogmatismos, así como no es compatible el desenvolvimiento de la ciencia en un clima de suspicacias, espionaje o rígidos controles autoritarios.

La libertad académica es la inapreciable meta. Pero libertad académica no significa violencia en los claustros ni falta de respeto para la auténtica enseñanza o investigación universitaria. No son libertad el bullicio, el chantaje, el amedrentamiento físico o moral, la demagogia estudiantil o la de los profesores; la falta, en suma, de aquella tranquilidad necesaria para la exploración de los territorios reservados a las ciencias. Varios de los universitarios chilenos más distinguidos han sufrido, aun antes de 1970, el deterioro de la libertad académica por causa de las ideologías totalitarias en las universidades. Por difíciles que pudieran ser las circunstancias en que algunos académicos trabajan hoy, se diría que no hay comparación alguna con aquellos tiempos de anarquía y desamparo que se vivieron luego de las mal llamadas reformas universitarias.

Sin orden no hay libertad, así como sin autoridad no es concebible el orden de una sociedad. Luego, la exigencia esencial de la vida académica, que es la libertad, no se cumple sin una autoridad regular y efectiva.

Quienes, a pretexto de libertad, propician fórmulas acogedoras del imperio de las mayorías en la Universidad, o desearían que los claustros se plegaran al sentimiento ocasional del alumnado, o que, de una manera u otra, entienden que la Universidad no se estableció para la ciencia y para la sociedad sino para las inquietudes revoltosas de algunas minorías, no hacen más que precipitar el fin de la libertad académica, el imperio de la demagogia y el reino de los usurpadores de los principios universitarios. Nuestro país ya ha experimentado la trayectoria fatal que empieza en la falsa libertad demagógica y vocinglera para terminar en el despotismo del miedo o en la mediocridad aplastante.

LA TIRANÍA DEL ESTUDIO

Una sola tiranía admite la Universidad: la del estudio. Los estudiantes ociosos y deambuladores constituyen el principio de la desnaturalización de la Universidad. Fácil es que los claustros descendan, por causa de la indisciplina mental, sobre todo, al estado de plazas públicas abiertas a los vendedores de baratijas y a las prédicas de ilusionistas o charlatanes. No hay como la tiranía de las pruebas exigentes con fecha fija y las imposiciones de lecturas, investigaciones, análisis y documentos de tesis, para poner término a la pereza juvenil disfrazada de gritería, agresividad y crítica vacía al "establecimiento". La ciencia—en general, y hablamos de las ciencias de la naturaleza, así como del saber humanista— no se hace por los vendedores de recetas mágicas, por los sofistas que fueron

víctimas de la ironía de Sócrates, ni por los apóstoles de la violencia. La ciencia es obra del estudio paciente y disciplinado, a menos que hablemos de conocimientos celestiales independientes del esfuerzo del hombre.

Hay universidades en que la tiranía del estudio se establece por un medio simple: el alumno no puede ser promovido al tercer año de su escuela sin pasar previamente por un severísimo examen que determina su futuro académico. Con dicha prueba, colocada en los primeros años de la vida universitaria, el estudiante idóneo sigue adelante con más confianza, en la seguridad de formar parte de una selección intelectual, en tanto que el universitario que no reúne las condiciones para la profesión elegida sabe en corto tiempo que debe tomar otro camino. Mientras tanto, la inmi-

nencia de un examen eliminatorio influye desde los primeros días de cada universitario e impide que pierda en devaneos un tiempo que debe dedicar forzosamente al desafío que tiene delante.

Las inquietudes estudiantiles, que se han hecho patentes en los últimos meses, colocan al país en la necesidad de contar con un proyecto universitario congruente con las demás tareas modernizadoras y liberadoras que se encuentran en marcha. Asegurar la libertad por el orden; desarrollar la ciencia mediante el estudio metódico y la exploración de lo desconocido; mantener en la Universidad necesariamente a la mayoría selecta por su lucidez y disciplina, constituyen objetivos deseables. Un proyecto universitario global seguramente habrá de incluir, entre otros, los mencionados principios.

Nacionalismo y burocracia

(21 de diciembre de 1980)

Luego de pasar revista a los distintos tipos de nacionalismos que se han dado en los últimos decenios en el mundo, se trata de separar el concepto de nacionalismo en lo político y estatismo en lo económico, señalando la importancia de un estudio técnico acerca de los tipos de empresas consideradas estratégicas, que debieran estar siempre en manos del Estado.

La Semana Política

NACIONALISMO Y DESARROLLO

El concepto de nacionalismo es bastante amplio de acuerdo con sus aplicaciones históricas. Pudo hablarse de nacionalismo en los primeros tiempos de la Europa liberal, en el período en que se formaron los Estados de corte moderno y se unificaron Italia y Alemania. Es legítimo también mencionar como nacionalistas a las experiencias europeas autoritarias socialistas, protagonizadas en especial por Mussolini y Hitler. Cabe también hablar de nacionalismo en el desarrollo peculiar pero acentuado de la cultura japonesa durante los siglos XIX y XX. Pueden calificarse de nacionalistas los movimientos emancipadores anticolonialistas que, con el auspicio de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, impulsaron la formación de naciones independientes en Asia y África, sobre todo después de la segunda guerra mundial, y en fin, habría lugar para otros ejemplos.

Cuando, entre nosotros, se menciona el nacionalismo quiere decirse aproximadamente lo siguiente: afirmación categórica de los valores nacionales, de la tradición, de la cultura y de las costumbres patrias,

a la vez que defensa de la integridad territorial del país; rechazo a ideologías o poderes foráneos; inclinación a una línea política autoritaria; justicia social dentro del orden y otras connotaciones semejantes, todas las cuales vienen a derivar de una especie de exaltación, en grados a veces extremos o heroicos, del sentimiento de patriotismo que tanto arraigo tiene en todos los chilenos.

Quien se estima nacionalista entiende que subordina sus intereses propios y los demás intereses parciales a la gran causa de la patria.

En el amplio marco del nacionalismo caben personalidades diversas, orientaciones ideológicas dispares, partidos políticos opuestos entre sí y, en fin, una rica gama de interpretaciones sobre el acontecer nacional y sobre la tabla de deberes ciudadanos frente a aquél.

Cualesquiera que sean dichas interpretaciones, se diría que el nacionalismo postula esencialmente la necesidad del desarrollo nacional. No tan sólo el de la economía, sino también el ético, físico, intelectual, espiritual y otros. El desarrollo de la comunidad nacional, o mejor dicho de las personas que la integran, significa más que una cifra de cre-

cimiento del producto geográfico. Hay también que crecer superando la ignorancia, la criminalidad, la infecundidad espiritual. El desarrollo supone creación de hábitos y conductas apuntadas a lo que, en términos muy generales, llamaríamos cultura, es decir, cultivo de la naturaleza y del espíritu patrios.

Suele a veces creerse que el nacionalismo ha de ser forzosamente estatista. Ello tiene cierta base, por cuanto los nacionalismos totalitarios del decenio de 1930 fueron marcadamente estatistas, al punto de que Mussolini exigía que estuviera todo dentro del Estado, nada contra el Estado y nada fuera del Estado. Por otra parte, los nacionalismos anticolonialistas de la segunda postguerra mundial tuvieron en general un sesgo socialista, que en muchos casos tomó formas marxistas leninistas. Estos precedentes darían pie para que se tratara de identificar al nacionalismo con el estatismo.

Sin embargo, si resultara verdadera la premisa de que el nacionalista aspira antes que nada al desarrollo pleno de la comunidad nacional, habría que preguntarse si el estatismo estimula o no dicho desarrollo antes de aceptar aquella identificación. Tal vez resulta posible en 1980 y 1981 un nacionalismo no estatista, lo que habría sido difícil de entender en 1936 o en 1945.

NACIONALISMO Y BUROCRACIA

La experiencia de este siglo es la del fracaso de los socialismos. Puede todavía registrarse el éxito del expansionismo militar soviético; aún surgen revoluciones marxistas en países atrasados; es dable que el comunismo se soporte con

líderes carismáticos apoyados en una vigilante policía secreta. Pero el socialismo, como tal, el socialismo democrático y el que no lo es, han probado ser malas herramientas para promover el bienestar de los pueblos y el efectivo desarrollo de los mismos.

El nacionalista de hoy no podría aceptar ya la tesis anacrónica del nacionalsocialismo o del socialismo nacional, pues ello envolvería la opción por un desarrollo burocrático y por un crecimiento anémico de la nacionalidad.

Los valores nacionales auténticos se sirven en una nación robusta, segura de sí misma, capaz de cumplir sus objetivos, apta para alimentar a sus hambrientos, dispuesta a elevar sus niveles de educación y de salud, justiciera para con todos sus habitantes, vigorosa para la paz tanto como para la guerra.

La velocidad y extensión del desarrollo nacional no dependen de las ideas de los planificadores, como creyeron los socialismos, sino de la capacidad e iniciativa de los habitantes de la nación. Si ésta logra establecer reglas de conducta adecuadas para el florecimiento de las aptitudes creadoras de los individuos, vendrá el desarrollo, como ha ocurrido invariablemente en todas las latitudes, inclusive en las nuevas. Y con el desarrollo se afianza la soberanía.

Es, sin duda, débil el nacionalismo que busca un Estado burocrático gigantesco que extrae sus recursos de una ciudadanía empobrecida y sometida a intervenciones y controles. Ese Estado voraz, derrochador y casi siempre menos eficiente que los particulares en el manejo de las empresas, no viene a situarse a

la larga en la línea del servicio a la nación y a los valores patrios, sino en el frente de los apetitos y ambiciones de los círculos que gobiernan el Estado.

El nacionalismo burocrático pudo engañarse a sí mismo y a los pueblos a través de místicas de masas, desfiles de banderas. Pero todo ello no logró ocultar las dificultades sufridas por la población ni el relativamente bajo ritmo de desarrollo, pese a tratarse de pueblos muy dotados para la economía y la creación en todos los géneros, como han sido los casos de alemanes e italianos.

La solución nacionalista chilena no puede ya ser la burocrática y socialista. Ello sería contradecir la experiencia histórica y hasta arrepentirse tardíamente del éxito que estamos obteniendo por el otro camino, por el de la libertad económica.

Parece erróneo que, a estas alturas de la modernización del país, se planteen como adversarios el sector público y el sector privado, al igual que si se tratara de bandos políticos irreconciliables o de fuerzas extranjeras la una para la otra. El Estado tiene un papel esencial que desempeñar; sin la seguridad nacional, sin el orden, sin la ley, sin la justicia que brinda aquél, de nada valdrían los resultados de la actividad de los ciudadanos. Por otra parte, sin un gran número de chilenos que trabajen en forma independiente, que establezcan empresas y que arriesguen trabajo y capitales en los resultados de éstas, el país seguiría vegetando en la burocracia, en el desempleo abierto o disfrazado, en la pobreza y en la debilidad social, física y cultural de sus habitantes.

EL ESTADO EMPRESARIO

Hay nacionalistas que creen que el Estado debe poseer ciertas empresas estratégicas. Es, sin duda, una posición respetable y es la que vienen sosteniendo muchos desde hace sesenta o más años con resultados no siempre halagadores en los respectivos países.

Se dan también otros nacionalistas que estiman que las empresas estratégicas pueden estar mejor manejadas en el dominio de los particulares y, por tanto, servir con más eficacia en una emergencia que si se administran por los partidos de gobierno.

En todo caso, la línea divisoria entre empresas del Estado y empresas particulares no se encuentra fijada de una vez para siempre. En el régimen constitucional que empezará a regir el 11 de marzo del año próximo, el país estará sometido a normas legales dictadas por los poderes correspondientes. Serán, pues, las leyes las que diriman la cuestión, pero en todo caso el carácter estratégico o no estratégico de las empresas no debiera relacionarse con el dominio público o privado de las mismas.

Ciertamente el patrimonio del Estado no puede regalarse, y ninguno de los que toma en serio los intereses del país podría pensar siquiera en que el traspaso de bienes públicos a particulares se realizara en condiciones perjudiciales para el Fisco.

Tal vez sería oportuno que, en vez de que los estatistas y privatistas se acusen mutuamente de ineficiencia, se iniciara un debate a fondo sobre la realidad actual de las empresas del Estado, acerca de sus in-

dudables progresos y en lo tocante a las ventajas que obtienen con el mejoramiento general del país, sin olvidar también el deterioro de los precios y mercados internacionales. Un estudio de esta naturaleza mostraría tal vez que el Gobierno militar ha manejado con la mayor eficacia que le ha sido posible las empresas del sector público. Probaría también que a cargo de tales empresas y en otros niveles jerárquicos se encuentran profesionales de gran calidad moral y técnica. Pero cabría preguntarse, con objetividad y sin apasionamiento alguno, si le resultará más caro o más barato al Gobierno asumir la responsabilidad de manejar y capitalizar grandes

empresas en vez de gravar con impuestos a sus eventuales propietarios particulares, sin perjuicio de asegurar, para el caso de emergencia, los fines estratégicos previstos por los expertos en seguridad nacional.

El tema es estrictamente técnico y debiera formularse, en términos económicos y geopolíticos. Sólo se enturbia el debate al esgrimir concepciones nacionalistas antiguas o al suponer que sólo el Estado defiende el interés nacional en contra de un puñado de saqueadores. Mezclar ideologías en el asunto es distraerse en la lucha por el desarrollo nacional, estimulando disputas de poder no siempre positivas.

Regla de la unanimidad

(8 de marzo de 1981)

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de 1980, el 11 de marzo de 1981 comienza el primer período presidencial bajo su vigencia. El artículo analiza la misión que en este período debe realizar la Junta de Gobierno, deteniéndose especialmente en los alcances de la regla que establece que la Junta debe tomar sus decisiones por unanimidad.

La Semana Política

NUEVO PERIODO CONSTITUCIONAL

El 11 de marzo tiene comienzo el primer período presidencial bajo la vigencia de la Carta de 1980. Jurídicamente, el país había vivido hasta ahora bajo el imperio de la Constitución de 1925 en todo lo no modificado por las resoluciones del Poder Constituyente, radicado, a partir del 11 de septiembre de 1973, en la Junta de Gobierno. La Constitución votada en el plebiscito de 1980 establece que, durante el período de ocho años contados desde el miércoles próximo, "continuará como Presidente de la República el actual Presidente, general de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte". Dicha expresión no es óbice para que se hable de un nuevo período presidencial, regido por la Carta de 1980, pero confirma una vez más la validez plena de las actuaciones y decisiones constituyentes, legislativas y ejecutivas de la Junta de Gobierno y de S.E. el Presidente de la República, desde el primer día del régimen militar.

Al iniciarse el período mencionado, la atención se fija muy especialmente en el Presidente de la República. El general de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte es el Pri-

mer Mandatario con poderes y facultades más amplias que haya tenido la República. Dispone de atribuciones personales y discrecionales para asegurar el orden público; le corresponden las prerrogativas y poderes tradicionales de su alto cargo; cuenta con un plazo adecuado para el cumplimiento de sus propósitos públicos, sin estar sujeto a la renovación de su mandato en corto tiempo ni a las incertidumbres de una magistratura sin término constitucional conocido; suma en su persona las funciones de Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y de Comandante en Jefe del Ejército; tiene el firme respaldo de las Fuerzas Armadas y de Orden, en tanto que el plebiscito realizado hace seis meses y las encuestas de opinión que se verifican frecuentemente indican que su Gobierno es apoyado por la gran masa ciudadana.

El Presidente de la República, los señores miembros de la Junta y las Fuerzas Armadas y de Orden, así como todos cuantos colaboran o han colaborado en cargos o tareas públicas durante los últimos siete años y medio, pueden estar satisfechos de su labor. El cambio económico y social del país es visible. El mejoramiento del aspecto físico de

las ciudades, la prosperidad de los campos, el incremento del bienestar de los ciudadanos y la creciente confianza de los chilenos en su país son algunas de las manifestaciones de la gigantesca obra de reconstrucción y modernización emprendida con firmeza y tenacidad por el Gobierno del general Pinochet, el cual avanza resueltamente en una misma dirección. Los hechos prueban hasta la saciedad que la orientación presidencial es la correcta.

LOS TRABAJOS FUTUROS

La minuta de los trabajos por realizar parece clara en la mente de S.E. Junto con dar término a la modernización del sistema universitario y de asegurar la libertad de trabajo de los profesionales y técnicos, el Gobierno avanza en los estudios para la modernización de la justicia, de la salud, del régimen de vivienda y otros. El propio desarrollo va abriendo nuevos frentes de lucha y aconsejando que el Gobierno dé pautas para introducir sistemas competitivos en la inversión en infraestructura pública (caminos, puentes, puertos, etc.) o para el manejo de empresas y servicios públicos. Las operaciones portuarias, las de correos y muchas otras están esperando el mismo esfuerzo de remozamiento y libertad que tan buen fruto logró en otros sectores.

Esencial resultará para los trabajos futuros la expedición y visión con que actúen los señores miembros de la Junta en el ejercicio de su responsabilidad legislativa.

Por razones históricas, la Junta Legislativa sigue llamándose Junta de Gobierno en la nueva Constitución, pero bien se sabe, por el pro-

pio texto de la Carta, que la Junta tiene la misión específica de ejercer mediante leyes las potestades constituyente y legislativa.

Como la naturaleza de la institución es más determinante que el nombre de la misma, la costumbre de ver en la Junta al poder legislador y comprobar que su trabajo consiste en dictar leyes y no decretos, llevará a los medios de comunicación y al público en general a designar a la Junta con la denominación apropiada.

Como ya se ha dicho en estas columnas, el sistema legislativo resulta vital para la obra del Gobierno en los próximos ocho años. Aunque realmente se ha hecho mucho en el campo de la reconstrucción y del desarrollo, quedan todavía determinaciones que, suspendidas indefinidamente o tomadas fuera de los marcos de la política enunciada por S.E., podrían tener consecuencias negativas para el buen éxito del régimen.

LA REGLA DE LA UNANIMIDAD

El país tiene confianza en el patriotismo de las Fuerzas Armadas y de Orden, además de haber recibido numerosas pruebas de la prudencia y equidad con que los señores Comandantes en Jefe y General Director de Carabineros han ejercido el poder constituyente y legislativo.

Esa misma confianza es la que, sin duda, justifica la norma constitucional que obliga a la Junta a actuar por la unanimidad de sus miembros en la aprobación y despacho de las leyes. Ello significa que cualquiera de los miembros de la Junta dispone de un derecho a veto absoluto e inamovible. En

consecuencia, el voto en contra que emane de uno solo de los jefes máximos de las instituciones representadas en la Junta puede detener el despacho de las leyes básicas, de los códigos u otras materias que son necesariamente objeto de ley.

La regla de la unanimidad tiene, además, otro fundamento. En efecto, habría resultado particularmente perturbador que alguna ley fuese aprobada con la abstención o la negativa de alguna rama de la Defensa Nacional. Esto privaría a la norma de su autoridad moral y abriría el campo a posibles divergencias entre los mandos de las instituciones que forman el respaldo y el cimiento del régimen.

El sistema legislativo de la Junta bajo la regla de la unanimidad parece haber sido el único camino, ya que el país no podía volver bruscamente a cámaras elegidas y a partidos, a la vez que no resultaba mejor el mecanismo de legisladores designados por el Gobierno.

En todo caso, es digno de mencionarse el hecho de que el Presidente más poderoso de nuestra historia carece de medios legales para imponer su voluntad al Poder Legislativo. En esta materia ha primado una vez más el criterio militar, en el sentido de que la cúspide del régimen se apoya en la confianza y en el espíritu de camaradería y caballería que reinan entre los hombres de armas. Resulta casi imposible que algún miembro de la Junta haga uso de su derecho de veto para la protección de intereses que no sean los de todo el país o con propósitos de luchar por el poder. Largos años de abnegado pa-

triotismo en la Junta y muchos más de servicio en las respectivas instituciones constituyen antecedentes más sólidos que la letra de una norma jurídica. Ha de suponerse que el veto injustificado, insuficientemente meditado o meramente discrecional no existirá en la Junta, por las razones que hemos señalado.

En el momento de iniciarse el nuevo período constitucional podría ser ventajoso, no obstante, que la Junta dictara su propio reglamento interno con la mira de prever situaciones difíciles que pudieran presentarse a lo largo de los próximos ocho años. La Constitución dispone que se dicte una ley complementaria que establezca los órganos de trabajo y los procedimientos para el ejercicio de las potestades constituyente y legislativa. En esa u otra oportunidad próxima se espera que la Junta legisle acerca de la generación de sus decisiones. La regla de la unanimidad supone, en este caso, el debate amplio de los asuntos en que surjan diferencias y exige, además, que la opinión disidente de un solo miembro de la Junta sea fundada en razones que de algún modo lleguen a la luz pública.

Con la Constitución de 1980 el Gobierno ha hecho un esfuerzo sincero por someterse a una regla objetiva, obligatoria para todos y sólo modificable por los instrumentos que la misma Carta proporciona. El pueblo ha ratificado esa ley fundamental. Corresponde que todas las autoridades se encuadren en esta línea de racionalidad en las decisiones, logrando así mayores y más rápidos avances en el camino que ya recorre el país.

Colegios profesionales

(29 de marzo de 1981)

Diversos colegios profesionales han llamado a sus asociados a pronunciarse sobre la legislación complementaria a la Constitución de 1980, que suprimió la colegiación obligatoria de los profesionales. El Decreto Ley 3.621 transformó a los Colegios Profesionales en Asociaciones Gremiales, mientras que el Decreto Ley 3.637 suprimió las atribuciones legales del Colegio de Abogados (EM, 10 marzo, pág. C3) (EM, 11 marzo, pág. C3).

La Semana Política

COLEGIOS PROFESIONALES

Las directivas de los colegios profesionales continúan llamando a los miembros de éstos para que se pronuncien en contra de la legislación vigente sobre la materia y manifiesten su solidaridad gremial.

El propósito de estas votaciones internas ha de interpretarse como el deseo de las directivas de que el Gobierno compruebe que no están aisladas en su posición crítica. El alcance de dichas votaciones no debería llegar más allá. El apoyo o rechazo de los profesionales a la ley que modifica su organización colegial no podría alterar la realidad jurídica ya establecida. La Constitución de 1980 garantiza la más amplia libertad de trabajo y, especificando dicha garantía, prohíbe que se exija la afiliación a "organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad". A su vez, el decreto ley contra el que protestan las directivas profesionales viene a reglamentar aquel principio constitucional o, mejor dicho, a anticipar y hacer realidad la vigencia del mismo.

Las votaciones de los colegios profesionales han de mirarse como una respetable manifestación de las opiniones de los interesados, pero no cabe que ellas induzcan al legislador a contrariar la Carta Fundamental o a que el Gobierno renuncie a los principios esenciales que sostiene.

Por lo demás, la nueva legislación no se ha dictado para beneficiar a los profesionales sino al público que demanda los servicios de éstos. El Gobierno ha creído que una mayor libertad de trabajo para los profesionales favorece a enfermos, contratantes, litigantes, público lector o auditor y demás destinatarios de la actividad profesional.

El carácter limitado de estas decisiones internas de los colegios, por su naturaleza, alcance y circunstancias, ha provocado una importante abstención por parte de los profesionales, que no atribuyen al cambio de sistema la gravedad que le otorgan las directivas.

En todo caso, la solidaridad interna de los colegios es algo positivo, y todo hace desear que se mantenga. En adelante, la votación a favor de la organización profesional colegiada se hará de hecho periódico-

camente mediante el pago de las cuotas voluntarias de los miembros de aquélla. Como ha ocurrido en el campo sindical, la voluntariedad no debe disminuir la fuerza de aquellas organizaciones probadamente útiles y con prestigio frente a sus afiliados.

LA ÉTICA PROFESIONAL

Las directivas de los colegios han centrado sus críticas a la nueva legislación en el tema de la ética y de la dignidad profesionales. De estas altas metas de los colegios y de las profesiones derivan las bases del resto de los argumentos contra el sistema: las profesiones no son oficios cualesquiera; sus organizaciones miran el bien común y no persiguen fines de lucro; los servicios profesionales no pueden ser transados en el mercado; la libertad atomizará las organizaciones, haciendo imposible fiscalizar la ética de los profesionales. Todo esto conduce, en definitiva, a dejar la impresión de que, en nombre del "economicismo", se está provocando un atentado contra la moral y la dignidad profesionales.

En el debate no se ha hecho suficiente hincapié en que el punto verdaderamente central del sistema ahora vigente es que se ha suprimido la colegiación obligatoria, en concordancia con lo que prescribe al respecto la Constitución.

Como consecuencia de ello, no se ha insistido en que el objeto de la transformación de los colegios profesionales en entes privados y sin afiliación legalmente obligatoria es servir al público, dejando en libertad a los usuarios para que requieran el auxilio profesional o especia-

lizado de la manera y en las condiciones que ellos escojan. Se suprimen así los aranceles y la necesidad de recurrir siempre a profesionales colegiados.

Tampoco se ha subrayado que la celosa vigilancia de la ética profesional por parte de los colegios ha revestido un carácter más bien interno y persuasivo, evitando que el público conozca las sanciones que se aplican a los profesionales infractores de la moral.

Se echa de menos en el debate promovido por las directivas de los colegios un esclarecimiento acerca de la ética profesional. Si por ésta se entiende un conjunto de normas obligatorias de conducta, que suponen a su vez la adhesión también obligatoria de los sujetos a la disciplina que los regula, estamos en presencia de verdaderas normas jurídicas antes que meramente morales.

Expresado de otro modo, la ética profesional consiste o en cuestiones morales puras, en asuntos de conciencia, en que poco o nada pueden los poderes terrenos y en que vale más la adhesión libre a la norma que la compulsión, o en cuestiones que envuelven la lesión de un derecho, es decir, que pertenecen al campo jurídico. Estas últimas, o son delitos del profesional, tales como la estafa, el fraude, la falsificación, el hurto, la lesión corporal, u otros, o comportan sólo la reparación de un daño moral o material. En el primer caso se trata de materias penales y en el segundo de materias civiles. En ambos, una acción judicial expedita debiera ser más eficaz que los métodos de la reconvención colegial y reservada invocando la ética.

Se asocian también a la moral profesional puntos tales como la regulación de la publicidad de los servicios y de la forma en que deben tratarse leal y respetuosamente los miembros de una profesión. Estas materias son más bien de índole gremial. Si la publicidad de los servicios incurre en abuso o delito contemplados en la ley del ramo, allí está la herramienta para garantizar el mínimo ético. En cuanto a la ética en el trato de colega a colega, ella tiene un principio rector que será siempre el del óptimo servicio al cliente y el respeto celoso a la libertad de éste.

PROFESIÓN Y LIBERTAD

La afiliación obligatoria a un ente público como requisito para ejercer las profesiones no contribuye a prestigiar estas últimas, es contraria a la libertad de trabajo y no respeta el derecho del usuario a elegir la calidad, oportunidad y costo de las prestaciones profesionales que desea.

Toda libertad trae sus peligros, pero es preferible que los que quieren ser atendidos por los profesionales incurran en errores y perjuicios a causa de la acción de algunos inescrupulosos, antes que perpetuar la tutela de los supuestamente incapaces de elegir y, a pretexto de ella, cercenar las opciones de los individuos frente a los diversos tipos y calidades de servicios especializados que pueden ofrecerse en una sociedad en pleno desarrollo. Nadie duda de la importancia de una labor profesional consciente, responsable y recta, pero si los colegios —constituidos en asociaciones voluntarias— dan una marca de prestigio a

sus miembros al reclutar sólo a los competentes e irreprochables de cada profesión y al sancionar públicamente a los que contravienen los estatutos de la asociación, usando para ello la jurisdicción disciplinaria propia de todas las corporaciones, se cumplirán mejor los fines éticos que las actuales directivas profesionales persiguen.

El nuevo sistema pretende proteger efectivamente al público, entregando a cada usuario la libre elección de la importancia, frecuencia, naturaleza y calidad de los servicios que requiere. Parece ocioso discutir si los honorarios profesionales deben transarse o no como precios del mercado. En todo caso, lo justo es que el monto se fije de común acuerdo entre profesional y cliente. Ya sabrá el beneficiado si le conviene solicitar o no los servicios profesionales y cuál es el costo que está dispuesto a aceptar por ellos. Todo esto no es "economismo" sino respeto mínimo a la libertad de los individuos.

No hay, en resumen, más alta dignidad profesional y mejor nivel ético y científico para las profesiones que los que confieren la entera y abnegada entrega de los profesionales al bien de quienes buscan sus servicios. Y esta consagración del talento, del trabajo y del corazón en la tarea profesional no la dan los colegios sino que corresponde al cumplimiento fiel de una vocación personal.

Profesiones liberales se han llamado tradicionalmente las que requieren un título superior y suponen largos estudios. La liberalidad es característica de las profesiones propiamente tales. La liberalidad y el honor forman la esencia de

quien ejerce una profesión, es decir, una dedicación o consagración a cierta obra de bien. Del honor viene el nombre de honorarios que reciben las compensaciones económicas de los servicios profesionales.

La legislación dictada sobre los

colegios puede tal vez necesitar afinamiento o precisiones, pero en ningún caso atenta contra el honor, la dignidad o la ética profesionales. Por el contrario, al restituirles su rango liberal destaca la esencia de las profesiones y las sitúa en el noble papel que les corresponde.

El factor moral

(17 de mayo de 1981)

El artículo se refiere a la relación entre desarrollo económico, libertades individuales y ética.

En su segunda parte reseña la labor que desarrollan centros de estudios que reflexionan sobre temas políticos y económicos.

La Semana Política**EL FACTOR MORAL**

Sólo mentes muy primitivas serían capaces de afirmar que la solución de los problemas económicos es el remedio para todos los males nacionales; que la libertad económica trae la libertad política, y que el desarrollo económico importa la derrota definitiva del comunismo y del extremismo en Chile.

La más elemental experiencia del pasado y de hoy muestra que la prosperidad económica no evita las revoluciones y los enfrentamientos sociales, así como tampoco asegura un régimen de verdadera libertad. Las masas famélicas pueden ser más proclives a las dictaduras extremistas, pero los electorados bien abastecidos de la era contemporánea no dejan de inclinarse al paternalismo socialista, aunque éste se constituya en la antesala de un régimen totalitario. Esto último puede ocurrir con la votación favorable en Francia al candidato François Mitterrand.

El desarrollo económico y el florecimiento de las libertades individuales permiten probablemente que las oscilaciones políticas observen mayor moderación y que las pugnas sociales se sitúen en un plano más racional que el que impone la irrupción de las necesidades ele-

mentales insatisfechas. Fuera de eso, no habría que creer que el mejoramiento material sea una prenda o un seguro contra posiciones extremistas. Es justo perseguir el desarrollo económico y la afirmación de la libertad individual por el valor intrínseco de ellos, por sus efectos saludables en la suerte de las personas. Sería erróneo, en cambio, mirarlos como un cerrojo que resguarde contra revoluciones y contra-tiempos políticos.

Los mecanismos constitucionales, por esmeradamente estudiados que se encuentren, suelen ceder a los embates del tiempo o deparar sorpresas en medio de las circunstancias cambiantes de la historia. Una Constitución inspirada en el propósito de estabilidad política puede hacer mucho por conseguir esta meta, ya sea a través de la segunda vuelta electoral, de normas restrictivas de la acción de los parlamentos, de limitaciones al desborde financiero o de la presencia militar constante como respaldo de un régimen. Sin embargo, la corriente de los hechos y el cambio de las mentalidades llevan a veces a trastocar los papeles de los protagonistas políticos en términos tales que el elemento supuestamente moderador se convierte en revolu-

cionario y que las medidas de equilibrio son usadas por los partidarios del desorden.

El elemento estabilizador más visiblemente eficaz se encuentra en la acción y la influencia de una personalidad vigorosa capaz de imponerse a los desquiciamientos, establecer y resguardar el orden, e impulsar el progreso equilibrado. Sin embargo, la eficacia de esas grandes personalidades difícilmente se prolonga más allá de la existencia de aquéllas. Se trata, pues, de una estabilidad firme pero ligada a la fragilidad de la vida humana y expuesta a ser destruida en cualquier momento. Franco, De Gaulle y otros son casos dignos de meditación.

Quienes en Chile han buscado formulas económicas, políticas y constitucionales destinadas a proyectar el actual régimen por el mayor tiempo posible creen estar muy lejos de trabajar para el presente y piensan que es vital conservar los grandes valores salvados en el régimen militar, para lo cual se requiere de una construcción política superior y trascendente a las personas.

Pero lo más importante no está en las fórmulas económicas o en los mecanismos constitucionales. La esencia de la estabilidad política es de carácter moral. Por hábiles que parezcan las fórmulas, ellas no jugarán verdaderamente si la mentalidad egoísta, si la ausencia de sentido nacional, si el abuso de la libertad, si la pereza y los demás vicios logran frustrar lo que debiera ser una convivencia chilena sana, libre y genuina.

Ningún teoricismo y ningún mecanicismo lograrán reemplazar la vigilancia espiritual, el esfuerzo

creador y la calidad ética de los ciudadanos. Nuestro país dispone de reservas morales y responde positivamente a los golpes de la adversidad. Resulta indispensable que este capital espiritual se conserve adecuadamente y rinda sus frutos.

TIEMPO APROVECHABLE

El régimen de libertad exige una ética individual más clara y sólida que la que demanden los regímenes despóticos. Hasta en el campo económico se precisa una moralidad más rigurosa y una responsabilidad más estricta por parte de los que actúan en los negocios cuando se trata de una economía de mercado, pues las regulaciones, fiscalismos y proteccionismos frenan las iniciativas e impiden, a la vez, los aciertos y las equivocaciones, lo que no ocurre en el régimen de libertad.

En el área política es lo mismo. En la medida en que los individuos han de decidir por sí solos su conducta social, mucho más relieve cobran su formación ética y su sentido del deber.

Este y los próximos años son la ocasión de configurar una verdadera ética de la libertad, que proporcione a los ciudadanos las herramientas para luchar por sí mismos en la afirmación de su carácter, de su valor personal, de su lealtad a la patria, de su solidaridad con sus compatriotas y de su espíritu de servicio a la causa nacional.

Nuestro país se salvará con el sacrificio de todos sus hijos y requiere de la colaboración de todos ellos. El impulso modernizador que está transformando nuestra sociedad no es un llamado al egoísmo, sino a la conciencia personal. Lo

deseable sería que los chilenos estuvieran cada vez más emancipados de consignas y más sujetos a la moral de la libertad, en términos de que los deberes se cumplieran por convencimiento antes que como resultado de una coacción.

Para formar el ambiente moral que el país necesita, la acción de las universidades y del sistema educativo en general resulta determinante.

No queda ya mucho tiempo para que las universidades asuman el papel de verdaderas formadoras de los dirigentes del futuro en esta etapa de la evolución del país. Estos no podrán renunciar a la honrosa tradición intelectual chilena, pero necesitarán una preparación adecuada para influir positivamente en una sociedad libre y evolucionada.

Gran parte de nuestras limitaciones políticas y económicas provienen de la dificultad casi crónica de algunos intelectuales para hacer de su trabajo un magisterio de bien público y de aprovechamiento de las virtualidades nacionales. El ejemplo ilustre de don Andrés Bello, que no dejó actividad valiosa en Chile sin guiar y estimular, debiera señalarse en este año del bicentenario de su nacimiento como el caso de una gran inteligencia dedicada a servir al país con notable abnegación. Es posible que el problema que anotamos surja en parte de la incapacidad de nuestras instituciones y autoridades para dar acogida a la inteligencia creadora, y no sólo del aislamiento de los intelectuales. El hecho es que la Universidad y la cultura necesitan líderes y guías de gran peso, a fin de orientar el país hacia las que debían ser sus preocupaciones centrales.

Se diría que la ausencia de luchas políticas abiertas tiende a atenuar en mucho la preocupación por los asuntos públicos y a convertir en formalismos no pocas de las grandes preguntas acerca del presente y del porvenir de Chile. La polémica ha bajado en general de nivel y son escasos los análisis morales o políticos cuya coherencia les permita influir en la mentalidad nacional.

Está haciendo falta un gran debate sobre el marxismo y sus principios, así como en torno a las aplicaciones prácticas de esta ideología en el mundo de hoy. Los marxistas teóricos han tenido que replantear muchos de sus puntos de vista frente a una problemática del todo diferente a la suscitada en las cabezas de Marx, Engels o Lenin. Los no marxistas deberían seguirlos en sus nuevos mimetismos.

Cabe registrar como aportes valiosos a la ilustración de importantes asuntos públicos las participaciones de varios distinguidos profesores a torneos como el seminario sobre la Constitución de 1980, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Asimismo, debe reconocerse como muestra de espíritu público la labor de la Corporación de Estudios Nacionales, que ahora preside la señora Lucía Pinochet Hiriart, y que cuenta con una nutrida obra de estudios y publicaciones político-sociales. Sin pretender una enumeración exhaustiva de los esfuerzos que se realizan para el estudio de estos problemas, parece procedente señalar al Centro de Estudios Públicos, que preside el ex Ministro y embajador, señor Jorge Cauas, y cuyos foros e investigaciones están lla-

mados a contribuir también al enriquecimiento de las ideas chilenas sobre la sociedad, la ley, el Estado y la persona.

En esta clase de estudios no suele reinar la unanimidad de pareceres y las ideas no se imponen ni con votaciones ni por medio de la fuerza. Es natural y sano que surjan diferencias de apreciación, ya dentro de los seminarios o centros de estudios, ya sea entre los diversos grupos de estudiosos entre sí. Lo que interesa es que haya debate elevado, recto y profundo sobre los grandes asuntos públicos. Ello debe ser así por la naturaleza misma de tales problemas

y porque, además, las modernizaciones no son tan sólo cambios materiales o sociales; hay una transformación de la mentalidad que merece conocerse en todos sus aspectos; está naciendo una actitud moderna que debe ser ilustrada, consciente y éticamente bien inspirada. De ahí la necesidad de centros de reflexión que, desde dentro o fuera de la Universidad, ayuden a la tarea de esclarecer las ideas, de abrir las mentalidades y de formar a los futuros dirigentes. El temor siempre saludable de una vuelta atrás debería impulsar a muchos a mantenerse vigilantes.

Necesidad de la información

(7 de junio de 1981)

El comentario se refiere a la transparencia legislativa, es decir, a la información acerca de los procesos por los que pasa un proyecto de ley, y sobre las personas que intervienen en estos procesos.

También se pone en el mismo plano la necesidad de información respecto de las actuaciones de empresas privadas que comprometan el interés directo del público. Cita como ejemplo el caso de la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV), cuya insolvencia sorprendió al público y a los pequeños accionistas (EM, 24 mayo, pág. D20).

La Semana Política

NECESIDAD DE LA INFORMACIÓN

La concepción imperante en Chile tiende a sustituir por mecanismos impersonales, automáticos y generales la creciente intervención funcionaria discrecional y casuística propia de los regímenes que se socializan.

El posible error de la decisión discrecional, los obstáculos al desarrollo de la libertad que envuelven los controles y el camino hacia la servidumbre que implica el proceso del intervencionismo estatal, hacen aconsejable el sistema que estamos empezando a usar en Chile.

Pero el sistema libre cuenta con controles automáticos y generales, a condición de que cada sujeto en cualquier actividad disponga de la información más amplia posible acerca de los asuntos que interesan directamente a su persona y a sus bienes.

La ley se supone conocida de todos, y debe necesariamente ser así, pues en caso contrario sería fácil presentar la ignorancia de la ley como excusa de cualquier delito.

Pero, además, desde un punto de vista político, es indispensable que la ley se conozca e, incluso, se divulgue. La promulgación y publicación constituyen el primer paso del conocimiento real de la ley, pero lo justo es que los ciudadanos estén ampliamente informados de las leyes que los rigen. Los debates públicos en los Parlamentos suelen permitir un conocimiento del proceso legislativo que facilita la información del precepto que va a regir.

Lo mismo ocurre en el ámbito privado. Hay negocios que interesan no sólo a quienes los realizan, sino a muchas personas más. Así es el caso de las sociedades anónimas, los fondos mutuos y las administradoras de fondos de previsión, para no citar sino algunos ejemplos. El empleo del dinero del público es una necesidad del desarrollo de la economía de mercado. Y está muy bien que el Gobierno se abstenga de intervenir en el evento de prosperidad o de ruina de algún negocio particular. Algo por completo diferente es el derecho de los accionis-

tas, depositantes o acreedores en general, de conocer oportunamente la forma y condiciones en que se está haciendo uso de su dinero.

Se diría que entre nosotros resulta cada día menos necesaria la intervención del Gobierno, pero, por lo mismo, surge el imperativo ineludible e impostergable de ofrecer al público la más amplia y completa información, sobre todo aquello en que éste tiene interés directo.

El episodio CRAV envuelve un serio perjuicio para muchos particulares, pero trae consigo experiencias saludables: las empresas que otorgan y las que piden préstamos han debido ponerse más prudentes y se ha formado consenso de que la información es un elemento vital en la economía libre.

La regulación automática e impersonal del mercado supone que los poseedores, compradores y vendedores de mercaderías o valores tienen la información adecuada para adoptar sus decisiones.

TRANSPARENCIA LEGISLATIVA

La actividad de los legisladores necesita, con mayor razón aún que la de los empresarios, ser conocida por el público. Una decisión desatinada de la empresa comercial que trabaja con dinero ajeno compromete a sus deudores e indirectamente a muchos individuos. Una decisión mal meditada de los legisladores puede acarrear desastres todavía más extendidos.

No hay que descartar las ventajas del sigilo y la confidencia en algunas materias muy específicas, en que la divulgación podría frustrar el fin que se persigue. Tales ventajas, sin embargo, debieran compararse cuida-

dosamente con los peligros que trae la información divulgada en forma prematura y parcial a ciertos privilegiados que harán uso de ella. Es muy difícil una reserva completa respecto de decisiones legislativas que tardan largo tiempo en madurar y perfeccionarse. En la práctica, no será entonces imposible que ciertos particulares conozcan las noticias legislativas antes que otros, quedando en situación preferente para cubrirse de eventuales riesgos o para tomar resoluciones concordantes con la legislación que se estudia.

No cabe dudar del patriotismo y del trabajo abnegado de los miembros de las comisiones legislativas que asesoran a la Junta de Gobierno en el ejercicio de las potestades de ésta. Esas mismas virtudes parecerían indicar las ventajas de una información completa y oportuna de la labor de las comisiones. Bien se sabe que sus debates sólo van a traducirse en un mero proyecto y que el acto de legislar propiamente tal corresponde a la Junta de Gobierno. Sin embargo, el conocimiento público del desarrollo de los debates y de la responsabilidad que en ellos asumen los distintos miembros de las comisiones legislativas, harían comprender a la ciudadanía los fundamentos reales de la ley, la historia de la misma y, en fin, las razones de justicia que obligarán a obedecerla cuando sea promulgada.

El conocimiento público de los debates preparatorios de la decisión legislativa de la Junta colocaría a todos los interesados o afectados por la futura ley en igualdad de condiciones, evitando que se suponga que determinados particulares participan o influyen directa o indirectamente en las discusiones, a través de sus

propios contactos, mientras el resto de la ciudadanía está a ciegas sobre la legislación en estudio.

El país debería saber oportunamente por qué se detienen algunos proyectos, cuáles son los aspectos u objeciones que fuerzan a su reestudio u otros elementos, para formarse juicio cabal sobre normas que van a influir en sus personas o en su patrimonio.

El problema de la información es más delicado, desde el momento en que actúan como miembros de las comisiones legislativas personas que, rodeadas del respeto general, desempeñan funciones importantes en empresas económicas que de un modo u otro pueden verse influidas por una determinada legislación. La ley obliga de manera muy enérgica a que el miembro de la comisión se abstenga de intervenir en la tramitación de leyes en que tenga interés directo o indirecto, interés que se describe de la manera más amplia. Sin embargo, la aplicación de esta incompatibilidad queda entregada a la sola conciencia del miembro de la comisión legislativa o de la Junta de Gobierno, en su caso. No hay conocimiento público del trabajo legislativo ni hay posibilidad de que se haga valer la implicancia, aunque ciertamente ella se respeta y observa con celo en las comisiones.

Las inhabilidades para ser miembro de las comisiones legislativas son muchas y repiten en lo sustancial las que regían para senadores y diputados en la Constitución de 1925. Pero no parece haber medio de invocar tales inhabilidades, ya que los miembros de las comisiones legislativas son de la exclusiva confianza de los presidentes de las mismas.

Nuestro actual sistema de legislar se basa en la confianza y respetabilidad de las personas, lo que vale para una emergencia pero no permite fundar sólidamente una institución legislativa. Esta necesita resguardos, y el primero de ellos consiste en la más cabal información pública de la labor de los legisladores.

LOS RESORTES ÉTICOS Y LEGALES

El mercado, como elemento asignador de recursos y regulador automático de la economía, nunca funciona en el vacío. Para que haya mercado debe existir un sistema legal que lo haga posible. Deben imperar normas claras sobre derecho de propiedad, sobre el valor sagrado de los contratos, sobre penalidad para el hurto y la estafa y, en especial, debe haber un juez al que puedan acudir las partes en caso de controversia.

Si no hay juez y cada cual se hace justicia por sí mismo, o si no hay definición de los derechos individuales, la economía libre no funciona. La ley de la selva es todo lo contrario del mercado.

De ahí, entonces, que las leyes económicas no basten por sí solas para regular el funcionamiento económico. La sustentación jurídica no podría faltar.

Ahora bien, el orden jurídico requiere de un orden político, es decir, de un Estado y de un Gobierno. Sin un régimen político y jurídico que sostenga la economía libre, ésta no resulta viable.

Como los regímenes políticos se apoyan fundamentalmente en la opinión pública, la conducta de las autoridades requiere de cierta

aceptación por parte de la ciudadanía.

No significa esto que deban dictar políticas demagógicas o populistas, sino que han de transparentar un sentido de justicia y respetabilidad que las haga dignas de crédito.

Por su parte, las empresas y los hombres de negocios no pueden prescindir de la opinión pública y del efecto malo o bueno que sus actividades puedan tener en el prestigio de la autoridad pública y del Gobierno. No es conveniente que nadie gire a cuenta de la solidez, patriotismo y estabilidad de las Fuerzas Armadas, pues dichas virtudes operan actualmente recibiendo el respeto de la ciudadanía. Corresponde a los líderes del desarrollo privado hacer comprender que sus actitudes son beneficiosas para el país, y que el afán legítimo de enriquecimiento tiene por límite la moral.

El Estado no debiera interferir en la libertad económica de los par-

ticulares, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Pero tampoco deberían los particulares interferir negativamente en las actividades o el prestigio del Estado. La autoridad legítima y firme es un requisito para el mantenimiento de la libertad. El crecimiento sano del sector privado exige un orden político y jurídico estable. Dicho orden se funda, en último término, en la moral.

Nada parece más contrario a un sistema libre que la persecución y el amedrentamiento en nombre de la moral. Sin embargo, los resortes éticos de la sociedad no pueden aflojarse sin peligro para el orden civil en todos sus aspectos. Las viejas virtudes de la fortaleza, la justicia, la prudencia y la templanza descubiertas ya por los griegos y recibidas de ellos por nuestra herencia cristiana, forman los cimientos de todo el orden social. Y el desarrollo en una economía de mercado implica la existencia de dicho orden.

Servicios de inteligencia

(21 de junio de 1981)

Se da a conocer que los culpables del asesinato de dos funcionarios bancarios y robo en Calama pertenecían a la Central Nacional de Informaciones (CNI), quienes cometieron los delitos aprovechando esa calidad (EM, 12 junio, pág. C5).

La Semana Política

TRANSPARENCIA POLICIAL

La brillante pesquisa de Investigaciones y de la propia CNI en el crimen de Calama ha estado subrayada por una información plena de los hechos y de la participación que en ellos cupo a funcionarios subalternos de seguridad. Lo que podríamos llamar la transparencia policial ha venido acompañada de la más enérgica y explícita disposición del Gobierno para sancionar ejemplarmente a los que resulten culpables de los actos delictuosos conocidos y de los que aparezcan de la pertinente indagación judicial.

Si es incómoda la sensación de que en algunos planos del poder público o privado se llegaran a minimizar u ocultar hechos graves, resulta particularmente satisfactorio comprobar que los servicios policiales y de seguridad no trepidan en separar de sus filas a quienes aparecen responsables de delitos, y que ellos mismos practican las diligencias necesarias para identificar a los criminales y para ponerlos a disposición de la justicia.

La satisfacción es mayor cuando S.E. el Presidente de la República se expresa en forma categóricamente condenatoria respecto de estos sucesos, ordena el amplio y

pleno esclarecimiento, exige que se haga justicia y anuncia que no empleará el recurso del indulto para favorecer a los culpables. La intervención de la Ministra de Justicia, doña Mónica Madariaga, para repudiar de manera casi fulminante los delitos de abuso de poder, de robo, de homicidio a mansalva y en despoblado y los demás crímenes que se prueben en el juicio correspondiente, da una idea de la posición moral del Gobierno en el caso.

Estas columnas están invitando a que se haga luz sobre muchos asuntos de interés público, no porque necesariamente haya dudas sobre la rectitud con que se procede en muchos de ellos, sino para que se procure establecer la regla de que lo más conveniente es que la ciudadanía esté informada acerca de los pasos que se dan para beneficiarla. La información puede hacer más dificultosas ciertas decisiones, a causa del debate que sobre ellas se promueva, pero es preferible el conocimiento público de los asuntos públicos (valga la redundancia) que el sigilo, que a la postre no es tal, sino conocimiento minoritario de aquellas materias que interesan a grandes mayorías.

En el sórdido caso de Calama, el Gobierno y las autoridades y servi-

cios competentes han tomado el camino correcto. La plena luz que llega hasta el fondo de las conductas puede suscitar críticas y abrir viejas heridas. No faltan los que quisieran someter a revisión todo el pasado de los organismos de seguridad durante este régimen, tentativa sin duda intencionada políticamente. Hasta se han visto peticiones dirigidas a disolver los organismos de seguridad, apoyándose en los crímenes de Calama. La información provoca toda suerte de reacciones y comentarios, pero sirve para que cada cual lance su carta a la mesa. Al final, el juego será favorable a la verdad. Pesando y contrapesando, el ciudadano común se quedará con la verdad y la justicia. Hace bien el Gobierno en no temer a lo que ahora llaman transparencia.

SERVICIOS DE INTELIGENCIA

El crimen de Calama es indudablemente gravísimo por lo que él significa y también por lo que deja entrever. Hubo individuos armados, a cargo de la seguridad de bancos, instituciones y personas, que no vacilaron en aprovechar su posición para robar y matar. Piénsese en la nefasta influencia que tales individuos podrían tener en pueblos pequeños, en ciudades alejadas de la capital, en poblados que resultan difíciles de controlar desde Santiago. Los riesgos del poder arbitrario y sin apelación se agrandan cuando se trata de una acción funcionaria ejercida en las sombras y a un nivel en que no existen los compromisos de las autoridades más altas de la República.

Todas estas dudas y cavilaciones, más algunas otras de género análogo, se alivian cuando el hecho real es que los abusos se identifican, se denuncian y se castigan por las propias autoridades de los servicios afectados con tales delitos.

Con todo, la experiencia dramática de Calama debiera aprovecharse. Los servicios de inteligencia han de quedar definidos en sus objetivos y en los medios que emplean para lograrlos. La gran libertad y reserva con que deben actuar los hombres de los servicios de inteligencia parecería exigir que se quedaran allí, es decir, en el terreno de la información. Se trata, por cierto, de una información de combate o de un combate por medio de la información. Pero todo aconsejaría que las medidas de apremio, que las diligencias encaminadas a la detención de sospechosos y, en general, todos los aspectos ejecutivos de la seguridad quedaran en manos de los servicios entrenados y dotados para tal objetivo. Investigaciones y Carabineros deberían ser requeridos para cumplir las órdenes que necesita la Central Nacional de Informaciones. Esta debe captar los datos, elaborarlos, procesarlos, analizarlos y entregarlos a las autoridades. Para ello es probable que requiera la concurrencia personal de sospechosos e inculcados, pero nada obliga que tal concurrencia se obtenga por mediación del personal de inteligencia. Bien pueden Carabineros o Investigaciones tomar a su cargo las detenciones. Así como el primero está capacitado para actuar preventivamente frente a los peligros para la seguridad de las personas y empresas, la segunda tendrá que actuar una vez cometidos los delitos.

Ambos, sin embargo, tienen los medios de aprehender a las personas y pueden, además, velar por la seguridad de los ciudadanos. La tarea de la inteligencia es principalmente otra. Mira a recoger información y a contrarrestar la información adversaria. Ese trabajo es la base para que operen los servicios policiales y la propia planificación de las Fuerzas Armadas. De ahí la importancia de que su labor no se confunda con la acción coactiva en el terreno. Es políticamente ventajoso para el Estado que la inteligencia capte informaciones y las transmita, absteniéndose de interferir directamente en la libertad de los ciudadanos. Además, se cuida así la justicia y la ponderación en las aprehensiones y demás diligencias.

Carabineros e Investigaciones pueden actuar más apropiadamente en lo que atañe a dicha libertad, pues sus estatutos orgánicos, su tradición y las modalidades propias de su proceder se encuentran ajustados a las leyes. No se da en tales servicios un margen amplio de discrecionalidad. El cumplimiento estricto de las órdenes de un juez o de un funcionario administrativo del área de orden interior no puede dar pie a contusiones como las que sirvieron para la comisión de los graves delitos de Calama.

Junto, pues, con apoyar la publicidad amplia que se ha dado a las investigaciones de estos crímenes y la posición condenatoria del Gobierno a este respecto, forzoso es consignar la necesidad de que se estudie el tema de los servicios de seguridad y de que se busquen maneras de evitar la peligrosa mezcla entre las indagaciones de inteligencia y las tareas de protección de

personas o empresas. Aislada la primera tarea de todo contacto con misiones policiales, disminuiría el riesgo de delitos como el que ha ocupado en estos días a la prensa y probablemente aumentaría la eficacia de la seguridad.

La tranquilidad con que la opinión pública ha acogido estos inquietantes sucesos se debe en gran parte a la confianza que merece el Director de la CNI, general don Humberto Gordón. La prudencia y franqueza con que ha actuado en este difícil problema de su servicio han estado a la altura de su digna trayectoria militar.

Como ya se ha dicho, la comprensión ciudadana que puedan recibir los servicios policiales y de seguridad depende principalmente de la confianza que inspiren los jefes superiores de aquéllos. En este caso, dicho requisito se cumple plenamente y permite confiar en que el esclarecimiento de los delitos será completo, a la vez que autoriza a esperar un planteamiento institucional de la CNI que evite la acción de delincuentes bajo apariencias de funciones de seguridad.

Hay que tomar en cuenta que ninguna institución está libre de que entre sus miembros se infiltre un criminal o que individuos de antecedentes aceptables sufran un proceso de corrupción. El peligro es ciertamente mayor en profesiones dedicadas a indagar en ambientes del delito, a conectarse con sujetos sospechosos y a cumplir misiones de alto riesgo. En todo el mundo las actividades de inteligencia están sometidas a perjudiciales infiltraciones, a traiciones y a corrupciones. Por graves y siniestros que sean los sucesos de Cala-

ma, ellos debieran mirarse como un accidente serio pero no único ni sin precedentes en este delicado terreno.

El reclutamiento de personas síquica, moral y físicamente aptas para las tareas de seguridad no tiene por qué ser algo sencillo. Condiciones tales como el sentido de justicia, la honorabilidad, el autocontrol y el coraje físico forman una armonía que no es común. A menudo alguno o algunos de esos rasgos se contradicen con los otros.

Las exigencias de formación especializada y el nivel de remuneraciones, además de la vigorosa conciencia institucional, debieran atraer hacia la CNI a expertos y profesionales idóneos para suministrar y procesar la información de seguridad. Dicha tarea reviste gran importancia para el Estado y merece

que se la rodee de consideraciones y estímulos, a condición de que no interfiera en labores policiales que ya desempeñan otros cuerpos.

Por lo que se sabe, las Fuerzas Armadas están empleando sólo personal de la reserva o en retiro para cumplir misiones en la CNI. Ello parece una precaución mínima. Las Fuerzas de la Defensa Nacional conservarán prestigio y eficacia en la medida en que se mantengan al margen de tareas civiles o policiales que pudieran mezclar a sus hombres en servicio activo con asuntos diversos a su función específica.

En resumen, el dramático episodio de Calama, planeado desde Arica, es un indicador que hay que tomar en cuenta y frente al cual el Gobierno y la autoridad de la CNI han reaccionado en términos alentadores.

£1 marco del Estado

(5 de julio de 1981)

El comentario se refiere a cuáles son, a juicio del articulista, las tareas fundamentales que debe desempeñar el Estado moderno, refiriéndose especialmente al papel que le cabe en el plano económico.

La Semana Política

EL MARCO DEL ESTADO

La experiencia de las modernizaciones habilita para examinar cada vez más a fondo el verdadero papel del Estado en la sociedad chilena presente y futura.

Podría decirse que la expansión de la esfera estatal ha sido inorgánica y empirista, pero siempre constante durante un largo período histórico. Sólo el actual Gobierno intenta poner un dique a dicha expansión.

El proceso ha estado lejos de ser una vigorización de la nervatura fundamental del Estado. Durante mucho tiempo estuvieron desdeñadas y postergadas nada menos que las vitales funciones de la Defensa Nacional. Debió sobrevenir la crisis de la ex Unidad Popular para que los elementos civiles volvieran los ojos hacia las Fuerzas Armadas y de Orden y descubrieran al fin en ellas su papel de resguardo de la seguridad nacional y de los valores fundamentales de la República. En igual y progresivo abandono fueron quedando el Poder Judicial y algunas otras funciones básicas del Estado.

La hinchazón estatista, con el avance dispar y atolondrado de servicios, programas y funciones, no caminó hacia el Estado fuerte sino

hacia la maraña burocrática y el confusionismo demagógico. El gasto público excesivo, el desequilibrio fiscal y la ineficacia de la acción regular del Estado fueron el corolario de esta obesidad del sector público, más afanoso de tomar para sí tareas comerciales e industriales que de ejercer sus labores específicas.

El actual Gobierno enfrentó esta hipertrofia anormal del Estado, con el objeto de encuadrar las funciones públicas a sus fines básicos y permanentes, y de entregar a los particulares las tareas económicas que éstos pueden desarrollar con más eficacia que el sector público.

El Gobierno ha logrado ordenar las finanzas y despojarse de muchas funciones que desempeñaba sin beneficio alguno para la comunidad. El modelo de economía libre tiene, entre otras ventajas, la de permitir que el Estado se consagre a sus tareas propias, dando a todos los habitantes del país la oportunidad de desarrollar sus iniciativas creadoras con amplia autonomía.

Las modernizaciones van entregando a los individuos un margen mayor de libertad para decidir sobre sus diversos intereses: así ocurre en el campo sindical, profesional, previsional, de salud, de agricultu-

ra, y posiblemente ocurrirá en otras áreas, tales como la administración de justicia y otras.

El país experimenta, por lo demás, como ya se analizó en estas columnas, el desarrollo de un nuevo sector privado, más dinámico y racionalizado que el de las antiguas fortunas privadas.

En este cuadro, en que el Estado se desprende de algunas funciones, en que se pone en duda la eficiencia de muchas empresas públicas o negocios del Estado y en que crece un nuevo sector particular moderno, corresponde preguntarse por el marco de acción del Estado.

Es obvio que a este último pertenecen las tareas esenciales e históricas de velar por la seguridad nacional y administrar justicia; pero, sin perjuicio de valorizar y reforzar con sentido innovador aquellas vitales funciones, cabe considerar en una perspectiva más amplia el papel del Estado; mejor dicho, las funciones ya indicadas admiten una mayor ampliación y especificación.

Podría afirmarse que al Estado contemporáneo le corresponden dos misiones principales. La primera consiste en velar por la seguridad nacional, incluyendo en ella, para los efectos de este análisis, la política exterior. La segunda mira, por una parte, a asegurar la libertad de los ciudadanos para el cumplimiento de sus propósitos y satisfacción de sus necesidades, y, por otra, a exigir la responsabilidad de los individuos por los daños a terceros o al bien común que causen en el ejercicio de su libertad.

El Estado renuncia a su misión insobornable si no atiende debida-

mente a la seguridad nacional, con todos los medios a su alcance, entre los que se encuentran el propio desarrollo económico y el manejo adecuado de las relaciones internacionales.

El Estado resulta despótico y opresivo si no garantiza la libertad plena de los ciudadanos en todo el ámbito en que aquélla puede ejercerse.

El Estado deja de ser tal y se convierte en fomentador de la anarquía si no logra asegurar que los individuos respondan personal y patrimonialmente de los daños que causen por delitos o abusos en el ejercicio de su libertad.

ESTADO JUEZ Y ESTADO EMPRESARIO

Si el marco del Estado, aparte de la esencial función de velar por la seguridad nacional, consiste en asegurar la libertad y responsabilidad de los individuos, puede decirse que esta última función compete al legislador y al juez.

El límite entre la esfera pública y la privada no está fijado en esencia por lo que legalmente es patrimonio del Estado, sino por los bienes que no pueden sino pertenecer a aquél y los que pudieran ser de dominio particular.

La seguridad nacional jamás podrá ser un bien privado. En otras épocas históricas, las tierras, ciudades y naciones eran patrimonio personal del soberano y entonces no hay motivo para extrañarse de que la defensa del rey y de sus bienes estuviera en manos de empresarios privados o mercenarios. En la actualidad, y transcurridos siglos desde que el Estado adoptó su propia rea-

lidad moral y su propia trascendencia, la seguridad nacional es un bien público, intransferible e inalienable. Es connatural al Estado y adquiere las características impersonales de éste.

La facultad de dictar normas generales en cuya virtud los ciudadanos puedan acudir a medios y agentes que aseguren el ejercicio de su libertad, pertenece también por esencia al dominio público. La norma general y de bien común es de la naturaleza del Estado, el cual se vigoriza y se reencuentra a sí mismo en la misma medida en que su acción fundamental en el campo interno se concentra en dictar y mantener un grupo orgánico de normas que afiancen la libertad de los ciudadanos.

El poder de interpretar las leyes y de hacerlas cumplir también pertenece esencialmente a la esfera pública. La administración de justicia, como la legislación y la defensa nacional, son elementos fundamentales e irrenunciables del marco del Estado.

No ocurre con los negocios y empresas del sector público lo que sucede con la misión estatal básica. El llamado sector público no está constituido por aquella gama de servicios y funciones que miran a defender al Estado, a garantizar la libertad de los ciudadanos y a exigir el cumplimiento de las responsabilidades de éstos. Aquel sector se forma con los negocios, propiedades y empresas que son jurídicamente de dominio del Estado, pero que podrían poseerse y administrarse por particulares sin daño alguno para el bien común y, a veces, con provecho general.

EL SECTOR PÚBLICO ECONÓMICO

Aunque sea paradójico, diremos que el llamado sector público, no es propia y esencialmente público, en el estricto sentido en que lo son, por ejemplo, el Servicio Exterior, el de Gobierno Interior, las Fuerzas Armadas, los servicios de Hacienda y, en general, los que integran la Administración Pública. El mismo carácter revisten la Administración de Justicia y el Poder Legislativo. El sector público económico posee otras características.

En este último el carácter público está determinado por la relación de propiedad que existe entre esos bienes, empresas y negocios y el Fisco u otra entidad estatal dotada de patrimonio.

Que el Estado requiera de cuantiosos recursos para el cumplimiento de sus elevados fines es algo que no necesita demostración. Para reunir esos fondos tiene un arbitrio principal: la potestad de imponer tributos.

Nadie que comprenda la necesidad vital de los servicios y funciones del Estado podría honestamente abogar en favor de la merma de los recursos necesarios para el pleno funcionamiento del Estado y sus poderes.

El llamado sector público, en cambio, no se inició primariamente con el propósito de obtener recursos fiscales, sino con la mira de llevar adelante la ejecución de proyectos económicos básicos, para los cuales se necesitaba acumular compulsivamente capital —a través de impuestos— y en los que se suponía que los particulares no contaban ni con capacidad ni interés para emprenderlos. La idea básica del fo-

mentó estatal de la producción, filosofía primordial de la CORFO y de las grandes realizaciones de ésta, adquirió vigencia, en diversos momentos y con diversos grados de seriedad, aun más allá del nombrado organismo. Así proliferaron empresas de diverso tamaño e importancia, bajo la bandera del interés público y del fomento de la producción.

Finalidades socialistas y equivocadamente nacionalistas influyeron, además, en la estatización de empresas y servicios básicos, bajo el supuesto de que la relación patrimonial entre el Estado y tales negocios aseguraba la puesta de estos últimos al servicio del interés nacional.

El proteccionismo aduanero (hoy virtualmente desaparecido) y el monopolio (que parece lejos aún de desaparecer) han sido las defensas de los negocios del sector público.

Cuando tanto alarma el crecimiento de grupos económicos privados, bien valdría echar una ojeada a los muchos más poderosos grupos e intereses económicos que navegan bajo bandera pública, pero que actúan comercialmente como los particulares, aunque no siempre cuentan con la óptima productividad de sus enormes recursos, ni prestan el mejor servicio a los consumidores.

La fijación del marco irrenunciable del Estado invita a pensar en la amplia zona estatal que no cumple propiamente fines públicos.

Ejército y Nación

(20 de septiembre de 1981)

Finalizada la celebración del Día de las Glorias del Ejército (19 de septiembre), el articulista hace una reseña del papel que éste ha desempeñado en la historia de Chile, no sólo en el ámbito defensivo sino en el desarrollo de sus instituciones. Luego se refiere a la necesaria convivencia de civiles y militares para el desarrollo y seguridad nacionales.

LasemanaPolítica

EJERCITO Y NACIÓN

El Ejército de Chile, cuyas glorias se celebraron solemnemente ayer, se ha formado conjuntamente con nuestra nación y ha protegido, desde sus comienzos, el crecimiento de ésta.

A instancias del gobernador don Alonso de Ribera, el Rey Felipe III dictó en 1603 la real cédula que aprobó el establecimiento del Ejército permanente en Chile y aumentó los recursos para sustentarlo. El gobernador Ribera, formado militarmente en las guerras de Flandes, dedicó sus mejores esfuerzos a organizar, disciplinar y profesionalizar las fuerzas que debían emplearse en las guerras de Arauco. Si la conducta del aborígen obligó al conquistador a vivir con las armas en la mano desde que quiso asentarse en el territorio, bajo don Alonso de Ribera, a comienzos del siglo XVII, nace propiamente el Ejército de Chile.

La histórica labor de esas fuerzas permite pacificar el territorio entre Copiapó y el río Maule, hace posible la vida civil y productiva en las ciudades que quedaron dentro de la mencionada área e impulsa en forma

notoria la expansión de las actividades económicas.

Con diversas alternativas, las guerras de Arauco se prolongan por siglos y el Ejército debe defender la línea fronteriza del Biobío, soportando, a veces, heroicamente las destructoras incursiones indígenas.

Les corresponde también a las tropas chilenas defender el territorio contra los asaltos de los corsarios. La ciudad de Valdivia debe protegerse por mar y fortificarse en resguardo de la joven nación amenazada.

De hecho, el territorio se conquista palmo a palmo, limpiándolo de peligros y desórdenes, haciendo avanzar difícilmente la civilización y preparando el futuro independiente de la nación.

La Junta de Gobierno de 1810 crea las primeras fuerzas propiamente nacionales y a éstas se deben las glorias de la Patria Vieja.

Luego vienen Chacabuco y la Patria Nueva, la consolidación de la independencia nacional, la formación de nuestras primeras instituciones libres y la continuación del esfuerzo militar por abrirle a la nación la posibilidad de extenderse pacíficamente a lo largo de las ex-

tensas tierras que llegan hasta el extremo sur del continente.

En el exterior, el Ejército coopera con la independencia del Perú y se llena de nuevas glorias en la guerra contra la Confederación formada por el mariscal Santa Cruz.

El Gobierno del general don Bernardo O'Higgins marca el umbral de nuestra vida republicana y el comienzo de nuestra institucionalidad. Luego del triunfo del general don Joaquín Prieto en Lircay empieza la fecunda obra de los decenios, cuyos dos primeros presidentes son los generales don Joaquín Prieto y don Manuel Bulnes. La inspiración de Portales y su energía de Ministro fueron determinantes, pero poco o nada se habría avanzado en la creación de la República civil a no ser por los triunfos de las armas y por las primeras presidencias militares.

Parece innecesario seguir haciendo recuerdos históricos, porque es notorio que pocos pueblos deben más a su Ejército que el nuestro. Dadas la configuración de nuestro suelo y la índole de sus habitantes aborígenes, así como el contexto geográfico en que estamos colocados, la presencia militar ha sido constante, ya sea en guerras interiores como las desarrolladas en el norte durante el Gobierno de don Manuel Montt o en el sur para detener las incursiones seculares de araucanos y de bandoleros; ya sea en la victoriosa guerra del Pacífico, ya sea en intervenciones institucionales decisivas como en 1891, 1924 y 1973.

Es cierto que el Ejército se ha formado en la disciplina y el sentido profesional, pero de hecho ha estado actuando no tan sólo en la

defensa nacional propiamente dicha sino en el desarrollo geográfico, económico e institucional de la nación.

EJERCITO Y PUEBLO

La constante presencia militar en la historia familiariza al pueblo con el Ejército y a éste con aquél. Se diría que el apoyo y la admiración que despiertan las virtudes militares en el pueblo resultan más acentuados en los niveles sociales modestos que en los grupos altos. Pero a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad chilena se da un respeto admirativo hacia el Ejército y hacia las Fuerzas Armadas en general.

Con todo, hay períodos en que se registra cierta incompreensión recíproca entre civiles y uniformados. Ello se da principalmente entre los grupos más cultos e influyentes de la civilidad, por una parte, y las jerarquías militares que pudieran entrar en competencia real o potencial con los primeros en poder o influencia. Lo curioso es que son esos mismos grupos civiles los primeros en dirigir las miradas hacia los militares cuando se encuentran con una situación que no pueden solucionar con sus propias fuerzas.

La relación de militares y civiles es, sin duda, compleja en los niveles altos, pero ambos sectores se necesitan mutuamente y no pueden dejar de convivir sin que se arriesgue la unidad o el desarrollo del país mismo. Ciertamente les es más fácil a los militares el trato con personas sencillas, afables y desprovistas de ambiciones. El chileno en general soporta con facilidad el sacrificio y la disciplina; tiene amor espontáneo por la patria y aprecia

las virtudes del mando, del coraje y de la obediencia legítima. La compenetración en ese terreno es profunda y sólida, a menos que factores políticos o ideológicos vengan a subvertir en los individuos el natural apego que sienten por las virtudes militares.

En los niveles superiores de la sociedad el problema tiene un matiz distinto. Por una parte, hay entre los civiles jerarquías que no siempre están señaladas por un estatuto o un distintivo, como es el caso de las personalidades universitarias o artísticas, por ejemplo. Entre los militares, las personalidades destacadas tienen un rango visible y un protocolo preciso las rodea. En la civilidad los niveles jerárquicos son difusos y bastante relativos. Puede ocurrir, entonces, que en la convivencia cívico-militar se produzcan incomprensiones por desconocimiento de la existencia real de jerarquías y de valores intelectuales y morales en ambos grupos. Por otra parte, hay núcleos civiles que no comprenden las virtudes militares y que incluso se atreven a desconocer la enorme capacidad intelectual y técnica que necesitan los grandes jefes y los ejércitos modernos. La ignorancia recíproca y el prejuicio durante algunos períodos de nuestra historia han sido inconvenientes para el país y perjudiciales tanto para los militares como para los civiles.

La convivencia de que hablamos es necesaria. No hay defensa nacional ni seguridad nacional efectivas sin el concurso de los civiles. En Chile ese concurso es generoso y amplio en la masa social, pero las complejas operaciones de la guerra y de la seguridad nacional exigen

hoy la colaboración de las mejores capacidades del país en el campo científico y profesional. De ahí que la buena relación entre los núcleos más preparados de los civiles y del Ejército resulta indispensable. De ahí, además, el carácter imperativo de una buena relación entre la Universidad y el Ejército, fundada en el más completo y escrupuloso respeto de uno y otro por sus respectivos valores y misiones.

EJERCITO Y GOBIERNO

La participación del Ejército y de las Fuerzas Armadas y de Orden en la historia nacional aparece con entera evidencia a partir del 11 de septiembre de 1973. El fenómeno es nuevo en sus formas, pero responde a una larga y activa presencia militar en el desarrollo nacional.

El pronunciamiento fundó un Gobierno. Este último asumió la plenitud del poder político, incluida la potestad constituyente. Ejerciendo ésta, se dictó una Constitución que ha sido ratificada por plebiscito.

Si siempre se hizo la distinción entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas y de Orden que lo sustentan; entre la Junta de Gobierno en sus funciones políticas y la actuación de los respectivos jefes a cargo de sus instituciones, y entre el servicio transitorio prestado por militares a la Administración y las carreras militares propiamente tales, a partir del ordenamiento constitucional vigente desde el 11 de marzo de 1981, el Gobierno de la República tiene una fisonomía y una fuerza distintas a las instituciones que lo formaron. El Gobierno posee un

pensamiento, una obra y una tradición que se han desarrollado bajo el mando del Presidente Pinochet. El Ejército, como las demás instituciones de la Defensa Nacional, tiene su propio camino profesional y sus deberes específicos.

Es natural que los militares que desempeñan altas funciones administrativas o políticas o educacionales y que no disponen del excepcional sentido político del Presidente Pinochet, tiendan a aplicar sus propias modalidades de conducta y sus criterios habituales a los nuevos problemas que afrontan. Los conceptos de lealtad, de disciplina, de honor y otros muy propios de la caballeresca vida militar suelen revestir aspectos diferentes en la vida civil. El trato de civiles y militares en los planos del poder y de las jerarquías ofrece mayores dificultades que las habituales por el hecho de que muchos distinguidos hombres de armas cumplen funciones públicas.

El éxito del Gobierno, los problemas permanentes del país, su seguridad y su desarrollo exigen un Ejército de las condiciones profesionales del nuestro, pero también obligan a contar con empresarios, con escritores, con universitarios, con periodistas, con artistas de todo género, con profesionales, especialistas, técnicos, obreros y campesinos. Naturalmente nadie pretendería encuadrar la feliz y fecunda variedad de empleos, profesiones y vocaciones de la sociedad chilena en el marco militar, así como sería irracional exigir —aunque tal vez lo pretenda más de algún civil— que los militares adopten actitudes o hábitos que no son propios de su formación y vocación profesionales. La integración cívico-militar requiere de esfuerzo e inteligencia por parte de los dos sectores comprometidos. El proceso no puede forzarse, pero es preciso comprenderlo, adivinar sus peligros y apreciar sus méritos.

Actividad económica

(8 de noviembre de 1981)

El Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos deciden la intervención de los Bancos Español de Talca, de Linares y de Fomento de Valparaíso, y de las financieras Cash, de Capitales, Compañía General Financiera y FINANSUR (EM, 3 noviembre pág. A-1). Junto con ello se dictan normas restrictivas para los préstamos entre bancos y otras disposiciones (EM, 4 noviembre pág. A-1).

La Semana Política

CIMIENTO DEL RÉGIMEN

El pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 fue una prueba de la sensibilidad histórica de nuestras Fuerzas Armadas, que acudieron a interpretar el sentimiento ciudadano y a conjurar a la vez el caos y el peligro marxista.

La intervención militar estuvo precedida por un vasto movimiento cívico espontáneo, a la vez que solidario y vigoroso, que manifestó por todos los medios a su alcance la resistencia democrática al avance del marxismo. Vastos sectores gremiales, agrupaciones de mujeres y de estudiantes, empresarios y trabajadores, lucharon juntos para hacer posible que el país recuperara la fe en sí mismo y en sus destinos, mientras todo parecía derrumbarse y desquiciarse alrededor.

Durante los años 1972 y 1973 no hubo virtualmente grupos distantes y divisionismos en los sectores democráticos, excepción hecha de algunos devaneos partidistas que más de alguna vez parecieron aproximarse a los falsos deseos apaciguadores del oficialismo. Era tan grave y vital el riesgo que no cabían mayores distinciones. Lo esencial era

impedir el advenimiento de una dictadura marxista. Mujeres y hombres olvidaron los intereses propios y el espíritu de secta para formar parte del gran movimiento ciudadano de resistencia sorda y luego pública a los esbirros del marxismo internacional.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, ponderaron con serenidad los acontecimientos, formularon un juicio acerca de la trascendencia de los desgarramientos sociales y políticos que sufría el país, y comprendieron que su intervención conjunta, en compañía de Carabineros de Chile, era un imperativo de la seguridad nacional.

Las Fuerzas Armadas y de Orden no llegaron al poder para apoyar banderías o partidos ni para formar un partido más. Su papel fue desde el primer momento, y continúa siendo hasta ahora, cumplir una tarea de reconstrucción y desarrollo en un esquema de libertad. El intenso trabajo de los militares en el Gobierno, y como apoyo a éste, se ha traducido en los progresos que están a la vista. No tan sólo el orden, la tranquilidad y la limpieza, sino las modernizaciones profundas, los cambios de hábitos y hasta cada

incremento de los patrimonios individuales tienen como base y marco de sustentación la presencia militar.

Por fortuna, la plenitud del poder político ha recaído en hombres de armas de gran probidad y delicadeza. De este modo, el nacimiento de una economía de mercado con sus logros, pero también con su secuela de codicias, maniobras y actos delictuosos, debidos a la naturaleza humana, tuvo lugar ante la vista severa a la vez que tranquila del Presidente de la República y de los miembros de la Junta de Gobierno, todos los cuales aparecen hoy revestidos de la autoridad moral suficiente para censurar, rectificar o guiar las conductas, porque ellos mismos están libres de la más mínima sospecha de compromiso con los negocios privados. Esto nos parece natural en Chile, porque así son los hombres que visten el uniforme militar de la patria; pero esta honestidad no es patrimonio de todos los regímenes autoritarios y en varios de ellos los malos ejemplos por enriquecimiento indebido, empiezan desde muy arriba.

Los chilenos hemos tenido suerte al ser conjurada la amenaza marxista y al contar con gobernantes ejemplares en lo que toca a su moral privada. Es, en cierto modo, una suerte también que los malos ejemplos en lo que atañe a la forma de hacer dinero hayan provenido de simples particulares. El verdadero nacimiento del régimen está en la integridad de las Fuerzas Armadas y de Orden, en la conducta irreproachable de sus altos mandos, jefaturas, oficialidad, clases y soldados, y en la moral profunda que permitió a esas instituciones superar largos decenios de abandono y hasta

de hostilidad. Con dicha moral hoy afrontan por igual los atractivos de una fácil y falsa holgura así como las penalidades de los malos tiempos.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Según las opiniones más autorizadas, el Gobierno ha hecho bien en intervenir cuatro bancos y cuatro financieras. No hay opinión discordante con dicha intervención. Otra cosa es que todos estén de acuerdo en cuanto a la oportunidad de la medida, es decir, respecto de si ésta se adoptó en su momento o debió tomarse antes. Naturalmente el costo del reflotamiento de las entidades intervenidas será distinto en la medida del pasivo que éstas acumularon.

Las autoridades financieras sostienen que la intervención, lejos de contradecir a la política económica en vigencia, viene a defenderla.

Es más que probable, en efecto, que el sistema económico libre, que tiene aún muy pocos años de edad y sucede a decenios de criterios socializantes, necesite de ciertas protecciones y defensas. Los hechos demuestran que tal sistema todavía no es apto para vivir a la intemperie.

La intervención de las ocho entidades financieras ha venido acompañada del proceso criminal contra dos empresarios y la rápida detención de los mismos. La Superintendencia de Bancos formuló una denuncia contra esos empresarios, pero se desconocen los hechos ilícitos denunciados.

Cualquiera que sea la gravedad efectiva de los actos de los dos detenidos, no parece buena práctica este género de detenciones súbitas

y ampliamente divulgadas, que coloquen en situación de escándalo a personas cuyos delitos están descritos de manera vaga y general. Se comprende que el denunciante guarde reserva sobre los datos cuyo conocimiento público perjudicaría su causa y mucho más se entiende el principio legal del secreto del sumario; pero no se ve la razón para ocultar en este caso la naturaleza de los delitos denunciados. El silencio perjudica a los detenidos, ya que no es lo mismo desde el punto de vista ético afrontar la responsabilidad por unos crímenes o delitos que por otros. En nada se comprometería el éxito de la investigación si el público conociera cuáles son los crímenes, delitos o faltas que presuntamente cometieron los inculpados.

El criterio persecutorio puede ser útil para amedrentar a los individuos sin escrúpulos, pero con ello se corre el riesgo de introducir cierto clima de incertidumbre o inseguridad poco idóneo para el desenvolvimiento de la actividad económica. La presencia de reglas claras, públicas y generales debiera ser incompatible con un ambiente de sospechas o vacilaciones sobre lo que es lícito o ilícito.

En cualquier régimen económico se producen anomalías, irregularidades y delitos. El sistema de libertad no se exceptúa de esta regla. Muy por el contrario, con él quedan a la vista las imperfecciones humanas. No debiera extrañar a nadie, y mucho menos a los economistas, que ciertos individuos incurran en especulaciones aventuradas, en riesgos imprudentes y en maquinaciones maliciosas en el desempeño de sus negocios. Lo importante es

que el sistema haya establecido con la debida antelación el límite entre lo autorizado y lo prohibido, entre lo lícito y lo ilícito. En segundo lugar, también es importante que las ilegalidades e ilicitudes merezcan una sanción, determinada con precisión antes de que aquéllas se cometan. En tercer término, debiera separarse mentalmente el castigo legal señalado a los actos ilícitos de los vagos enjuiciamientos morales, de las distinciones entre libertad y libertinaje y de otros puntos que, si bien importantes, pueden desembocar en una nueva versión de la caza de brujas o, si se quiere, del "macarthismo" económico.

El régimen ha tenido éxito en el desarrollo material del país al estimular la libertad económica, el riesgo y la iniciativa individual. Estos valores tienen su expresión dinámica en la empresa y en las diversas formas de organización gerencial conducentes a la productividad. Si en las autoridades económicas del Gobierno se alimentara, a raíz de lo sucedido, un clima de desconfianza hacia los empresarios o un concepto negativo sobre los grupos económicos, sin distinguir entre el justo repudio a la inmoralidad —venga de donde viniere y la cometan empresarios, trabajadores o cualquier persona— y la condenación global a ciertos sectores, el régimen le habría hecho el mejor servicio a sus adversarios. Nada puede, en efecto, beneficiar más a éstos que un divorcio entre el Gobierno y los elementos empresariales dinámicos. Pocos elementos más explosivos políticamente podrían ponerse en manos de la oposición al Gobierno que un clima de animadversión hacia los empresa-

nos, hacia la acumulación de riqueza y hacia la libertad económica, aun contando con todos los costos que ésta encierra.

Estamos lejos de favorecer la impunidad de quienes delinquen al realizar actos penados por la ley, pero vemos sólo inconvenientes en la actitud inquisitorial que prejuzga de meras intenciones y que inhibe con sus sospechas a quienes podrían rendir un buen servicio como productores e innovadores, permaneciendo dentro de la ley. Dicha actitud es lo más opuesto al sistema de libertad imperante y el mayor freno a las posibilidades de crecimiento nacional.

Una economía de mercado se

funda ciertamente en la seriedad y la honestidad de quienes actúan en ella, pero se desarrolla gracias a la inventiva e iniciativa de éstos, para lo cual necesitan libertad, un mínimo de controles y sanciones, y una regla legal objetiva y general que establezca unos y otras.

La neutralidad económica del Gobierno es un buen principio orientador, pero quienes lo predicán necesitan evitar que el exceso de celo de algunos de ellos transforme tal principio en impulso inquisitorial, en pretexto para la caza de brujas y en factor de desconfianza y distancia con respecto a los elementos empresariales más capaces de crear riqueza.

Educación, un sector prioritario

(24 de enero de 1982)

A raíz de la publicación de los nuevos planes de enseñanza para la educación media, se realiza un análisis de la tarea que le compete al país en el ámbito educacional.

La Semana Política

EDUCACIÓN, UN SECTOR PRIORITARIO

La mayor riqueza que puede cultivar una nación es la que se origina en los talentos y capacidades de sus ciudadanos. El conjunto de conocimientos y destrezas que puede desarrollar el hombre constituye uno de los motores fundamentales del progreso, que no puede entenderse únicamente como una mejora económica y material, sino que comprende la adopción de valores espirituales de profundo significado para las condiciones generales de vida. Una persona educada aprecia el patrimonio cultural de su país, comprende mejor sus propias inclinaciones y hasta en sus momentos de esparcimiento disfruta de una riqueza invulnerable.

El objetivo nacional de construir una sociedad libre y justa exige satisfacer, en la medida de lo posible, las aspiraciones educacionales de los chilenos. Los beneficios sociales que trae la enseñanza, además de las ventajas para cada individuo, justifican ampliamente los esfuerzos que se realizan en pos de esa meta.

El gasto nacional en estas materias es en realidad una inversión y su rendimiento es uno de los más altos que pueden obtenerse. Así,

dejando de lado los importantes beneficios sociales e inmateriales de la labor educativa, diversos investigadores han comprobado que los dineros destinados a ella tienen una alta rentabilidad, que supera fácilmente la de otras actividades que tienen por fin aumentar la producción. Un trabajador bien instruido, cualquiera sea el plano en que se desempeñe, realiza mejor sus tareas y termina por favorecer a todos los que requieren de sus servicios o utilizan sus productos.

La apertura de Chile al comercio con otros países ha significado un fuerte desafío para los productores nacionales. La comodidad que daba el proteccionismo aduanero permitía que el país trabajara al margen de algunos adelantos tecnológicos y las exigencias para quienes se desempeñaban en ciertas ocupaciones eran menores que las que imperaban en el resto del mundo. De más está decir que estos retrasos constituían un sacrificio para los propios trabajadores, que, al momento de consumir, debían conformarse con artículos de menor calidad. Ahora, la incorporación de nuestro país al comercio internacional obliga a la adopción de tecnologías modernas que, gracias a la investigación, experimentan continuas modificaciones. Pero para tra-

bajar con los complejos aparatos de hoy es necesario contar con operarios técnicamente calificados y, en general, se hace necesaria una fuerza laboral con un grado más elevado de educación que el que se ha requerido hasta ahora.

Las consecuencias económicas de la educación, aunque difíciles de medir con precisión, se traducen en un mayor ritmo global de crecimiento. La instrucción formal que se imparte en escuelas y otras instituciones oficiales no es por cierto la única manera de adquirir conocimientos, pero no puede desconocerse su importancia como mecanismo para proveer los mínimos generales. La base allí adquirida en cuanto al lenguaje, las matemáticas fundamentales, la historia, los métodos de estudio, etc., hace posible los avances posteriores y debe recibir, como ha sido hasta ahora, la atención que merece.

De enorme trascendencia es también la actividad educacional en sus planos más altos. El conjunto de conocimientos del hombre crece continuamente. El saber permite proseguir la exploración de la realidad en una tarea que debe tener alta prioridad en Chile. El desarrollo de cuadros de investigadores que contribuyan a acrecentar el conocimiento de nuestras propias realidades es una necesidad innegable. Por buena que sea alguna tecnología extranjera, hay problemas nacionales que sólo podrán resolverse por chilenos. Nuestros recursos potenciales, nuestros suelos, nuestra flora y fauna y tantos otros elementos de la naturaleza y de la sociedad del país deben ser primero descubiertos para ser luego valorados y aprovechados por todos.

Pero, más allá de los efectos económicos de un buen sistema educacional, existen importantes consecuencias sociales y políticas que deben apreciarse debidamente. Un pueblo ignorante es presa fácil de consignas demagógicas que en forma irresponsable prometen resultados quiméricos. Sin un hábito analítico y sin comprender los fenómenos básicos de la realidad, todo parece posible. La magia desplaza a la lógica y en tales condiciones el germen de una agitación social estéril y destructora podría prender peligrosamente.

NUEVOS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA

El Gobierno ha demostrado en estos años tener plena conciencia de la importancia de la educación. El gasto se ha multiplicado, elevándose por sobre los mil 500 millones de dólares, y se han consagrado grandes esfuerzos a la reorganización de la función administrativa con miras a un mejor aprovechamiento de los recursos. Además, teniendo presente que los dineros fiscales, fruto del aporte de todos, deben orientarse prioritariamente a los más pobres, los presupuestos han sido reformulados, canalizando una proporción creciente hacia la enseñanza básica.

Sin embargo, estas medidas podrían resultar inútiles de no mediar un cambio cualitativo en la educación. A través de los años han quedado de manifiesto las deficiencias del sistema y todos los intentos por superarlas han resultado infructuosos hasta ahora. La incorporación en masa de estudiantes a los servicios educacionales se ha visto con-

trastada por cantidades cada vez más crecidas de alumnos que fracasan en sus estudios. Una proporción considerable simplemente abandona la tarea a medio camino. En promedio, los estudiantes no superan el 5° Año Básico y menos de la mitad completa los ocho años correspondientes a este ciclo. La deserción continúa en la enseñanza media y aun en la universitaria se repite el fenómeno.

Por estas y otras razones, los planes y programas de la enseñanza básica fueron reformulados en 1980 y ahora se publican los de la educación media, que comenzarán a regir plenamente en 1983. Esta fase de los estudios se dividirá en dos ciclos, el primero común y el segundo con dos opciones, una científico-humanista y otra técnico-profesional. El número de asignaturas se reducirá —aunque todavía se mantiene una carga abultada de ramos— y se abren posibilidades de cursos electivos, los que se ofrecerán de acuerdo con los medios de los establecimientos y los intereses de los jóvenes. Las enseñanzas que ponen énfasis en la preparación para el mundo del trabajo podrán ser incorporadas a los nuevos programas, lo que tal vez cambiará la faz de muchas instituciones de educación media.

No puede desconocerse que los resultados de esta etapa de la enseñanza han sido verdaderamente desalentadores y la falta de preparación de los graduados tiene hondas repercusiones para la vida económica, social y política del país. La reforma de programas puede mejorar la situación actual si efectivamente se aprovecha con buen sentido la flexibilidad curricular.

Los profesores dispondrán del año 1982 para estudiar los nuevos currículos y planificar con imaginación y libertad los nuevos ramos. Es una oportunidad que les brinda el nuevo sistema y una grave responsabilidad para quienes tienen en sus manos el destino de la educación chilena.

ESTATUTOS UNIVERSITARIOS

La Universidad de Chile cuenta desde esta semana con nuevos estatutos. Otras universidades estatales han adoptado disposiciones generales semejantes a las de la Casa de Bello. La Universidad Católica ha reorganizado su plantel creando nuevas Facultades y adoptando programas flexibles que deben multiplicar las opciones de los estudiantes. Un nuevo dinamismo reina en las actividades de la educación superior desde que comenzó a ser promulgada la legislación universitaria del año pasado. Semana tras semana se anuncian cambios de importancia en los distintos planteles, abriendo nuevos cauces a los mejores estudiantes —que, en definitiva, serán quienes decidirán el destino de estas instituciones— o reformulando las disposiciones internas que deben ordenar la vida académica.

El objetivo que anima actualmente a las universidades es proporcionar opciones de valor académico a los alumnos. Nada puede ser más favorable para los profesores que este anhelo de excelencia que anima a las autoridades a buscar soluciones profundas para los problemas de la educación superior.

Los nuevos estatutos universitarios deben cautelar el cumplimen-

to de las finalidades propias de la universidad. La generación de nuevos conocimientos y la formación intelectual y técnica de los cuadros de profesionales podrían señalarse como algunas de las más altas finalidades del quehacer universitario. Desgraciadamente, en épocas no muy lejanas, grupos de presión que actuaban desde dentro y fuera de las universidades desfiguraron efectivamente muchas de sus tareas, y pudo apreciarse un estado alarmante de indefensión de parte de los verdaderos académicos. Las autoridades universitarias deberán responder en el futuro ante una junta directiva que representa a quienes fueron los gestores de la universidad. Velar por el cumplimiento de los fines para los cuales ésta fue creada parece ser el factor común de las tareas de las juntas directivas. La dirección superior de las universidades debe proporcionar a los académicos las condiciones nece-

sarias para que éstos puedan cumplir sus importantes tareas. Sin duda éste es un antiguo anhelo de los mejores académicos. La fuerte vocación que caracteriza a investigadores y maestros los impulsa a trabajar con total dedicación, y las labores administrativas que, por cierto, han de estar subordinadas a sus necesidades, no deberían distraerlos de su alta misión.

Los estatutos universitarios y el reordenamiento de los planteles superiores, unidos al estímulo que ha significado la captación de los mejores estudiantes, debieran abrir una etapa de estabilidad y desarrollo para la educación superior y no se advierten suficientes razones para postergar por largo tiempo su plena vigencia. Cuanto antes asuman los directivos universitarios sus papeles y se comience una época de entera normalidad, mejor será para el destino de las universidades.

Dudas e incertidumbres

(7 de marzo de 1982)

El 26 de febrero es asesinado y dejado en su taxi, en las afueras de Santiago, el dirigente sindical Tucapel Jiménez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF (EM, 27 febrero, pág. A-1).

En esos mismos días, Investigaciones anuncia que se ha resuelto el caso de los múltiples asesinatos ocurridos en el último tiempo en las cercanías de Valparaíso y Viña del Mar, y señala como culpable a un industrial viñamarino. (EM, 3 marzo, pág. A-1.) (EM, 4 marzo, pág. A-1.)

La Semana Política

DUDAS E INCERTIDUMBRES

A vuelta de vacaciones dos hechos policiales de distinta naturaleza, pero de gran efecto conmocionador, llegan al primer plano de la actualidad: el cobarde y cruel asesinato del dirigente gremial anticomunista señor Tucapel Jiménez y la imputación de cuatro homicidios a un hombre de negocios viñamarino, quien sería el temido asesino múltiple de Viña del Mar.

En lo que concierne al crimen cometido en la persona de Tucapel Jiménez, asesinato oscuro en sus propósitos, cometido en circunstancias impensables y llevado a cabo con una mezcla de impericia, tal vez fingida, y de fría inhumanidad, la condenación pública es unánime, empezando por la pronunciada en los primeros momentos por el Presidente de la República.

Innumerables son las personas que han exteriorizado la sospecha de que se trate de un crimen político. Parece indispensable descartar al Gobierno como instigador o responsable de este homicidio, no sólo por razones de elemental respeto a

nuestros gobernantes y al país mismo, sino porque tal crimen perjudica de todas maneras al Gobierno, sin que éste pueda obtener provecho de ninguna clase de este suceso terrible. Es evidente, hasta para el más apasionado de los opositores al régimen, que el daño provocado por este crimen al Gobierno es muy superior a los muy limitados problemas que pudiera haber ocasionado a éste el dirigente Tucapel Jiménez en sus infatigables esfuerzos en pro de la unidad sindical democrática.

Sin embargo, la sola duda, la sola argumentación tendiente a descargar al Gobierno de responsabilidad en el crimen, resultan lamentables. Hay que deplorar, en efecto, un deterioro serio de la confianza pública en lo relativo a la seguridad de las personas.

La existencia de un enfrentamiento invisible entre fuerzas del orden y extremistas, los esporádicos atentados terroristas de distinta magnitud, el oprobioso asunto del comando de vengadores organizado en un servicio policial, el crimen de Calama en que se emplean torcidamente individuos, técnicas y disci-

plinas de los Servicios de Seguridad, son algunos de los elementos que configuran un clima de dudas e incertidumbres personales que se desconocía en Chile.

Se afirma que Tucapel Jiménez era seguido por un taxi y alguien dice públicamente que a ese dirigente o iban a expulsarlo o iban a matarlo. Dichas aseveraciones carecen de réplica oportuna. Por lo demás, la réplica no tendría validez práctica mientras no se encuentre al asesino de Jiménez y no pueda hacerse plena claridad sobre todo este confuso mundo de los enfrentamientos de la guerra de inteligencia y contrainteligencia, mezclados con criminales debilidades humanas.

Se ha señalado a la luz pública al posible criminal múltiple que asesinaba parejas en Viña del Mar. La policía no ha dado a conocer los antecedentes en que funda la grave acusación formulada en contra del supuesto asesino, salvo la identificación del arma homicida. El caso es policialmente extraordinario, como muy pocos, y su esclarecimiento definitivo deberá constituir una honra para el Servicio de Investigaciones, así como un progreso en el camino de la rehabilitación de la confianza pública en el campo de la seguridad personal. Pero nada puede decirse definitivamente a este respecto, por el momento, ya que recién ha comenzado la investigación judicial.

DOGMAS Y CÍRCULOS ESTRECHOS

La vigencia de la Nueva Constitución debía aparentemente ampliar el horizonte de la vida pública chi-

lena y facilitar el desarrollo de corrientes de opinión que evitaran el aislamiento del Gobierno y facilitarían la necesaria presencia de la ciudadanía en las decisiones del poder.

En el hecho esta ampliación no ha ocurrido. Es cierto que el Presidente mantiene un trato directo y cordial con amplios sectores de chilenos a lo largo y ancho del territorio, pero ese diálogo, necesariamente breve y esporádico, no sustituye al intercambio orgánico del poder con la sociedad. Faltando este último, el Jefe del Estado y sus colaboradores encuentran dificultades para palpar la realidad auténtica del país. En torno al Gobierno suelen formarse círculos estrechos, exclusivos y excluyentes, en que el dogmatismo sustituye al debate honesto y en que la crítica o la disidencia —por desinteresada, patriótica y cooperadora que sea— se juzga como proveniente de adversarios o como instrumentalizados por intereses particulares. Las luchas más enconadas tienen lugar entre los diversos círculos o sectas, cada una de las cuales exhibe su desafiante incompreensión y su desconfianza para con los no iniciados en ella.

De vez en cuando surge una voz valiente que expone puntos de vista diferentes a los que ostentan patente oficial. Esa voz pasa con frecuencia a ser minimizada o penada con anatemas.

Se da así la paradoja de que el sistema de libertad que el Gobierno patrocina y que tiene una de sus bases en el esquema de libertad económica se plantea con tal carácter dogmático, con tanta intranquilidad y en formas accesibles a

círculos tan pequeños, que va poniéndose en peligro la libertad misma, la libertad de opinión y expresión, la libertad de reflexionar y de decidir sin sumisión al dictado ajeno.

Los meses que se avecinan no prometen ser fáciles. Lo probable es que el país necesite acudir a sus mejores fuerzas, a sus centros de más dura resistencia moral, para encarar las dificultales. El momento es indicado para solidarizar, para unirse, para congregarse en torno a las grandes metas nacionales. Parecen inoportunas las exclusiones y excomuniones apresuradas. Hay que superar a los inquisidores y abrirse al libre examen de los asuntos políticos y económicos, pues el país necesita enriquecerse con ideas, sugerencias, proyectos e iniciativas. El ajuste recesivo no ha de regir para la imaginación y la inteligencia. He aquí el gran problema que se le presenta a un país que avanza en orden, pero cuyos problemas requieren, por su magnitud, un grado creciente de reflexión capaz de generar soluciones reales.

El dogmatismo y el espíritu de círculo no han de confundirse con la afirmación honesta de los principios. Esta última es un requisito indispensable de la vida pública y no se opone, sino que favorece el intercambio de opiniones y el análisis de los distintos puntos de vista. El espíritu de dogma y de círculo en materias contingentes suele asfixiar la vida pública, empobrecerla, aislar a las sectas que lo profesan; en último término, viene a privar a los gobiernos del aire vivificador de las personalidades e ideas nuevas que sirven para continuar y reafirmar los principios.

LA CONSTITUCIÓN

El próximo jueves se cumple un año de la vigencia de la Constitución Política de la República.

Dicha Carta ha de considerarse un instrumento que ayude a conformar la nueva institucionalidad. Especial importancia revisten las leyes constitucionales contempladas en sus disposiciones y que han de dictarse para poner verdaderamente en marcha los mecanismos que la Constitución contempla.

Hay una tarea vasta de carácter legislativo en esta materia. Como muchas de esas leyes requieren de quorum calificado para su derogación, es probable que sus normas tengan una larga vigencia. De ahí la importancia del estudio prolijo y a fondo de los asuntos que han de ser objeto de esta legislación. El debate público, a lo menos el amplio debate ilustrado, acerca de los distintos proyectos de leyes constitucionales parece una necesidad ineludible. No conviene al prestigio del régimen y a la respetabilidad de las instituciones el riesgo de tener que introducir enmiendas y más enmiendas en reglas trascendentales, para corregir errores que pudieron evitarse con la concurrencia de los mejores peritos legales en los respectivos ramos.

La vigencia de la Constitución ha coincidido con un significativo avance del régimen municipal y ha permitido la instalación del Tribunal Constitucional, pero la Carta no ha provocado todavía el proceso efectivo de transición política que se deduce de sus disposiciones y que debiera empezar por el examen de las materias que habrán de quedar regidas por leyes constitucionales.

En el proceso de apertura que requiere la vida constitucional normal conviene que se analicen también, en el amplio debate ilustrado, las posibles dificultades que plantea el funcionamiento de la Carta. Muchos de los problemas de aplicación derivan de la forma en que se dictó y de las negociaciones que se realizaron para llegar en tiempo oportuno a la completa aprobación del texto. El trabajo de la Junta de Gobierno, como cuerpo constituyente, es digno del mayor elogio, pero el justo reconocimiento a nuestros legisladores, a los redactores iniciales del texto, al Consejo de Estado y a los asesores en las diversas etapas del proyecto no excluye el deber de

hacer la crítica del trabajo y de sugerir soluciones a los puntos que mostraron problemas. El caso de la propiedad o concesión minera es uno de ellos, resuelto con una fórmula feliz, pero que no logra todavía plena aplicación.

Al cumplirse el primer año de la Presidencia constitucional del general Pinochet, y un año de vigencia de la Carta de 1980, conviene que la ciudadanía levante la vista más allá de la recesión y de la crisis, para colaborar a que se construyan definitivamente las instituciones duraderas, se eliminen los obstáculos al desarrollo integral del país y se vigorice la vida pública en un clima de confianza y unidad nacionales.

Regla constitucional discutible

(14 de marzo de 1982)

Días después de haber anunciado Investigaciones el descubrimiento del autor de los crímenes cometidos en la Quinta Región, éste queda libre de cargos y se señala como verdaderos culpables a dos funcionarios de Carabineros (EM, 8 marzo, pág. A-1; 9 marzo, pág. A-1). Se acusa a la prensa de haber ofendido gravemente el honor del primer inculcado, y el presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, critica duramente a los medios de comunicación social a través de una cadena nacional de televisión (EM, 10 marzo, pág. C-3).

El Gobierno anuncia, asimismo, el envío de un proyecto de ley para sancionar a los medios de comunicación que atenten contra el honor de las personas (EM, 2 marzo, pág. A-1).

La Semana Política

LA LIBERTAD Y EL HONOR

El primer aniversario de la Constitución de 1980 sorprende a la ciudadanía en un momento de poca claridad, debido a errores policiales graves, a los desmanes de alguna prensa y a la posición de censura adoptada por el presidente de la Corte Suprema y de la que participa también S.E. el Presidente de la República.

Nadie puede negar que cierta prensa incurre en desbordes e irresponsabilidades, y que han sido muchas las voces de advertencia tendientes a refrenar, ya sea la explotación de la pornografía o el atropello de la vida privada o de la honra.

Tampoco puede negarse que estas debilidades han existido siempre, y que en otros momentos de la historia del país asumieron proporciones mucho más extremadas que las que hoy motivan las condenaciones.

Sigue vigente una severa ley de publicidad que castiga los delitos que se cometen a través de los medios de comunicación social. Allí quedan sancionados la pornografía, la injuria, la calumnia y otros hechos ilícitos. No suele recurrirse con la frecuencia debida a los mecanismos de esta ley. En otros tiempos quienes buscaron en sus disposiciones el castigo de los delincuentes de la publicidad sufrieron la frustración de ver indultados a sus ofensores. Además, ni las partes ni los abogados ni los jueces parecen haber sacado suficiente partido y ayudado a formar una doctrina acerca de los abusos de la publicidad.

Ahora bien, como suele ocurrir en Chile, la dictación de nuevas leyes es empujada por la incapacidad para extraer de la legislación vigente los principios y las consecuencias que el concurso inteligente de abogados y jueces necesitan descubrir. Así se ha ido formando el hacina-

miento de leyes parciales, contradictorias a veces o innecesariamente reglamentarias, que han hecho perder a nuestro país las líneas armónicas de un sistema legislativo consecuente, asequible y expedito.

En este caso, la insinuación del presidente de la Corte Suprema para poner en aplicación un precepto constitucional —que requiere de ley— encuentra como respuesta la iniciativa de S.E. para añadir una nueva ley a las que ya existen sobre la prensa.

Ciertamente el honor merece todo el amparo de la sociedad y de la ley. Los ataques a la honra de las personas y a la familia tienen especialísima gravedad. Los gobernantes y magistrados están en el deber de cautelar el honor y la fama de los buenos ciudadanos. Lo que se discute es si esos valores se resguardan mejor con el empleo adecuado de la legislación vigente o con nuevas disposiciones legales.

Pero, con ser importante el honor y haberlo sido siempre, su defensa especial y ardorosa irrumpe precisamente ahora, cuando han ocurrido hechos graves que afectan a la libertad y seguridad de las personas, hechos que sería ilícito silenciar.

El asesinato del dirigente gremial señor Tucapel Jiménez, cometido al parecer a la luz del día, es uno de esos hechos graves. No es comprensible que un ciudadano sea asesinado por móviles desconocidos y todavía inalcanzables para la policía, sobre todo cuando se trataba de una persona pública con actividades y posiciones claras para todo el país.

Otro hecho grave es que la policía civil haya inculcado a un ciuda-

dano de múltiples y horribles asesinatos, sin que hasta ahora se conozcan las causas de un hecho tan perturbador y perjudicial, como inexplicable. Después de lo ocurrido, la confirmación del brigadier general don Fernando Paredes al frente de Investigaciones ha extrañado a muchos. Sin embargo, los antecedentes de este oficial general permiten confiar en que llegue a la raíz del error policial, sancione a los que aparezcan responsables y devuelva la plena confianza pública en el servicio a su cargo.

Un tercer hecho digno de preocupación es la nueva atribución de los homicidios de Viña del Mar, ahora a dos funcionarios de Carabineros. El uniforme de los actualmente reos, las delicadas funciones que cumplían y la tardanza en descubrirlos, así como la oportunidad en que sobrevinieron su detención y procesamiento mueven a inquietud.

Estos asuntos deberían ser explicados con toda claridad. No hay duendes en el mundo político y policial. Los hechos han de tener alguna explicación, y si esta última provoca perjuicios a alguien, él debe sufrir las consecuencias. Lo peor es el sentimiento público de sospecha, de inseguridad y de crítica solapada.

Reconociendo los motivos éticos que tiene S.E. para buscar una defensa al honor de las personas, justo es expresar que el momento para dictar las disposiciones sugeridas por el señor presidente de la Corte Suprema no puede ser más inoportuno. La iniciativa tiende a establecer un distanciamiento del Gobierno con la prensa, en el instante en que es fácil echar a correr interpretaciones que describen la legisla-

ción sobre el honor y las intervenciones públicas sobre el tema como un expediente para evitar o postergar la explicación de los errores policiales graves que mencionamos más arriba.

REGLA CONSTITUCIONAL DISCUTIBLE

No son infalibles las constituciones. Prueba de ello es que existen tantas y que se modifican cada vez que parece necesario.

Además, en la Constitución se dan principios jurídicos de carácter permanente y relativos a la organización del Estado a los derechos ciudadanos, pero también se añaden disposiciones más emparentadas con las leyes ordinarias que con la Carta Fundamental.

Un ejemplo de esta última situación aparece en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de 1980. Dicho precepto contiene una norma constitucional propiamente dicha, una regla fundamental e inspiradora de la legislación, al decir que la Carta asegura a todas las personas "el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia". Tal vez la redacción no sea muy cuidada, pero el principio es claro. Se trata de proteger la vida privada y la honra.

Luego viene un precepto, que bien podría haber quedado sin jerarquía constitucional. "La infracción a este precepto —continúa disponiendo el mismo artículo 19 N° 4— cometida a través de un medio de comunicación social, y que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédi-

to a una persona o a su familia, será constitutiva de delito...".

Tal como está redactado el precepto, puede prestarse para el amordazamiento de la prensa. El objetivo no es otro —como lo adelantó S.E.— que contener a la prensa no sería, pues la que actúa seriamente no tendrá dificultades con la justicia por este concepto. La intención es inobjetable. Añadamos que casi todos los grandes errores legales se cometen con las mejores intenciones. Cabe decir, asimismo, que esta distinción entre prensa seria y prensa irresponsable es subjetiva y depende del punto de vista en que se coloque el juzgador. La apreciación de si la prensa es o no seria depende de las veleidades políticas, de los cambios de gobernantes y de las circunstancias. Esto recuerda que la reforma agraria se propuso oficialmente castigar sólo a los malos agricultores, a los latifundistas improductivos, y acabó por destruir la estructura agraria productiva chilena.

¿Cómo una simple figura delictiva que resguarda el honor de las personas puede transformarse en un medio para silenciar la prensa? La respuesta es sencilla: por causa de la amplitud del precepto y de las posibilidades discrecionales que entrega a la autoridad. La norma castiga la imputación de un hecho falso (el añadido de "acto falso" nada agrega conceptualmente habiendo). Para que el periodista incurra en delito, bastaría que afirmara de alguien un hecho falso. Cualquiera hecho falso, atribuido intencionalmente o no. La ley penaría entonces el error periodístico, el error tipográfico, el error numérico, el error de referencia, la confusión

de nombres y, en fin, la equivocación lisa y llana en el actuar apresurado de los diarios.

Si el hecho falso constituye una ofensa, debiera perseguirse la injuria. Si el hecho falso perjudicial se comete por negligencia culpable, cabe indemnización civil. Pero la simple equivocación periodística no puede constituir delito. Penar el error publicado equivale a exigir de la prensa una infalibilidad imposible, una medrosidad tal que las noticias no podrían darse sino como eco de documentos oficiales.

Sorprende que se vaya ahora a sancionar con severidad extrema el error periodístico, cuando se han cometido grandes errores policiales recientes cuya peligrosidad no se compara con los que se atribuyen a la prensa.

Pero el precepto represivo sigue adelante. También puede ser delito la publicación de la verdad, pues no sólo se castiga la imputación de un hecho falso. El artículo añade "o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o su familia". Tenemos entonces que la

imputación de un hecho verdadero, no injurioso, que cause "injustificadamente" daño, también es delito. ¿Cómo apreciar hasta dónde se justifica el perjuicio que puede recibir alguien por la publicación de hechos que realmente ha cometido? Todo es discrecional, amplio e impreciso. El margen para la discrecionalidad y para la arbitrariedad queda peligrosamente abierto.

Innecesario parece advertir que estas columnas creen poder estar a salvo del alcance del precepto que comentamos, a menos que se lo emplee torcidamente por jueces o gobernantes futuros. Pero el principio debe preocupar no sólo a los diarios más susceptibles de ataque, sino a todos los diarios y a la ciudadanía entera. Por desgracia, la redacción apresurada del precepto abre la puerta a posibles vulneraciones a la libertad de opinión y a la de expresión. La defensa de la honra es indispensable, pero mediante instrumentos legales que no comprometan la esencia de las libertades públicas.

Malos días

(28 de marzo de 1982)

Se analizan en el comentario los pilares básicos del régimen del Presidente Pinochet, y los problemas que ha debido afrontar, derivados de la falta de comunicación entre la ciudadanía y el equipo de personas que trabajan dentro del gobierno.

La Semana Política

FUNDAMENTOS DEL RÉGIMEN

El régimen que encabeza el Presidente Pinochet cuenta, a todas luces, con tres fundamentos esenciales.

Antes que cualquier otro, hay que poner el pilar básico del Ejército y de las Fuerzas Armadas, en su conjunto, con todo lo que ello significa de patriotismo esencial, de sentido nacional, de visión a largo plazo de los intereses chilenos y de virtudes que, a lo largo de la historia, han sido soporte, justificación y espíritu de la raza misma.

Además de las columnas armadas, el régimen cuenta con dos factores determinantes para la voluntad de los civiles y que influyen en el apoyo ciudadano al Gobierno.

El primero de tales factores es el anhelo de paz y orden que surgió a raíz de la crisis de nuestra democracia tradicional y de las tumultuosas experiencias de la década de 1960 y de los primeros años de la siguiente. Un deseo de tranquilidad, de vuelta al trabajo productivo y de recuperación de la confianza en el futuro hicieron que hasta los ciudadanos poco afectos a los regímenes autoritarios y formados en el dogmatismo democrático tradicional aceptaran con alivio el nuevo siste-

ma, luego de las frustrantes experiencias del pasado reciente.

El otro factor de apoyo fue un programa o modelo económico de libertad que —pese a los grandes sacrificios que impuso— significó desarrollo económico y progreso individual en amplios sectores. Este modelo se presentó como una concepción orgánica y global capaz de transformar el país, orientándolo hacia la explotación adecuada de sus riquezas naturales, hacia la ampliación de su comercio internacional y hacia la conquista de una posición respetada tanto por su seriedad como por el grado de progreso de sus habitantes.

La presencia de estos tres fundamentos favoreció un ánimo de colaboración nacional pocas veces visto. Los intentos de oponerse al avance indiscutible del régimen hacia sus metas resultaron inútiles. Ni siquiera ha sido posible organizar una oposición viable, aparte de fallidas intentonas aisladas. El mismo ánimo de colaboración se tradujo en solidaridad frente a las incomprendiones extranjeras, en el silenciamiento virtual de los antiguos políticos no opositores y en la aceptación de que las decisiones se adoptaran por el Presidente de la República, la Junta de Gobierno y

los ministros respectivos, sin consulta y hasta sin información de la ciudadanía.

El país se ha gobernado por un equipo humano selecto pero reducido, que no suele dar cuenta de sus actos y que nunca anticipa sus decisiones. La modalidad de trabajo pareció eficaz mientras hubo confianza plena en la idoneidad de la conducción política. Tal confianza se acentuó, por lo demás, gracias a éxitos sonados en consultas plebiscitarias y en otros pasos audaces que confirmaron la magnitud de la autoridad presidencial —institución que se veía restaurada en su majestad republicana, después de años de vacilaciones y coqueteos demagógicos— y a la convicción de que el país debía dejarse llevar por los claros y firmes rieles de una concepción patriótica, social y económica orientada a hacer de Chile una gran nación, meta esta última fijada en la Declaración de Principios del Gobierno de 11 de marzo de 1974.

MALOS DÍAS

Sin duda, atravesamos por malos días. El reducido y selecto equipo de Gobierno se está viendo aislado. La oposición, caracterizada por el señor Cardenal, no tiene ya virtualmente diálogo posible con las autoridades, salvo ocasionales palabras de buena crianza. Aunque nadie podría asegurar que se está formando un amplio frente de oposición con carácter generalizado, el llamamiento de Tucapel Jiménez sigue teniendo sentido. La Iglesia impulsa una ambigua "gran misión joven" destinada, entre otras cosas, a denunciar nada menos que la índole antievangélica de los conceptos

de orden, autoridad, política, nación, seguridad... que corresponderían a una especie de nueva cultura que se estaría construyendo desde el Gobierno. No se sabe todavía el alcance de estas operaciones estratégicas, pero la denuncia del Cardenal acerca de la "crisis moral" —hecho, en buena parte, innegable— deja la impresión de que los remedios opositores contra tal crisis no dejarán de adoptar las banderas que fracasaron con nuestra democracia tradicional después de una orgía de demagogia, ideologismo e irresponsabilidad. No hay, sin embargo, que menospreciar la importancia de esta fermentación opositora dirigida por manos hábiles y tal vez poseedora de generosos recursos.

El aislamiento del equipo de Gobierno no sólo se da en relación a los opositores. La ausencia sistemática de comunicación fluida con la ciudadanía, el desprecio por la capacidad reflexiva ajena y, por tanto, la repetición de consignas y razonamientos bastantes primitivos, la actual desconfianza hacia la prensa, el calificativo de "gasfiteros" para quienes opinan de cuestiones económicas generales sin formar parte del círculo de iniciados y, sobre todo, el régimen de acción por sorpresa en materias que afectan a intereses personales y familiares importantes de los ciudadanos, están dejando al equipo de Gobierno sin defensores entusiastas entre los que fueron y siguen siendo claros partidarios del pronunciamiento del 11 de septiembre.

Lo que es más grave aún es escuchar que el sigilo y la renuencia a las explicaciones no derivan de un mero dogmatismo desprecia-tivo sino de una posible falta de ca-

pacidad política. A juicio de muchos —y es obligación decirlo—, las cosas se están haciendo mal, se están manejando con una rudeza de inexpertos, lo que provoca desánimo en los partidarios del Gobierno y ponen a éste en peligro de quedar sin más defensores que sus aguerridos soldados a la hora en que "misiones juveniles" u otras iniciativas semejantes solivianten al pueblo, el que se encontrará en un clima áspero de recesión y desempleo.

Se está manejando mal el tema de la seguridad de las personas. Algo ocurre en los servicios de policía. No es propio de un Gobierno que se apoya en el anhelo de orden y paz tener que dar cuenta de tantos asesinatos sin móvil conocido y de tantas sospechas acumuladas. Sabido es que la justificación elemental de cualquier gobierno es el resguardo del orden. Y no hay orden cuando la vida se arriesga en la calle de la manera que está ocurriendo hoy, no ya en refriegas con extremistas, no en actos de guerra, sino en liquidaciones de cuentas que se conocen en las mafias extranjeras, pero que no habían existido hasta ahora entre nosotros.

No se está manejando bien el tema económico. Luego de casi un año de preparar al país para el ajuste recesivo, de dar seguridades de que el Fisco estaba sano y de culpar con las expresiones más duras a agricultores, industriales o grupos financieros por haber incurrido en exceso de ambición o en derroches, y haber gastado más de las entradas, sorpresivamente el señor Ministro de Hacienda anuncia al país la existencia de un importante déficit fiscal y esboza sin explicaciones suficientes las causas de éste y los

tributos nuevos que gravarán a los contribuyentes. No aparece, entonces, distinta la situación deudora del Fisco de la que mereció el vilipendio de individuos y grupos particulares. La única diferencia es que los particulares pagan su imprevisión con la quiebra y la prisión, en tanto que el Fisco reclama con toda tranquilidad mayores impuestos.

EL PRESIDENTE

La difícil situación no significa, por cierto, que deba darse oído a "misiones" o evocaciones de equívoco signo libertario, pues todo ello representa el fracaso del pasado. El instinto de paz, de orden y de seguridad de los ciudadanos coincide con el régimen autoritario imperante, no con veleidades demagógicas o revolucionarias. El esquema económico de libertad, el modelo económico social de las modernizaciones y del enriquecimiento espiritual y material de las personas debe quedar en pie, cualesquiera sean los errores de manejo táctico que le son accidentales, aunque podrían hacer peligrar el prestigio del modelo mismo. Por último, el Ejército con su corona de virtudes históricas y las demás ramas gloriosas de las Fuerzas Armadas tienen más que nunca un papel decisivo en este tiempo adverso.

El Presidente de la República ha sabido sortear con mano diestra situaciones dramáticas. Espontáneamente el país se vuelve hacia él, hacia su autoridad de Jefe del Estado, hacia sus poderes constitucionales y hacia la prudencia con que puede y debe ejercer el mando heredado de sus ilustres predecesores.

El problema policial reclama la acción directa del Jefe del Estado. Hay allí cierta multiplicidad de servicios y aparentemente alguna contradicción de atribuciones. Han ocurrido hechos que no son dignos del país y que merecen la aplicación del termocauterio a los responsables.

El Presidente sabe reaccionar con las medidas y con las personas idóneas en circunstancias de crisis. En el problema policial y de seguridad todo parece indicar la presencia de circunstancias críticas. La persistencia de éstas perjudica al Gobierno, lesiona la paz interior y compromete, además, la seguridad exterior. No hay que olvidar que nuestras relaciones exteriores normales dependen de que se compruebe cierto nivel de derechos humanos, y que el manejo desacertado o ilícito del problema policial puede acarrear consecuencias dolorosas también en el campo internacional. Los sectores sinceramente patrióticos confían en la ya clásica y oportuna reacción presidencial en este frente.

En el campo económico no ha

existido información suficiente, y ahora se exige a un área ciudadana influyente (a quienes ganan más de 10 mil pesos mensuales de sueldo) un sacrificio de bastante consideración, el que se suma a los costos de los elevados intereses, de los negocios difíciles y del desempleo. Aquí también se espera la reacción presidencial, no para cambiar la línea básica ni para alterar el modelo de economía abierta y libre, pero sí para ir más allá de las deliberaciones con los círculos cerrados de las consultorías oficiales y encontrar fórmulas que aseguren un manejo más eficiente y convincente del difícil problema financiero y económico. S.E. tiene a su disposición una lista no breve de ex Ministros de Hacienda y de Economía que han servido en este régimen.

Conversaciones conjuntas o separadas con todos aquellos que han contribuido al establecimiento y al éxito del modelo debieran ayudar a S.E. a encontrar salidas razonables dentro del marco de su política. Las crisis agrandan a los grandes gobernantes. Este debe ser ahora el caso.

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

| | |
|--|------|
| De la emergencia a la transición (17 de septiembre de 1978)..... | 307 |
| Una marcha cautelosa (12 de noviembre de 1978)..... | 311 |
| El valor de la función pública (4 de febrero de 1979)..... | 315 |
| Libertad de expresión en el futuro institucional (18 de febrero de 1979)..... | 319 |
| Un difícil proceso de comunicación (15 de julio 1979)..... | 323 |
| Siete metas sociales básicas (16 de septiembre de 1979)..... | 327 |
| Los comunistas (25 de noviembre de 1979)..... | 331 |
| Avances en varios frentes (10 de febrero de 1980)..... | 335 |
| Corrientes de opinión (30 de marzo de 1980)..... | 339 |
| Municipalidades distintas (15 de junio de 1980)..... | 344 |
| Derecho a la libertad responsable (29 de junio de 1980) | 348 |
| Análisis de una crisis (13 de julio de 1980)..... | 352 |
| Proyecto constitucional (20 de julio de 1980)..... | 356 |
| Modelo y moral (23 de noviembre de 1980) | 360 |
| Políticas universitarias (30 de noviembre de 1980)..... | 364 |
| Nacionalismo y burocracia (21 de diciembre de 1980)..... | 368 |
| Regla de la unanimidad (8 de marzo de 1981)..... | 372 |
| Colegios profesionales (29 de marzo de 1981)..... | 375 |
| El factor moral (17 de mayo de 1981) | 379 |
| Necesidad de la información (7 de junio de 1981)..... | 383 |
| Servicios de inteligencia (21 de junio de 1981)..... | 387 |
| El marco del Estado (5 de julio de 1981)..... | 391 |
| Ejército y Nación (20 septiembre de 1981)..... | 395 |
| Actividad económica (8 de noviembre de 1981)..... | 399 |
| Educación, un sector prioritario (24 de enero de 1982)..... | 403 |
| Dudas e incertidumbres (7 de marzo de 1982)..... | 407 |
| Regla constitucional discutible (14 de marzo de 1982)..... | 411 |
| Malos días (28 de marzo de 1982)..... | 415□ |